



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL
MAESTRÍA EN TRABAJO SOCIAL**

“ESTOY DE VUELTA...”

***Implicancias en la Revinculación Sociofamiliar de Jóvenes
Privados de su Libertad en el Contexto Actual”.***

Autor:

Lic. Mariano Eduardo Colombo

Directora de tesis:

Mag. M. Pilar Fuentes

La Plata, Marzo de 2017.-

TRIBUNAL DE DEFENSA



el sueño y la libertad

Instituto de Seguridad Manuel Belgrano- Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

¿Qué nos pasa antes, durante y después del Instituto?

Publicado el 18-10-2008 /Edición N° 11

Vivir en familia

Primeros fríos del otoño, casi sin ánimo de hacer nada, bajamos al patio. En estos días se fueron muchos pibes y los que quedan ya no tienen ni ganas de jugar a la pelota. Yo estoy sentado enfrente de ellos con un pibe llamado Vicente quien me dice: "¡Mirá esas caras de desanimados!". Los miro y pienso qué loco es estar así encerrado, extrañando a los seres queridos porque, al fin y al cabo, la mayoría de los que roban lo hacen para ayudar a sus familias... Pero no pensamos que la familia prefiere tal vez tenerlo a uno en casa que comprar algo de lo que puede prescindir. Mal ahí que nos tenga que pasar esto que nos pasa para darnos cuenta de que no está bien hacer sufrir a la familia que, muchas veces, quiso que cambiáramos pero no lo hicimos por miedo a no ser aceptados por nuestros "amigos" que, muchas veces, nos valoran sólo por lo material y, en estos momentos en que los necesitamos, se borran.

Leandro B.

Sobre la discriminación al salir de un instituto

Cuando uno sale de un instituto, la gente te mira mal y dice: "¡Ahí salió el chorro, va a robar de nuevo!" ... pero la gente no sabe que, a veces, uno se quiere rescatar y eso a uno le da bronca porque la gente no sabe por qué robamos. Algunos roban porque no tienen para comer, algunos roban para la droga y algunos, porque no pueden conseguir trabajo. Por eso no tienen que discriminar a los pibes, porque muchos de los que roban ayudan a los que no tienen. Algunos tienen mucha plata y roban por placer. Ya sabemos que no es bueno robar pero nosotros no nos dábamos cuenta de lo que hacíamos. Esto lo escribió un pibe que sufrió mucho

Matías T.

RESUMEN

La presente propuesta de trabajo está enmarcada a partir de la inserción profesional desarrollada como integrante del Servicio Social, durante los años 2003 a 2008, en el entonces denominado Instituto de Régimen Cerrado “Manuel Belgrano” de la Ciudad Autónoma de Bs. As, dependiente de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia.

El desarrollo con el que se intenta abordar esta problemática; se encuentra enmarcado en los procesos de destitución social de los jóvenes, particularmente en aquellos señalados como **“adolescentes en conflicto con la ley penal”**, atendiendo las **condiciones actuales de encierro**.

Tal delimitación del campo temático, intenta abordar la multiplicidad de aquellos “factores” que conllevan la disposición de medidas tutelares con privación de la libertad de adolescentes en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, por parte del poder judicial, en *Institutos de Máxima Seguridad*.

La situación que será objeto de análisis se enmarca bajo lo establecido por el Régimen Penal de la Minoridad que establece el tratamiento y las medidas de privación de libertad, el cual considero *“habla de ciertos consensos”*; y que incluye además el modo en que los distintos actores, que conformamos lo que se llama el “sistema de menores”, desarrollamos la práctica profesional.

RESUME :

La présente proposition de travail s'inscrit dans une expérience professionnelle développée en tant que travailleur du Service Social, pendant les années 2003 à 2008, dans un institut de régime fermé « Manuel Belgrano » de la ville autonome de Buenos Aires, relevant du Secrétariat National de l'enfance, adolescence et famille (SENNAF).

Le développement, avec lequel on cherche à aborder cette problématique ; est encadrée dans les processus de rejet social des jeunes, en particulier dans ceux qui sont désignés comme "***adolescents en conflit avec la Loi***". ***Les processus seront analysés en fonction des conditions actuelles de fermeture.***

Cette délimitation du domaine thématique, s'efforce de résoudre la multiplicité de ces « facteurs » qui dirigent la prestation de mesures de protection avec la privation de liberté des adolescents dans la région de la ville de Buenos Aires, par le pouvoir judiciaire, dans les *instituts de sécurité maximale*.

La situation qui sera l'objet d'analyse est encadrée en vertu des dispositions du régime pénale de la minorité qui fixe le traitement et les mesures de privation de liberté. Je considère que celles-ci « *parlent de certains consensus* »; et cela inclut aussi la manière dont les différents acteurs, - qui ont formé ce qu'on appelle le « système du mineur »-, développent la pratique professionnelle.

AGRADECIMIENTOS

La presente Tesis, se desarrolla en el marco del cursado de la Maestría en Trabajo Social de la Facultad de Trabajo Social de Universidad Nacional de La Plata.

A pesar de los contratiempos y vicisitudes que se han sucedido en este largo proceso, en este momento tengo que brindar mi mayor agradecimiento a muchas personas, a las que aunque no haga mención explícita, las tengo bien presentes en este particular momento ya que me han brindado su apoyo, alentado en mi camino y también me estimularon a que este trabajo sea una realidad hoy.

En primer lugar a mi familia más directa, pero muy especialmente a Marina; compañera y apoyo; esposa y madre, colega y luchadora.

Dedico también este espacio a mis amigos, siendo con algunos de ellos colegas y compañeros de espacios laborales.

A los profesionales que conocí en el Instituto Manuel Belgrano, más especialmente equipo docente que me abrieron la posibilidad de ingresar al sistema de educación en contexto de encierro y del servicio social, en donde inicié mi ejercicio profesional.

Con todos ellos, con otros referentes comunitarios, con “esos pibes” adultos hoy, a quienes en “libertad” volví a contactar; de una u otra manera he podido intercambiar miradas y saberes que me han servido en el curso el posgrado poder determinar y llevar adelante esta tesis.

A mi directora Pilar, quien conociera en diferentes momentos de mi formación y que siempre me sostuvo y no me dejó bajar los brazos en el camino iniciado allá ... hace tiempo.

Sepan, quienes lo lean, que no me resulta sencillo escribir estos párrafos. Sé que en este escrito, falta hacer lugar a muchas menciones, pero quedan conmigo; porque han estado en el proceso de elaboración del trabajo que hoy es una realidad. No podría dejarla/os a un lado, son muchas las experiencias, vivencias y emociones compartidas que me impulsaron a transitar por este camino y que han sido significativas en este proceso de formación profesional.

Finalmente, y en este contexto tan particular, no puedo dejar de pensar y sumar en estos agradecimientos a quienes en la actualidad comparto mi quehacer profesional, incluyendo a todos con quienes elegimos y sigo compartiendo desde el ejercicio profesional, la lucha en defensa de la Universidad Pública, espacio que en primer lugar posibilitara y garantizara mi formación de grado; desde donde a partir del estímulo y el vínculo particular de la docencia me apoyara y brindara esta instancia de posgrado y sea en este presente el lugar que decido sostener como trabajador.

Quizá perder a veces mi lugar
quizá surgir de un "ya no puedo más"
y me convenza para siempre de mi condición
de boca libre y pies pa' caminar

A desalambrar, a desalambrar...

Alejandro Balbis

ÍNDICE GENERAL

Introducción

Algunas consideraciones previas	Pag.7
--	--------------

Justificación del tema de investigación

Planteo del Problema	Pag. 12
Objetivos Propuestos	Pag. 13
Hipótesis del Trabajo	Pag. 14
Estrategia Metodológica	Pag. 14

Capítulo 1 **“Acerca de Ser Niño o Menor”**

1.1 Ta – te – tí suerte para...?	Pag. 19
1.2 De Niños no tan Niños; de Menores	Pag. 22
1.3 Por estos tiempos	Pag. 34
1.4 Esos chicos	Pag. 40

Capítulo 2 **“Defende la rebelión que no altere la rutina el poeta en la leonera, la mujer en la cocina”**

2.1 Acerca de los dispositivos del Estado para jóvenes en conflicto con la ley penal.....	Pag. 52
2.1.1 Respecto de las características y procesos que se dieron en el Instituto Manuel Belgrano	Pag. 58
2.2 La privación de libertad como respuesta al delito	Pag. 60
2.2.1 Un acontecimiento más que mueve el péndulo	Pag. 73

Capítulo 3 **“Soy lo que dejaron”**

3.1 Breve Introducción.....	Pag. 79
3.2 A sus voces... Algunas conceptualizaciones	Pag. 81
3.3 Identidades que se construyen	Pag. 84
3.3.1 Otras identidades que se construyen desde el contexto de encierro....	Pag. 87
3.4 La Revinculación sociofamiliar y una identidad por construir.....	Pag. 92

Reflexiones finales	Pag. 99
Bibliografía Reseñada.....	Pag. 107

Anexos:

Nº1 – Cuadros Comparativos Proyectos de Ley.....	Pag. 114
Nº2 – Síntesis Cronológica Institucionalización de la Niñez/Infancia.....	Pag. 118

INTRODUCCIÓN:

Algunas consideraciones previas.

El trabajo que aquí se presenta, se originó partir de la inserción profesional desarrollada como integrante del Servicio Social, durante los años 2003 a 2008, en el entonces denominado Instituto de Régimen Cerrado “Manuel Belgrano” de la Ciudad Autónoma de Bs. As, dependiente de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (en adelante SENNAF).

El tiempo transcurrido, el distanciamiento del ámbito laboral y las sucesivas reformas que en este dispositivo se han llevado adelante, estructuran la lectura respecto del atravesamiento y las implicancias que esta vivencia ha impreso en el proceso de revinculación socio-familiar de los “adolescentes en situación de vulnerabilidad socio penal”, con base documental del periodo señalado.

El trabajo cotidiano desarrollado en una institución de Régimen Cerrado con una población de jóvenes, cuya franja etaria oscila entre los 16 a los 19 años, que en su mayoría poseen más de una causa penal, y cuya internación se encuentra bajo dependencia judicial; resultó un insumo de gran interés para la investigación y reflexión teórica en dos dimensiones; en primer lugar respecto del fenómeno¹ y en segundo lugar en torno a las prácticas profesionales y los intentos de explicación como encuadre de una lectura crítica de las mismas.

El desarrollo con el que se aborda esta problemática; se encuentra enmarcado, a partir de lo planteado por Duschatzky (2002), en los procesos de destitución social de los jóvenes, particularmente en aquellos señalados como **“en conflicto con la ley penal”**, atendiendo las **condiciones actuales de encierro**.

Se identifican la multiplicidad de “factores” que conllevan la disposición de medidas tutelares con privación de la libertad de los jóvenes en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, por parte del poder judicial, en los dispositivos

¹ Se entiende por fenómeno aquella dimensión constitutiva de la realidad que por su facticidad y el carácter inmediato que presenta impone explicaciones, prácticas y usos que de tomarlas acríticamente invisibilizan el problema. Kosik, K., (1990:25)

existentes; resultando para el presente trabajo de investigación aquellos que como modalidad de internación resultan ser denominados: *Instituto de Máxima Seguridad*.

Tomando los aportes de Garello (2010:3), “es el Derecho, como sistema normativo, el que materializa la visión social del delito, así como sus formas de control y punición.”

Por lo cual la situación que será objeto de análisis se enmarca bajo lo establecido por el Régimen Penal de la Minoridad (Decreto Ley N° 22.278) que establece el tratamiento y las medidas de privación de libertad, el cual considero “*habla de ciertos consensos*” (implícitos, tácitos o no tanto), que trasciende la ley en particular; y que incluye además el modo en que los distintos actores, que conforman lo que se llama el “sistema de menores”, desarrollan las prácticas profesionales.

Por otra parte, aunque en el mismo sentido de lo arriba expresado, se pretende destacar el carácter controvertido del *fenómeno en cuestión*, como también la intensidad que de manera cíclica el mismo viene tomando en los últimos años, con la intención de superar el nivel de discusión “mediática” creadora de agendas, que sostiene una suerte de “terrorismo informativo” al decir de D. Puebla (2008).

Se considera que la “instalación del debate” sobre seguridad-inseguridad, edad de imputabilidad; como también sobre la acción de *policía*, *justicia* en cuanto a la criminalización, responsabilización, de las consideradas manifestaciones de la “cuestión social”², insta a un mayor debate desde el Trabajo Social, para la construcción de argumentos con *rigor científico*, contemplando también los aportes para el diseño de políticas públicas acordes a la vigencia y actualidad del problema.

Esto se deriva en el hecho que la disposición de medidas con privación de libertad, no siempre responden a ser las *últimas en adoptar*, ni contemplan el *menor tiempo posible*, tal como establecen los artículos 12, 37 y 40 de la Convención Internacional de los Derechos de Niña/os y Adolescentes (en

² Sobre “Cuestión Social” se suscribe la conceptualización realizada por Parra, quien la presenta como las manifestaciones de los antagonismos políticos sociales y culturales anclados en la contradicción capital-trabajo. Parra, Gustavo. Antimodernidad y Trabajo Social. Origen y expansión del Trabajo Social Argentino. Luján. UNLu. Cap. I. 1999

Ver entre otros: Castel, R;1997, 13-23;lamamoto; Marilda; 2003:41, Netto, José Paulo; 1992:7; Rosanvallon, P(1995:pp.7-12)

adelante CIDN); situación que se coloca en tensión, en lo singular, con la perdurabilidad del carácter discrecional que “asiste” en las decisiones al Juez de Menores, y que sin duda coloca en el plano de la particularidad la tensión existente para la adecuación legislativa aún pendiente en materia del Régimen Penal Juvenil.

Tal situación refuerza la necesidad de hacer referencia al *contexto actual* pretendiendo, desde una perspectiva de totalidad³, establecer vínculos con los procesos de reformas socioeconómicas y jurídicas iniciados en el marco de la expresión de las agudas manifestaciones de la “cuestión social”, el cual sitúa en particular a los jóvenes y más aún a los de sectores pobres, en un lugar de extrema vulnerabilidad.

Es indudable que se requiere de una visión amplia e integradora que trascienda la naturalización de los hechos y fenómenos sociales, y así permita considerar la responsabilidad del Estado, en tanto actor central en tanto que detenta formalmente el monopolio de la violencia legítima.

Pensar acerca del proceso de revinculación socio-familiar de los jóvenes que fueron privados de su libertad; conlleva pensar acerca de las estrategias de intervención profesional del Trabajo Social.

Resulta necesario, por un lado, identificar y hacer explícitos los diferentes obstaculizadores, que *no son simplemente de carácter socioeconómico*, que influyen de manera significativa en el proceso que atraviesan tanto los jóvenes, como los “referentes familiares”, con los que se cuenta para la conformación de un “proyecto de vida autónomo y alternativo”.

Mientras que por otro lado, estos límites que permanentemente requieren ser sorteados hacen referencia a la existencia de instituciones que,

³ Totalidad no significa todos los hechos. Totalidad significa: “realidad como un todo estructurado y dialéctico, en el cual puede ser comprendido racionalmente cualquier hecho (clases de hechos, conjunto de hechos) reunir todos los hechos no significa aun conocer la realidad, y todos los hechos (juntos) no constituyen aún la totalidad. Los hechos son conocimiento de la realidad si son comprendidos como hechos de un todo dialéctico, esto es, si no son átomos inmutables, indivisibles e inderivables, cuya conjunción constituye la realidad, sino que son concebidos como partes estructurales del todo. Lo concreto, o sea la totalidad, no es, por tanto, todos los hechos, el conjunto de ellos, el agrupamiento de todos los aspectos, cosas y relaciones, ya que en este agrupamiento falta aún lo esencial: la totalidad y la concreción”. Kosik, K. (1990:55)

bajo el actual contexto, no dan respuesta a las demandas y necesidades que los jóvenes, “nuestros jóvenes”⁴ presentan.

La estructura de la presente tesis, consta de tres apartados; en primer lugar se da cuenta del estado de la cuestión y la caracterización del contexto actual (periodo 2003-2008) en el que se enmarca.

Al mismo tiempo se aborda una mirada acerca del delito; tanto en su definición como en los paradigmas de análisis e intervención, recuperando los “cambios” de miradas de menores a niños, a partir del *resistido pasaje* de la Doctrina de Situación Irregular (DSI) a la Doctrina de Protección Integral (DPI) con la sucesivas reformas legislativas y adecuaciones de las estructuras técnico administrativas del Estado.

Cabe tener en cuenta que, aún resta disputar reformas jurídicas e institucionales que avalen las garantías de proceso en materia de responsabilidad penal juvenil.

En un segundo lugar, el eje estará centrado acerca de los dispositivos del Estado para jóvenes en conflicto con la ley penal, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires; particularizando en uno de los dispositivos dependiente del Programa Nacional de Justicia para Jóvenes en Situación de Vulnerabilidad Socio Penal (PRONAJU-SENNAF): el Instituto “*Manuel Belgrano*”.

Como sostiene Garello (2010:4);

“los institutos de seguridad –o institutos de *menores* como se los denomina en Argentina, dispositivos específicos de control socio-penal aplicados a la población infanto juvenil, presunta infractora a la ley penal. Fueron la estrategia predilecta del paradigma tutelar y continúan desarrollándose actualmente, luego de sancionada la Ley Nacional de Protección de Derechos de la Infancia y de una regulación internacional en esta materia que no da lugar para continuar indiscriminadamente con su aplicación.”

Luego, en el último apartado, se recupera el proceso de construcción de Identidades, a partir de las vivencias y marcas de la privación de libertad.

Compartiendo la comprensión de la identidad a partir de los siguientes términos:

⁴ El sentido por el que reafirmo el posesivo “*nuestros jóvenes*” pretende contrastar con el permanente acto de expulsión a la que son sometidos, al tiempo que vincular con las distintas dimensiones que se entrelazan para el abordaje de esta problemática.

“La identidad del sujeto se va configurando desde el nacimiento y se va haciendo múltiple; en tanto múltiples elementos del orden social se van incorporando como puntos de referencia para el Sujeto, como polos de identidad.” (UNLP Trabajo Social IV “Procesos de identidad e identificación” Ficha de Cátedra; 2013:2)

Al mismo tiempo la posibilidad de construir de una nueva identidad desde lo que supone el proceso de revinculación socio familiar a partir del “egreso institucional” teniendo en cuenta las diferentes condiciones y posibilidades.

***“ del encierro una flor...
de las rejas una esperanza...”***

*Camilo Blajakis.
La venganza del cordero atado*

JUSTIFICACIÓN DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN

El tema seleccionado es, sin dudas controvertido y ha tomado intensidad en los últimos años, sucumbiendo en muchas oportunidades en expresiones prejuiciosas. En este trabajo, por el contrario, se propone abordarlo desde un debate que se aleje de especulaciones pueriles, habitualmente carentes de argumentos de rigor científico.

En tal sentido, algunas de las preguntas, que delimitaron la investigación, y resultaron orientadoras en el proceso de elaboración de esta tesis han sido formuladas en estos términos:

**¿De qué manera el diseño de las políticas públicas destinadas a los adolescentes en situación de “vulnerabilidad socio penal” o en conflicto con la ley penal garantiza la restitución de derechos?*

**¿En qué medida las intervenciones que el Estado lleva adelante contribuyen a un proceso de responsabilización o revictimización de los jóvenes privados de su libertad?*

El problema que está en cuestión y sigue interpelando las prácticas de intervención en esta temática, fue propuesto como una estrategia que permita orientar nuevas consideraciones teóricas, intentar establecer relaciones empíricas al menos de segunda fuente, y especialmente, recuperando la experiencia profesional.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

Tal como se hiciera mención anteriormente, cabe tener en cuenta que esta investigación se enmarca temporalmente entre 2003 a 2008; periodo en el que se sucedieron acontecimientos tales como: la derogación, de la antigua ley de Patronato (Ley N° 10.903), como también el proceso de sanción, reglamentación y adecuación de las instituciones al Paradigma de la Protección Integral de Derechos; aunque esto último pueda verse en cierto modo como aún en carácter de transición teniendo en cuenta la dimensión que alcanzara el anterior modelo de comprensión/intervención.

Ante esta situación queda aún irresuelta la cuestión de la Responsabilidad Penal Juvenil, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, donde rige el Decreto Ley N° 22.278 que se inscribe en el Paradigma de la Situación Irregular, por lo cual el proceso de adecuación legislativa y de las prácticas ligadas a las instituciones refuerza el estado de transición.

En este contexto se centrará el problema objeto de estudio en torno a las implicancias respecto del abordaje con adolescentes privados de su libertad, por causas penales, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires:

**¿De qué manera el tránsito de los “adolescentes en situación de vulnerabilidad socio penal” por instituciones de privación de libertad incide en la construcción y sostenimiento de los procesos de revinculación socio-familiar?*

Tal interrogante pone en cuestión otros tantos que colocan en tensión los sustentos teóricos, normativos; como también diseños de políticas públicas e institucionales, respecto de “aquello que se quiere corregir, encausar o evitar que se propague”.

OBJETIVO GENERAL:

Indagar acerca de la relación existente entre el tránsito por Institutos de Régimen Cerrado en los “adolescentes en situación de vulnerabilidad socio penal” y la revinculación socio-familiar.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

*Analizar las estrategias diseñadas en el marco de la intervención profesional para “la externación” tendientes al logro de permanencia de los jóvenes en su grupo de referencia.

*Identificar a partir de los marcos normativos vigentes los factores que inciden en el proceso restitución de derechos con los adolescentes en situación de “vulnerabilidad socio penal”.

*Indagar la incidencia de las “marcas del encierro” en el proceso de revinculación sociofamiliar.

HIPOTESIS INICIAL:

La hipótesis que guía el desarrollo que ordenó la indagación fue:
La experiencia de privación de libertad condiciona negativamente a los jóvenes en su proceso de construcción y sostenimiento de proyectos de vida alternativos y autónomos.

ESTRATEGIA METODOLÓGICA:

Siguiendo los planteos Rosana Guber⁵ y de Pierre Bourdieu⁶, es a partir de preguntas el modo de acceder al “universo de significaciones de los actores”, ya que es a través de la entrevista en tanto relación social donde se pueden encontrar de manera dialógica en torno a la vivencia, a la experiencia diferentes subjetividades y por lo tanto problematizar la mirada y la construcción del objeto de investigación.

La elección de la entrevista abierta como parte del diseño metodológico, estuvo centrada en una selección de informantes claves, a quienes durante el periodo 2003-2008 se les dictara medida de privación de libertad por disposición judicial en el Instituto Manuel Belgrano por periodos con duración diferenciada; siendo este el tiempo y espacio en donde (como profesional de equipo técnico) acompañara durante su internación y el transcurso de los diferentes momentos durante estos 5 años, reingresando o no a estos dispositivos.

Pese a la desvinculación con este espacio laboral, tanto como con quienes son parte del objeto de estudio, esta selección de informantes sostiene la posibilidad de hacer de los sujetos el eje de la investigación.

⁵ Guber, Rosana El salvaje Metropolitano. Reconstrucción del conocimiento social en el trabajo de campo. Paidós 2004.

⁶ Bourdieu, Pierre. El oficio del sociólogo. En Tonon, Graciela (comp.); *La Entrevista. Las Técnicas de Actuación Profesional del Trabajo Social* Espacio Editorial 2005.

Dar cuenta de este fenómeno, necesariamente supone tener presente la dimensión socio – histórica en el que se inscribe; siendo que la situación de las familias de los adolescentes que conformaban la mayoría de la población de este Instituto, residían bajo situaciones de pobreza estructural y en gran medida territorialmente se ubicaban en el conurbano bonaerense, destacándose tanto la zona sur, como el partido de La Matanza; mientras que quienes residían en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante CABA), mayoritariamente eran provenientes de asentamientos como son la Villa 31, Villa 11-14, Cildañez, Villa 15 Ciudad Oculta, Villa 21 –Lugano, Zabaleta y Barrio Piedrabuena.

Se expresaba en un trabajo elaborado por el conjunto de trabajadores sociales del equipo técnico en el año 2006, que el contexto en el que se desenvuelven nuestros jóvenes, revela condiciones de vulnerabilidad en un sentido amplio, es decir social, económico, emocional y cultural. En consecuencia el proceso de marcada desafiliación por la exclusión de los sistemas familiar, educativo, de la salud y del trabajo era visto como otro factor que incidía en la falta de inscripción en formas estables de socialización. (Arredondo y otros; 2006)

Se constata la existencia en porcentajes significativos, de ausencia de documentación personal (inexistente o desactualizada), la no concurrencia al sistema educativo formal especialmente en el nivel secundario, la pérdida de referentes familiares en situaciones violentas (muertes en enfrentamientos policial o barriales), la ausencia de padres o hermanos mayores (varones) por estar privados de libertad desde su primera infancia; como así las desvinculaciones parentales; y el consumo de sustancias con consecuente el deterioro de la salud.

Por todo ello se incluyen la reconstrucción de las *historias de vida*, en tanto relato biográfico de jóvenes, durante el tiempo que duró la medida judicial por la cual se disponía su privación de la libertad en el Instituto de Menores “*Manuel Belgrano*” de la Ciudad de Buenos Aires.

No resultó sencillo recontactar a estos jóvenes (adultos con promedio de 30 años en la actualidad); la búsqueda por recuperar sus historias a partir del egreso con diferentes propuestas, fruto de la articulación con instituciones

comunitarias, cercanas a los domicilios de residencia de los jóvenes, con alternativas laborales y con el compromiso de concluir los estudios según el nivel alcanzado; como también mediante derivaciones a instituciones de características abiertas como Residencias Educativas, Hogares o Comunidades Terapéuticas (todas ellas conveniadas por la SENNAF), para realizar tratamientos ambulatorios o de internación ante situaciones de consumo de sustancias psicoactivas.

Esta reconstrucción, tampoco se ajustó a lo varias veces pensado para la recopilación de la información, ya que se ha visto afectada por situaciones surgidas a partir de la propia dinámica de vida de estos jóvenes y sus familias; mudanzas o cambios de números telefónicos, estar detenidos en la actualidad. Lo cual fue reconfigurándose y pudieron ser sorteadas (en alguna medida) mediante la articulación con referentes de espacios comunitarios, como también con algunos familiares, que pese a los años transcurridos, telefónicamente fueron orientando la búsqueda, posibilitando la realización del trabajo de campo y vehiculizar el reencuentro.

Al tiempo que el haber contado con negativas, con argumentos “ajustados a derecho” desde la gestión del Programa de la SENNAF que imposibilitara el acceso a las fuentes documentales imposibilitó la (re) lectura de “aquellos legajos”, fuente de información con la que se complementarían el análisis en el tipo de medidas judiciales tomadas, ligadas o no a la privación de libertad, como también la construcción de las estrategias para cada caso, la periodicidad que se pueda establecer en el proceso de las medidas dadas, los referentes u otros actores sociales que se vinculan, cómo surge la intervención dada (oficio judicial, construcción dentro del proceso de entrevistas), entre otras.

De modo que la libre asociación de estos informantes claves, “en tanto poseen conocimientos, status o destrezas comunicativas especiales y están dispuestos a cooperar” (Gotees y LeCompte en Tonon; 2005), es uno de los aspectos a destacar en cuanto permita poder establecer, identificar aquello que resulte limitante del proceso tendiente a la revinculación familiar.

Mediante la reconstrucción de la situación de egreso del Instituto, lo propuesto y lo sostenido como estrategias y una mirada respecto de su vida cotidiana sirvieron de guía de entrevista, abierta o no dirigida, por la que se

intentara privilegiar la escucha en tanto mecanismo para captar detalles sutiles que ameriten el proceso de repregunta a la vez que un proceso de centramiento del informante de manera progresiva y no invasiva.

Asimismo la opción señalada de las historias de vida, han sido elegidas, en tanto recurso instrumental que “proporciona detalles sobre la evolución de las creencias y actitudes de una persona a lo largo de un tiempo” (Giddens; 1999:688).

CAPITULO 1

ACERCA DE SER NIÑO O MENOR

*“Si ya tenés un gurí,
para que buscar el segundo
fijate que no se te haga menor
el que ya trajiste al mundo...”*

(La Mojigata – Murga del Uruguay)

1.1 TA –TE – TI – SUERTE PARA...?

A través de las siguientes páginas, se contextualiza el proceso de construcción y constitución de *la niñez / la minoridad*, y la consolidación del paradigma de la Doctrina de Situación Irregular, que teniendo en cuenta los fines del presente trabajo se aborda desde diferentes aspectos, a partir de la implementación del Régimen de Patronato de Menores.

Al respecto, vale destacar que:

“Las instituciones de la minoridad – más allá de las formas que adoptaron- resultaron funcionales al sostenimiento de la estructura social entendida como discurso de la desigualdad natural. Para que esa desigualdad se naturalice, la sociedad prevé un sistema institucional de compensaciones la moneda de cambio de esa injusta economía social son los niños de esas otras infancias, las infancias de la modernidad.” (Costa-Gagliano; 2000: 76)

Bajo esta caracterización, queda encuadrada la existencia de (entre otros) los dispositivos de Régimen Cerrado destinados a efectivizar las medidas de privación de la libertad para jóvenes.

Por tanto; resulta posible encontrar en esta y otras materializaciones, las bases de la acción de los Estados nacientes frente a la multiplicidad de aquellas *manifestaciones de la cuestión social* a las cuales se consideraban como “*desajustes*”, tales como el aumento del pauperismo: la represión, la institucionalización de la ayuda social desde prácticas filantrópicas y de caridad, como parte de las políticas sociales, sin que de modo alguno se afecte a la estructura fundamental del orden vigente.

Es importante destacar que:

"Antes y después de la ley de Patronato de Menores, inscrita en las prácticas y costumbres sociales, la protección de la infancia se entendió como un control sobre la misma" (Costa Gagliano, 2000: 71)

Y que tal como describen estos autores, hay un *proceso de minorización*, que supone el tránsito, o la adopción, tanto de rituales como prácticas que van conformando la subjetividad de aquellos niños.

"El menor como condición construida arroja al niño a una situación de inferioridad y subordinación, que el discurso de la protección termina por afianzar institucionalmente" (Costa y Galiano, 2000:74).

Otra expresión de ello ha de ser la instalación del “sistema tutelar” que reforzara la condición moral, que se encuentra homologada con el cometer delitos o infringieran la ley penal; al tiempo que igualaba tanto a quien era víctima o había sido acusado de cometer un delito.

Por lo cual los mecanismos que el Estado diseña y dispone para la atención, de los considerados “*menores*” son estandarizados al partir de la identificación de aquellos como “*peligrosos*”, al tiempo que carentes de tener y saber es decir “*incapaces*”.

Entonces los inicios de éstos dentro del “circuito penal”, estuvo siendo precedido por otros circuitos institucionales que privaban de su libertad, aunque en el oficio judicial no se plasmara en esos términos la medida que dé cuenta o reafirme la condición que lo constituía como “objeto de protección”.

Ello también se evidenciaba tanto en los diseños arquitectónicos bajo los cuales se edificaron los asilos, hospicios, reformatorios, institutos (entre otras denominaciones que han ido adquiriendo estos dispositivos), como también con la ubicación geográfica que tenían, o bien los ritmos que hacían la vida cotidiana en su interior, el lenguaje, el uso de uniformes, cortes de cabello; todo da cuenta, sostiene que son, también, expresiones de los sentidos que adquiere tal estado de privación de libertad, a partir de la determinación de aquella “medida de protección” que resultaba.

Es entonces que la figura del *Juez de Menores* toma centralidad teniendo en cuenta que es

“quien cumpliría su rol ya no desde el plano estrictamente jurídico, sino desde un plano moral y social, asimilable en un aspecto informal a *un buen padre de familia* que, sin embargo, se encontraba indisolublemente unido, en el sentido formal, al poder coercitivo del Estado”(UNICEF 2006:30).

Cabe resaltar el carácter discrecional, sobre la cual se fundaba esta decisión, facultaba la determinación de disponer de quienes sean considerados objeto de protección y por ende tutela, hasta la mayoría de edad, con el fin de ***reeducar o resocializar al menor*** arbitrando la separación de su medio familiar.

“las diferencias que se establecen al interior del universo de la infancia, entre los sectores incluidos en la cobertura de las políticas sociales básicas (educación y salud) y los sectores excluidos es tan enorme, que un concepto único no podrá abarcarlos. Los incluidos se transformarán en niños y adolescentes, los excluidos se transformarán en *menores*.” (García Méndez, 1999: 20)

En definitiva siempre se declaraba en estado de abandono, y por tanto en “peligro moral material”, objetos de protección, a aquellos grupos más vulnerables por estar transitando proceso de exclusión social, circunscribiéndose a una “*población*” vinculada con un no alcance satisfacción, cobertura de modos y modelos instituidos, más que con atención a los procesos evolutivos y pertenencia a clase social.

Ante ello, se visualiza la pérdida, o la imposibilidad de cumplir con el mandato socializador que el Estado le ha conferido a otras dos instituciones, como son *la Familia* (construida bajo las determinantes del modelo patriarcal) y *la Educación* mediante los dispositivos formales en los que se ésta última se materializa; la Escuela.

“Las dificultades de la familia, la inasistencia a la escuela e incluso ser víctima de un delito constituían, entre otras, las causales, más comunes de *abandono* que, para el sistema tutelar, generan peligrosidad del individuo. Por tanto, la respuesta a estas situaciones ha sido siempre la judicialización del problema. Esta judicialización, lejos de resolver el problema o colaborar en su reversión, se ha convertido de manera sistemática en un obstáculo para la resolución del conflicto” (UNICEF 2006:31).

De modo que, como se desarrollará en adelante, es posible señalar estos como parte de la “*historia de la minorización*” siguiendo a Daroqui y López (2012); ya que se ha sostenido el refuerzo de la atención a poblaciones sesgadas, determinadas como problema; para las cuales se ha dispuesto, teniendo en cuenta los contextos, estrategias penales, tutelares y/o asistenciales, aplicando “ en un espectro que contempla tecnologías de cura, corrección, represión, protección, disciplinamiento, segregación o, en sus extremos, incapacitación y eliminación” (Daroqui y López;2012:49).

1.2 DE NIÑOS NO TAN NIÑOS...

DE MENORES... *(La Mojigata – Murga del Uruguay)*

La concepción de familia ligada al Antiguo Régimen, siguiendo a Donzelot (1979), se entendía a partir de un doble carácter: el de ser, al mismo tiempo, sujeto y objeto de gobierno. Siendo por un lado sujeto, en tanto se aseguraba la distribución interna de sus poderes que a su vez estaban bajo la autoridad del jefe de familia. Y por otro la consideración de ser objeto, en tanto este jefe de familia se encuentra inserto en relaciones de dependencia, que posibilitan a la familia conformar grupos de pertenencia.

En estos contextos las familias, en su conformación, se caracterizaban por la existencia de diferentes generaciones; al tiempo que se veían afectadas por un continuo desmembramiento a causa de las guerras, pestes u otras contingencias. De tal modo es que se permitían reconocer las diferentes formas de crianza de estas infancias. Y cuando lenta y progresivamente se fueron acrecentando los grupos de aquellos a los que se consideraba “sin familia”, se ha transformado como problema de orden público.

Si a ello se le suma la situación de crisis creciente, como antecedente que deriva en la Revolución Francesa, lo que resultaba para las familias muy dificultoso contener a sus miembros en el ejercicio del “su responsabilidad de mantenimiento”. Ante lo cual; el nuevo estado post revolución, debió responsabilizarse de ello y el tipo de respuesta que llevó adelante se encuentra ligada a formas filantrópicas; estableciendo de este modo la ingerencia de lo público en el ambiente u órbita de lo que se concebía como privado.

Es precisamente a partir de lo antes referido, y teniendo presente el desarrollo que diferentes autores han realizado acerca de la construcción y constitución de la niñez, la cual responde a determinaciones históricas, sociales, culturales y económicas; dejando atrás una visión estática, naturalizadora de la “presencia” desde siempre del niño:

“En efecto, las diferentes percepciones en torno a la niñez reflejan el carácter social del concepto, siendo este el resultado de una construcción y o una palabra acabada, natural e inmutable en el tiempo” (Bruno; 2007: 20).

Estos planteos se complementan y resultan posibles de sostener, destacando esta referencia particular al proceso de construcción a través de lo que Lewkowicz (1999:13), quien señala:

“la niñez es un invento moderno: es el resultado histórico de un conjunto de prácticas promovidas desde el estado burgués que a su vez, lo sustentaron. Las prácticas de conservación de los hijos, el higienismo, la filantropía y el control de la población dieron lugar a la familia burguesa, espacio privilegiado, durante la modernidad de contención de los niños”.

Por otra parte; y recuperando el siguiente análisis, en cuanto a la existencia de diferentes “agentes” a través de los cuales se valía para asegurar el control del orden establecido:

“Utilizando la pintura de la época como documento cuya importancia no puede despreciarse, el siglo XVII muestra una inversión de tendencia representada por el retrato de la familia que se organiza ya en torno al niño. En este proceso de descubrimiento/inversión de la niñez, la vergüenza y el orden constituyen dos sentimientos de carácter contrapuesto, que ayudan a modelar a un sujeto a quien la escuela dará forma definitiva (que)... cumplirá la doble tarea de prolongar el periodo de la niñez, arrancándola del mundo de los adultos. Es el nacimiento de una nueva categoría”. (Aries Philippe en Bruno 2007: 23)

Es precisamente la escuela la que ha tenido un papel central en este aspecto, en tanto es valorada como pieza clave para el proyecto de la modernidad; la que como institución contribuye a la concreción del proceso normalizador; validando el control social (de la cual esta construcción de los “menores” son parte de esta construcción del control social pretendido, tal como lo destacan Daroqui y López (2012)⁷, mediante la implementación de mecanismos no represivos.

⁷ Al respecto se incluye lo recuperado por las autoras respecto como conciben desde diferentes perspectivas la noción del “control social”. “Para Cohen (1998:15), se trata de las formas organizadas en que la sociedad responde a comportamientos y a personas que contempla como desviados, problemáticos, preocupantes, amenazantes, molestos e indeseables de una u otra forma. Esta respuesta aparece de diversas formas: castigo, disuasión, tratamientos, prevención, segregación, justicia, resocialización, reforma o defensa social. Por otra parte de acuerdo a De Giorgi (2005:38), el control social se manifiesta también como el proceso histórico de construcción de la relación entre poder y desviación, relación que tiene el poder de definir las normas y de etiquetar a quien de ellas se desvía, poder de inducir a conformidad y de reprimir la disconformidad, poder de trazar la diferencia entre lo normal y lo patológico, poder de corregir castigando y castigar corrigiendo. Melossi (1992) retoma la distinción de este concepto en el ámbito europeo y norteamericano, y lo divide respectivamente en dos direcciones: control social reactivo (rol central del estado como elemento inhibidor del conflicto) y control

Validados estos mecanismos, durante mucho tiempo se ha legitimando la determinación de incapacidad, por lo que se destacaba o colocaba como central el aspecto de la carencia, la imposibilidad. Esto supuso la necesidad de contar con alguien “capaz” que determine lo que debe realizar desde una visión de normalidad. Y a quien no estuviera dentro de estas “reglas del juego” se habilitaba la “protección de ese menor”; resultando la misma una forma de dominación y de control *del menor*, visto como objeto.

Al respecto es interesante destacar la lectura que de este proceso realiza desde el marco jurídico Emilio García Méndez⁸

“La historia del control social formal de la niñez como estrategia específica constituye un ejemplo paradigmático de construcción de una categoría de sujetos débiles para quienes la protección, mucho más que constituir un derecho, resulta una imposición”

Recuperando la historia más cercana y dentro del proceso desarrollado en la Argentina; cabe destacar que por ‘*niño*’ se hace referencia al hijo de familia legítima y alumno de la educación pública nacional, mientras que ‘*menor*’ designaba (y aún hoy lo sigue refiriendo determinadas prácticas), la carencia de familia, hogar, recursos... ; una situación que determina la condición de desamparo moral y material a la que se encuentran expuestos, en términos de la antigua (pero no sin vigencia), ley 10903 conocida como *Ley de Patronato del Dr. Luis Agote* (1917)⁹. Por tanto este menor pasa a ser un *protegido como pupilo por parte del Estado* (Costa y Gagliano; 2000).

social activo (centrado en la sociedad civil y los procesos de cohesión comunicativa). Para Pegoraro (2001:353) el control social es *la estrategia tendiente a naturalizar y naturalizar un determinado orden social construido por las fuerzas sociales dominantes*(...)Por lo tanto el concepto de control social ha sido concebido como una estrategia de integración-cooptación pero también de corrección, de exclusión, de represión, de incapacitación, herramientas necesarias para la reproducción del orden social” (Daroqui-López 2012:49. Nota al pie 1)

⁸ Emilio García Méndez, “Para una historia del control socio penal de la infancia: la informalidad de los mecanismos formales de control social” En: Derecho de la infancia/adolescencia en América Latina: de la situación irregular a la protección integral. http://www.iin.oea.org/Cursos_a_distancia/Cursoprojur2004/Bibliografia_Sist._Justicia_Juvenil_Mo_d_2/Para%20una%20historia%20del%20control.htm

⁹ Cabe destacar que los diversos autores relevados, sostienen que la promulgación y vigencia de esta Ley permitió la consolidación de los fundamentos por los cuales el menor había de ser visto como objeto de tutela y represión, alcanzando mayores niveles de control social sobre los menores, que con algunos años más tarde se plasmaran en el Régimen Penal Juvenil, como expresión del control social y represivo de la infancia y adolescencia, en sintonía con los lineamientos y marcos políticos por los cuales se gobernaba al país y la región. (Ver al Respetto Gallo;2004:19)

Frente a este último aspecto; es necesario plantear que antes de ser el sistema judicial quien actúe en materia de penalización o judicialización de la pobreza, ha sido el sistema educativo nacional, como también las órdenes religiosas, como hiciera mención anteriormente han asegurado el control social y la conservación de la “normalidad” mediante la aplicación de mecanismos no represivos.

La siguiente cita permite comprender de modo más claro lo que se viene describiendo:

“Si en la casa de familia no estuviesen el padre y la madre para mandar, gobernar, disponer de lo que cada uno ha de hacer, la casa estaría en completo desorden. Los niños mayores o los más fuertes se apropiarían lo perteneciente a los más débiles. El chiquilín tiene derecho a su ración de postre como los demás; pero he aquí que el zángano del hermano, glotón insaciable, se le antoja doble ración y le arrebató la del chiquillo. ¿Quién hará respetar su derecho? ¿Quién castigará al que lo ha vulnerado? Si a uno de los niños se le ocurre dormir hasta las 10 de la mañana porque no quiere cumplir el deber a ello confiado de preparar el desayuno a sus hermanitos, ¿quién le exigirá el cumplimiento de este deber? El padre pues a aquél, y la madre a éste: los gobernantes de la casa; ellos lo harán; ellos ampararán los derechos de todos; harán que todos cumplan sus deberes; velarán por el bienestar de todos. Tal así los pueblos, necesitan gobiernos para ser felices, para vivir en orden.” (Cartilla Cívica Argentina, publicada en la Revista de Educación, órgano oficial del Consejo General de Educación Provincia de Córdoba 1896. En Costa y Gagliano; 2000:70)

Ante lo cual, se observa la existencia tanto de modelos de familia, como de roles al interior de éstas, que quedan estereotipados, y que se hacen necesarios de cumplir en el sostenimiento cotidiano de esta institución; quedando reservado a la esfera del “padre” ser proveedor, como también la actividad intelectual, mientras que a la “madre” el cuidar a los hijos y lo afectivo quedaba confiado a sí.

Este peso de la tradición que se ha instaurado, y al que contribuyeron en su consolidación y reproducción instituciones que cumplían función socializadora, transmisoras de valores de generación en generación; han legitimado la construcción y consolidación de espacios de violencia simbólica, disciplinadora. La creación de un cuerpo legal que permita abordar dicha problemática ligada tanto al mundo del trabajo, el vagabundeo, la prostitución o la rebeldía a la autoridad familiar, por lo cual “los menores” se encontraban

derivados a la protección en “instituciones especializadas”, las que perseguían la normalización y el inculcar el hábito y valor del trabajo en ejercicio del rol del “Estado educador y protector”.

De este modo es que se “organiza progresivamente una transferencia de soberanía de la familia “moralmente insuficiente” al cuerpo de notables filántropos, magistrados y médicos especializados en infancia” (Donzelot 1998: 85). Considerando a su vez que; “la norma estatal y la moralización filantrópica sitúan a la familia ante la obligación de tener que retener y vigilar a sus hijos si no quiere ser ella misma objeto de una vigilancia y disciplinarización” (Donzelot 1998:87).

Esta visión es de algún modo, recuperada por Lewkowicz, cuando señala la alianzas existentes entre estas dos instituciones: las familias y el Estado; “entre la familia y el estado burgués, se teje toda una red de prácticas de asistencia y protección, o vigilancia si se prefiere” (1999:26).

Lo cual ha sido retomando el análisis que trajera anteriormente, vale remarcar aquello que Costa – Gagliano (2000) señalan como la funcionalidad a la que respondían las *Instituciones de la Minoridad* en tanto y en cuanto contribución a conservar el modelo con el que se entreteje la estructura social y se traduce *en sistema de compensaciones de las desigualdades*.

Esto último viene a reforzar la condición en la que se fundan los conceptos de *menor y niño*, siendo el primero fruto de la externalidad de las familias tradicionales, reforzado con la nominación y la distinción entre “legítimos y naturales”. Todo lo cual, crea una órbita ilusoria por donde han transitado, refuerzan y reproducen a la vez las situaciones que buscaban atender, dar respuesta.

Pensar en “el menor”, remite a una acción clasificatoria indiscriminada que en su interior contiene particularidades. Desde la reconstrucción de sus historias de vida son producto de circunstancias muy diferentes entre sí. Aunque por momentos se puedan tejer algunos correlatos en el sentido que los designa “a los niños abandonados, a los irregulares y delincuentes” de forma

indistinta (como señala Altamirano 2002), resulta para todos los casos que “*la atención*” conlleva la misma indiscriminación.

De este modo; es posible reconocer en nuestra historia, desde la fundación del Estado, con “la generación del ’80” que existieron preocupaciones en cuanto a lo que significara la alteración al proceso normalizador de la infancia.

Preocupaciones que permiten dar cuenta del proceso de creación de leyes que iban conformando el rol del estado naciente, al tiempo que determinaba funciones a realizar por parte de otros actores que quedaban comprometidos en el cumplimiento de tales leyes, tanto en el plano de la justicia, la seguridad, la salud o la educación.

Recuperando nuevamente a Daroqui y López, es importante destacar que las:

“especificidades inherentes a la estructura económica, política y cultural impregnarán al complejo judicial y sus miradas expertas para la determinación de diagnósticos de desamparo, mala vida, vicio, peligrosidad y promiscuidad, asociados a la disfuncionalidad de determinadas conductas esperadas, hasta las actuales nociones de riesgo carencia, peligrosidad y vulnerabilidad” (2012:51).

A partir de ello, y dejando de lado una lectura minuciosa (ya que no es objeto de este trabajo), se incluye en los siguientes párrafos una mención de aquellas leyes; mediante las cuales se sostendrá la estructura o andamiaje desde donde el Estado llevará adelante (por acción u omisión) estrategias de intervención respecto de aquellos que, en el pasado reciente, se encontraban en “*peligro moral y material*”, condición que queda actualizada o agiornada con el estado de vulnerabilidad.

Son estas, leyes e instrumentos establecidos a partir de los acuerdos de sectores dominantes, las que finalmente han de servir como sustento a la conocida Ley Agote y al sistema tutelar que a partir de ella se creará y durará algo menos de cien años. Aunque su vigencia se sostenga tanto en las prácticas o sentidos instituidos de múltiples sectores.

Al decir de Zapiola:

“Producto cultural de altísima densidad simbólica, la Ley constituyó una suerte de punto de llegada del largo proceso de transformaciones semánticas y de las representaciones que condujo al establecimiento de una distinción entre los *niños* y los

menores y que naturalizó el emprendimiento de prácticas diferenciadas de intervención en relación a los miembros de cada uno de los grupos deslindados". (http://www.catedras.fsoc.uba.ar/elias/Zapiola_UNICEN%202011.pdf.)

Se hace referencia a la ley de Educación de 1884, Ley 1420, mediante la cual se estructuró por más de cien años el Sistema Educativo de la Argentina:

"La ley de Educación Común 1420 fue la piedra basal del sistema educativo nacional. Se aprobó el 8 de julio de 1884, después de fuertes debates en el Congreso Nacional y en la prensa.

La ley aprobada estableció la instrucción primaria obligatoria, gratuita y gradual. La obligatoriedad suponía la existencia de la escuela pública al alcance de todos los niños, medio para el acceso a un conjunto mínimo de conocimientos, también estipulados por ley. Los padres estaban obligados a dar educación a sus hijos. Por último, la formación de maestros, el financiamiento de las escuelas públicas y el control de la educación –privada o pública- quedó en manos del Estado. No obstante, la sociedad tenía a través de los llamados distritos escolares en los que participaban padres de familia (elegidos por el Consejo Nacional de Educación), la facultad de inspeccionar la calidad, higiene y cumplimiento de las leyes en las escuelas."¹⁰

Retomando el análisis realizado por Zapiola, M.:

"Como es sabido, en el caso la construcción del sistema de instrucción primaria la intervención estatal fue decidida y poco inclinada a negociaciones con los agentes privados, posición que es reveladora de una actitud de relativa indiferencia respecto de los sectores infantiles más pobres, cuyo ingreso a las escuelas resultaba improbable".

(http://www.catedras.fsoc.uba.ar/elias/Zapiola_UNICEN%202011.pdf)

Por otra parte, en a finales del año 1902, bajo la presidencia de Julio Argentino Roca se sanciona la Ley de Residencia¹¹; Ley 4.144:

"La ley era perversa por donde se la mire, se expulsaba a los hombres, dejando aquí solas a sus familias: a sus mujeres con sus pequeños hijos. Así, esas familias quedaban separadas para siempre, porque a los expulsados no se les permitía volver a entrar al suelo argentino".

¹⁰Para ampliar el desarrollo ver www.bnm.me.gov.ar. Historia e investigación Período 1880 - 1910

¹¹Secretaría de Comunicación Pública- Presidencia de la Nación. Argentina en Noticias (AEN) "Residencia, una ley cruel" 23-11-2012. esta ley estuvo en vigencia desde su creación hasta 1958 cuando bajo la presidencia de Arturo Frondizi se tomó la iniciativa de anularla. En la actualidad se opina que esta ley podría verse emparentada a otros procesos de reforma en materia de legislación de migraciones, la reforma del código penal entre otras

Volviendo a lo expuesto por la citada autora, como se había expresado respecto del proceso de creación de legislaciones que en nuestro país han ido conformando diferentes sistemas y mecanismos de intervención estatal frente a los avances de las (hoy) llamadas manifestaciones de la cuestión social; es pertinente recalcar que:

“Inscripta en esa tendencia, la Ley de Patronato supuso una profundización de la intervención estatal al extender los motivos por los cuales los progenitores podían ver afectado su derecho de patria potestad. Además, sentó las bases para el tratamiento jurídico-penal específico de los menores de 18 años, que a partir de su sanción comparecerían ante los jueces criminales y correccionales en el marco de un proceso *diferente* al de los adultos, pudiendo tocarles en suerte cualquiera de los destinos antes mencionados. Una vez cumplida su condena, e incluso si eran absueltos, el magistrado podía mantenerlos bajo la tutela estatal hasta los 21 años si los consideraba “material o moralmente abandonados” o “en peligro” tal como señala el artículo 15”. (http://www.catedras.fsoc.uba.ar/elias/Zapiola_UNICEN%202011.pdf:pag.4)

Se destaca la siguiente nota al pie que incluye la citada autora, al realizar el análisis de los alcances de la presente Ley:

“En la ciudad de Buenos Aires, esa ampliación supuso que desde 1886 la guarda y la protección oficial de los niños y jóvenes huérfanos, desvinculados de sus núcleos familiares y/o hijos de madres solteras quedaran a cargo de los defensores de menores y de sus asesores letrados, quienes debían tratar de “colocarlos convenientemente, de modo que sean educados ó se les dé algún oficio ó profesión que les proporcione medios de vivir”. Los funcionarios entraban en contacto con los sujetos de los que debían disponer por medio de denuncias de particulares o como resultado de la acción de la policía, que podía detener en las comisarías a los niños que encontrara “vagando”, que carecieran de padres o tutores o que violaran las ordenanzas municipales. “*Ley orgánica, número 1893, de la administración de justicia de la Capital de la República, de 12 de noviembre de 1886*”, (En Jorge Meyer Arana, 1908:184)

Luego de su paso por las comisarías o depósitos de contraventores, los niños solían ser remitidos a asilos de beneficencia o a casas correccionales para mujeres, generalmente controlados por asociaciones particulares laicas o religiosas, para ser restituidos luego de un tiempo a sus familias o colocados en familias sustitutas que los empleaban en tareas domésticas, sobre todo en el caso de las niñas”¹².

¹² Para mayor ampliación ver: Zapiola, María Carolina, “La Ley de Patronato de Menores de 1919: ¿una bisagra histórica?”, en Lionetti, Lucía y Míguez, Daniel (comp.), *Las infancias en la historia argentina. Intersecciones entre prácticas, discursos e instituciones (1890-1960)*, Prohistoria, Buenos Aires, 2010, pp. 117-132.

Finalmente, teniendo en cuenta el movimiento de reacciones obreras y civiles frente a la represión estatal desatada y de modo complementario a las anteriores, se sanciona la ley de Defensa Nacional (Ley N°7029¹³) que impedía el ingreso al país de “cierta clase de extranjeros”, intentando evitar así la propagación de ideas y acciones anarquistas, como así todo intento de reuniones, o también quienes hayan sido condenados por cometer delitos comunes, o los que hayan sido expulsados del país previamente.

Con todo este marco jurídico/legislativo, sancionado en un corto periodo, se establece un perfil de población deseable e indeseable, surgida a partir de condiciones de clase, limitando e inexorablemente determinando el destino de los hijos de trabajadores y militantes políticos o sindicales.

A consecuencia de aquello, los tipos de medidas adoptadas por el Estado, en el caso que la situación no resultara funcional al modelo hegemónico vigente, han sido (y en la actualidad en gran medida continúan siéndolo), modos de responder uniformemente a la *“infancia irregular”*.

Estas respuestas que ofrecía este Estado moderno se encontraban ligadas a las esferas o estratos a los cuales pertenecían: para los niños y los migrantes la educación básica común y obligatoria y para los otros, “hijos de los derrotados” ofrecía mecanismos institucionales de inclusión selectiva bajo la órbita de las sociedades de beneficencia y el sistema de patronato, estableciendo para él en tanto categoría social un “circulo de nominación y tutela que inhibe el pasaje a otros lugares o espacios de la sociedad y la cultura” (Costa - Gagliano 2000: 74)

Por consiguiente queda instalada con gran fuerza la figura del régimen de patronato, a partir de estas situaciones de “desórdenes y peligros” a los que la infancia se hallaba expuesta.

Todo ello a partir del sostenimiento del instituido de la escuela pública argentina, para la cual la niñez era normal y alfabetizable, ámbito donde se desnuda tempranamente que el menor es aquel que quedaba fuera (expulsado) o permanecía fuera (excluido) del ámbito escolar.

¹³ Se destaca, al respecto, la publicación que realizara el Centro de Estudios Legales y Sociales “Inmigración, política estatal y vigencia de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de los inmigrantes y trabajadores migratorios peruanos y bolivianos en Argentina.” Informe que realizara para Plataforma Sudamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo. Buenos Aires, Septiembre 1999

A lo cual vale la pena retomar el análisis que agrega F. Altamirano (2002:27):

“Esta representación de la niñez mediada por las diferentes capacidades y pertenencias a estratos sociales, generó la coexistencia de distintas concepciones del “ser” niño/a y del “hacer” con ellos, en el mismo tiempo histórico-social”.

Por tanto el acceso o no acceso a espacios, bienes y/o posibilidades; como también la corrección o castigo de las conductas corren una suerte diferenciada acorde a la categoría en que se encuentren: niños o menores. Entonces siguiendo a Guemureman y Daroqui (2001), las estrategias de control social, entendiendo a este como *“estrategias tendientes a naturalizar y normalizar un determinado orden social construido por las fuerzas sociales dominantes”* (Pegoraro , 1995 En Guemureman y Daroqui; 2001: 22); ya no se daban bajo su forma dura sino también a través las políticas sociales perseguían la asistencia y promoción como mecanismos blandos para controlar estos sectores que eran vistos como amenaza al orden social vigente.

Como anteriormente se señalaba; la escuela pública cumplió un papel muy destacado dentro del proyecto modernizador. En su búsqueda por sostener *el ideal de la cultura letrada* al que sin distinción se estaba obligado a alcanzar, como contrapartida “produjo analfabetos” y las instituciones de la minoridad construyeron nuevas formas de aislamiento, violencia y delincuencia; derivando en dos destinos posibles: por un lado la cárcel y por el otro el dispositivo de los psiquiátricos, ambos cierran el circuito inaugurado para el tratamiento de lo diferente, lo no esperable y que quisiera conceptualizar como una contradicción: *niñez – menor*.

Esta distinción o clasificación institucional, entre niño o menor, es propia del Estado moderno, que en nuestra realidad se ha visto sostenida por dispositivos legales e institucionales¹⁴.

Estas instituciones que se destacaban como principales para este modelo “han dejado de ser fundante de la moralidad del sujeto” (Duschatzky – Corea; 2002:26); por consecuencia de los modelos de familia y de escuela que lo sostenían, marca el fin del tipo de relaciones familiares sobre la base de

¹⁴ Al respecto de esto último en el apartado siguiente se presentará una evolución de los dispositivos institucionales en donde eran tratados los menores con el objeto de resocializar, reeducar y encauzar, a partir de los tratamientos que se brindaban.

jerarquías simbólicas, encontrándose suspendidas las condiciones que dieron lugar a este ser niño “moderno”.

Al respecto las citadas autoras recuperan las consideraciones que Rosanvallon (1997) realiza en torno a la familia tradicional, en tanto que ofrecía al mismo tiempo que un punto de equilibrio al individuo; lo insertaba en un espacio de sostén social y redistribución económica. La familia hacía posible la inscripción en una genealogía, en una historia otorgándole sostén y referencia; de este modo para la tradición moderna la familia era el primer eslabón en el proceso de filiación y de construcción de cadena intergeneracional (Duschatzky – Corea; 2002).

Este Estado Nación que fuera clave en el momento de la organización social durante los siglos XIX y XX, nos refieren estas autoras, con el devenir de cambios en la estructura del proyecto de sociedad instaurado con el modelo neoliberal, se ha ido mostrando impotente al momento de orientar el devenir de la vida de las personas, tal como estaba siendo concebido.

Por otra parte; esta pérdida de sentidos atribuidos, supone o conlleva una matriz valorativa, que se ha ido plasmando mediante acciones reivindicatorias de la focalización y con ella la posibilidad de reducir los costos sociales destinados a una población en aumento que se impone a partir de la globalización, traduciendo a la pobreza como individualización de problemas puntuales reinstalando en cuanto a la atención de la “cuestión social” intervenciones que refuerzan matrices y sentidos vinculados con la caridad, al tiempo que estableciendo relaciones clientelares y otras formas que constituyen un correlato de esa visión moralizante y responsabilizadora de la “cuestión social” a la que hace referencia José P. Netto (2000).

Por consiguiente la localización del problema refuerza la producción de sujetos anclados en un lugar cristalizados, naturalizados, sin posibilidad de ser cuestionado; resultando la construcción de sujetos pasivos. Para lo cual el binomio que puede ejemplificar este proceso o las consecuencias de éste puede ser: el formulado como el niño – el menor o más genéricamente la infancia – la minoridad.

En gran medida estos binomios pueden derivar en otros que estratifican o encasillan la situación por resolver, lo que se convalida con cierto discurso jurídico que la judicializa.

“En los tiempos históricos anteriores a la Convención, la niñez se definía fundamentalmente desde la concepción de minoridad. Esta representación simbólica que asemejaba los conceptos de niñez-minoridad-incapaz marcó una forma particular de concebirla.

Pensar al niño como *menor* lleva a ubicarlo en una posición de subordinación dentro de la estructura familiar y/o social. El menor se encuentra en un lugar inferior, sujetado a *los mayores* quienes ejercen el poder y toman decisiones sobre sus vidas.” (Bruno; 2007:24)

Es en particular desde esta contradicción propia, a partir de la que se considera que con mayor centralidad se plantea una lectura polarizada sobre la infancia en general; plasmándose en el binomio niño – menor, los cuales son objeto de estudio que se liga estrechamente con las manifestaciones de la cuestión social.

A modo de cierre de estas aproximaciones realizadas, resulta oportuno señalar:

“De este modo, la ley de Patronato, sancionada en Argentina en 1919, inaugura una serie de reformas jurídicas relativas al Derecho de la Infancia, llevadas adelante en América Latina. A la luz de lo ocurrido durante el siglo XX en Argentina, la impronta de esta primera etapa selló el control socio penal sobre niños y adolescentes, estableciendo acciones y políticas de judicialización e institucionalización y determinando el carácter hegemónico que la Doctrina de la situación irregular pregonaba”(Garello; 2010:17).

1.3 POR ESTOS TIEMPOS...

*“En esta tibia primavera de risas cortas y sorteos de TV
nada sabes, nada sabes nada te importa,
si no te toca gracias Dios ni te metés”.
(Arbolito – Telarañas)*

Al hacer referencia al contexto actual, la pretensión es abordar el periodo que se desarrollara entre los inicios de la de los años '90 hasta mediados del año 2000.

Cabe tener en cuenta que en este recorte temporal se inscriben una sucesión de acontecimientos que permitieron una ruptura respecto de visiones clasificatorias dominantes, dando inicio a nuevos modos de nominar situaciones y problemáticas.

De este modo, se inicia una modificación en el ámbito jurídico a partir del proceso de Reforma Constitucional,¹⁵ y particularmente donde ha tenido lugar la inclusión en ella de (entre otras) la Convención Internacional de los Derechos de Niñas/os y Adolescentes.

Este proceso de reformas legales, que si bien no se abordarán en particular; resultan necesario de tener en cuenta, en tanto que posibilita pensar en rupturas con el paradigma hasta este momento vigente y por el cual ha quedado derogada la Doctrina de Situación Irregular por la Doctrina de la Protección Integral.

Cabe señalar que este *nuevo modo* de concebir al Niño en tanto sujeto de derecho que se inscribe con la Doctrina de Protección Integral, refiere a un conjunto de elementos jurídicos de nivel internacional, que basados en la Declaración Internacional de los Derechos del Niño, establece principios rectores para los Estados parte que suscribieron a la misma y que se materializa en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, las

¹⁵ Se hace referencia a la Reforma de la Constitución Nacional de 1994, por que como se ha señalado anteriormente, resultara el acontecimiento por el cual se iniciara un proceso (que aún permanece inconcluso) de adecuación de la legislación vigente en materia de Niñez, Adolescencia.

“Reglas de Beijing”¹⁶, “Las Reglas de Tokio” y también respecto de las “Directrices de Riad”¹⁷.

A la luz de la Doctrina de Protección Integral, comienzan a sucederse adecuaciones normativas a partir de la sanción de las Leyes 114 para la Ciudad de Bs. As.(diciembre de 1998), en enero de 2005 la ley 13298 que rigen en la Provincia de Bs. As, luego en septiembre de 2005 la Ley Nacional 26061 y finalmente en enero de 2006 se actualiza la citada ley provincial y se complementa con la ley 13.634 de Responsabilidad Penal Juvenil, para la Provincia de Bs. As.

Paradójicamente, y en lo que concierne más específicamente al área de intervención, de la que se intenta dar cuenta en este desarrollo, aún resta adecuarse a la normativa internacional el Decreto Ley N° 22.278 instaurado por el último Gobierno Militar de 1976¹⁸, el cual rige, en tanto normativa que permite la administración y aplicación de justicia, en materia **penal juvenil** en la Ciudad de Buenos Aires.

Este Decreto Ley, con sus modificatorias, y La Ley de Patronato no solamente que han coexistido en una “perfecta armonía”, tal como lo destaca Hourquebie (2012); sino que ha clasificado y estandarizado mediante el establecimiento o

¹⁶ Se hace referencia del Documento: “Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores”, que se aprobara por la Asamblea General en su Resolución N° 40/33 del 28 de noviembre de 1985. Remiten a orientaciones básicas de carácter general que se refieren a la política social en su conjunto; siendo medidas de atención de los menores con fines de prevención del delito antes del comienzo de la vida delictiva constituyen requisitos básicos de política destinados a obviar la necesidad de aplicar las presentes Reglas.

¹⁷ La referencia es por un lado a las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas mínimas no privativas de la libertad (Reglas de Tokio), que encuentran su origen en el 8° Congreso de las Naciones Unidas sobre prevención del delito y tratamiento del delincuente, quien recomienda a la Asamblea General de la ONU las presentes medidas mínimas sobre penas no privativas de la libertad, mismas que son aprobadas la misma ONU el 14 de diciembre de 1990, bajo la resolución 45/110 tomada por la Asamblea General.

Y luego a las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (Directrices de Riad) que fueron adoptadas y proclamadas por la Asamblea General en su Resolución 45/112, de 14 de diciembre de 1990, deberán interpretarse y aplicarse en el marco general de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración de los Derechos del Niño, y la Convención sobre los Derechos del Niño, y en el contexto de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing), así como de otros instrumentos y normas relativos a los derechos, los intereses y el bienestar de todos los menores y jóvenes.

¹⁸ La Ley Penal que administra la comisión de delitos por parte de personas menores de 18 años de edad, es el Decreto Ley 22.278/80, que por no adecuarse al espíritu y contenido planteados por la Convención Internacional de los Derechos del Niño, no resulta garantía para el cumplimiento y la protección de los derechos de los adolescentes a los que alcanza la misma.

diferenciación por franjas etarias, un *tipo predeterminado de actuación*. De este modo es que aquellos “menores” hasta los 16 años no sean punibles, lo cual significa que existe *la imposibilidad jurídica de aplicar pena*, sin por ello dejar de lado la facultad de disponer de aquellos hasta el momento de su mayoría de edad, que para aquel entonces estaba fijada al cumplir los 21 años;

“pueden ser privados de su libertad y destinados a instituciones públicas o privadas con acuerdo del Estado nacional, provincial o municipal si se encuentra en *peligro*, criterio basado en la impresión del juez y no como reproche estatal derivado del presunto hecho ilícito cometido” (Hourquebie;2012:24).

Por otra parte, esta “herramienta judicial” establece que aquellos “menores” entre los 16 y 17 años son imputables, en caso que cometieran delitos equiparables con lo que, por esta misma acción, en el régimen de adultos pueda corresponderse con dos años de prisión.

De este modo permite advertir la in/diferenciación e indiscriminación que existe en el criterio para determinar a la “población” a la cual puede serle dictada la privación de libertad.

“Esto significa que, pese a que existe un llamado Régimen Penal de la Minoridad, no existe distinción entre las penas aplicables a los adolescentes de 16 y 17 años y las aplicables a los adultos. En el caso de los adolescentes entre 16 y 17 años, si bien no se les puede aplicar la punibilidad plena, son encarcelados preventivamente y destinados a distintos lugares de reclusión. A esto se le llama *internación o medida de protección*.” (Hourquebie; 2012:24).

Es paradójico, que resulta “materia” pendiente su adecuación, porque dicha normativa es tanto en su espíritu, como en sus procedimientos, contradictoria y nada tienen que ver con los lineamientos de las normativas internacionales que se inscriben en la Protección de Derechos.¹⁹

Por su parte en el Informe que elevaron y publicaron de manera conjunta la UNICEF, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y la

¹⁹ Se ofrece en Anexo el cuadro comparativo de los proyectos de Ley presentados en el Congreso de la Nación para la reforma y derogación del Decreto Ley 22.278 y adecuación a Normativa Internacional en materia de Responsabilidad Penal Juvenil. Estos proponen un régimen que contempla la responsabilidad penal desde los 14 años para causas graves, con una gradación que alternativas a la internación cerrada: la restricción de deambulación los fines de semana, arresto domiciliario y finalmente, como es el caso de nuestra unidad de análisis, en concordancia con las disposiciones internacionales en la materia, alojamiento en Centros Especializados.

Secretaría de Derechos Humanos en julio de 2006, al hacer referencia a otras reformas pendientes señala:

“La Constitución de la Nación, fundada en valores democráticos y en el respeto por los derechos fundamentales de los individuos, ha establecido la obligatoriedad de cumplir con una serie de exigencias cada vez que se pretenda desterrar el estado de inocencia del cual toda persona es titular. En este sentido, se ha expresado que: ‘la persona que resulta imputada como autor de un delito o participe en él es tratada como inocente por el orden jurídico-y debe ser tratada de esa manera, en el caso concreto, por los funcionarios competentes del Estado que la persiguen o juzgan-hasta tanto una sentencia firme no declare la necesidad de someterla a una pena o a una medida de seguridad o corrección’(Julio Maier Los Niños como titulares del derecho al debido proceso” En Justicia y Derechos del Niño N°2 UNICEF 2001).

Esto significa que para adjudicar consecuencias jurídicas a los adolescentes, por actos que sean declarados en la nueva ley como infractores de la ley penal, deberá seguirse un proceso que contemple el pleno respeto de las garantías constitucionales del debido proceso, dentro de un régimen diferenciado del de los adultos, donde la privación de libertad, especialmente, sea una sanción excepcional. Antes de ésta, se contemplará la aplicación de un abanico de sanciones, como reptación del daño, órdenes de orientación, prestación de servicios a la comunidad, entre otras” (UNICEF: 2006, 37)

A partir de las modificaciones y adecuaciones referidas, y las que restan aún alcanzar, es que cabría considerar en el periodo seleccionado; al Estado que no solo reaparece desde un lugar de distribuidor de fondos públicos y responsable de la elaboración e implementación de políticas asistenciales, sino que además se posiciona como “animador de las iniciativas locales”.

Frente a ello, desde varios sectores de intelectuales y organizaciones sociales, se ha criticado el proceso de reforma, aquel declamado cambio de paradigma, el cual, según refieren Daroqui - López (2012) no ha sido acompañado de un:

“necesario ejercicio de monitoreo de estos procesos en los campos legislativos (aplicación de la ley), institucionales-judiciales y ejecutivos. Y por sobre todas las cosas, se ha clausurado la posibilidad de plantear interrogantes que indaguen sobre las cuestiones macro-estructurales que el orden social en términos históricos ha desplegado en clave de gobierno de amplios sectores sociales, en el que los jóvenes pobres han sido un blanco privilegiado de políticas de control social, represión y segregación institucional”.(Daroqui-López;2012:58)

Es destacable también que tiene lugar una situación social caracterizada por la complejidad, por la incertidumbre y el profundo cambio en la estratificación social de la Argentina ocurrida en el último decenio y cuyas consecuencias e impactos, entre otros modos, se visibiliza en esta “población”.

Ante esta profunda agudización de la “cuestión social” que sitúa a los jóvenes en un lugar de extrema vulnerabilidad, se considera que el posicionamiento de los diversos actores que trabajan directamente sobre esta problemática requiere de una visión amplia e integradora que trascienda la naturalización de los hechos y fenómenos sociales.

Siguiendo a Castell, en tanto se evidencia una brecha entre los derechos de ciudadano y un orden económico surge la “amenaza al orden político y moral”.

Tal como refiere en su estudio Manuel Argumedo (2002), es a través de la problemática laboral que se manifiesta el proceso de deterioro en el ejercicio de los derechos de ciudadanía. En este sentido, rescata a partir de lo expuesto por Castell (1992:26) que “...la vía real de la protección ha dejado de ser la integración por el trabajo”.

En la medida en que el trabajo deja de estar vinculado a garantías, prestaciones y derechos sociales, pierde su papel de gran integrador. Esto implica una degradación de la condición de ciudadanos, en la medida en que el acceso a esas condiciones mínimas de vida resulta divorciado a la condición de ciudadanos (Argumedo;2002).

En este contexto, “lo social” requiere el desafío de comprender los fenómenos sociales, como el que nos ocupa: Jóvenes en Conflicto con la Ley Penal de quienes se presenta una caracterización teniendo en cuenta que se trata de un recorte realizado dentro de uno de los 4 Institutos destinados a varones dependientes de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia en la Ciudad de Buenos Aires.

Sin discriminar las causas de origen, en todos los casos estos jóvenes y sus familias han sido alcanzadas por medidas y determinaciones que suprimieron el ejercicio de la patria potestad con la intervención del Juez de

Menores²⁰, figura que desde el análisis que realiza Emilio García Méndez; es quien en el marco de las políticas de ajuste devenidas del modelo de políticas sociales y económicas del proyecto neoliberal²¹, sostiene una “*función real*” (priorizando por sobre las funciones simbólicas a las que refiere); cuyo impacto y registro mediático da cuenta que las “acciones que suponen enfrentar el problema de los menores”, lo cual *tranquiliza* en el imaginario de aquel sector que demanda seguridad, baja en la edad de imputabilidad, mano dura frente al delito etc.

Al mismo tiempo, y siguiendo con los planteos que realiza García Méndez, para una mayoría con las necesidades básicas total o, parcialmente insatisfechas, entre quienes se encuentran los “menores”;

“las leyes basadas en la Doctrina de la Situación Irregular condicionan y determinan su existencia cotidiana desde el nacimiento, hasta su eventual transferencia social vía el trámite de la adopción o el sometimiento a algún tipo de confinamiento institucional vía internación”.(s/f :p.4)

En dichos antecedentes no se discrimina los motivos por los cuales han registrado aquel o aquellos ingresos, sin por ello dejar de sostener que se han debido a “causas” asistenciales como “infracciones a la ley penal”.

²⁰ Vale destacar los aportes realizados por Emilio García Méndez, quien sostiene que “Aquellas instituciones gubernamentales, que no han querido, podido o sabido transcender las prácticas asistencialistas resultaron, y en muchos casos resultan todavía hoy, aliados objetivos fundamentales para el mantenimiento del status quo jurídico. Además, y más allá de la buena voluntad de algunos de sus técnicos, quien no entendió el carácter político-jurídico de las transformaciones necesarias, fue, sin embargo, paradójicamente eficiente para identificar la nueva clientela institucional. Como en una versión moderna de un rey Midas social, tuvieron y tienen éxito en convertir en menor a todo niño objeto de su protección” La Legislación De Menores en America Latina: Una Doctrina en Situación Irregular En Derecho De La Infancia/Adolescencia En America Latina: De la Situación Irregular ala Protección Integral p- 6

²¹ Instaurado desde el último gobierno de facto en nuestro país (1976) y decidida y deliberadamente consolidado durante los gobiernos democráticos del ex presidente Carlos Menem, perteneciente al Partido Justicialista; un espacio político con marcada tradición popular y “reivindicativa de los derechos por los más desfavorecidos y postergados” haciendo una remembranza de las figuras del Gral Perón (mentor del Movimiento Nacional Justicialista) y Evita.

En algo más de un año de gestión en la presidencia el Proyecto Neoliberal se consolida con el Plan de Convertibilidad (Dirigido por el Ministro de Economía Domingo Cavallo), y la sucesión de Privatizaciones de los servicios públicos y otras empresas dirigidas desde el Estado Nacional, lo que conllevó un aumento de despidos, y transferencias del personal; flexibilización de las condiciones laborales. Todo ello junto con aumento de los índices de pobreza, la descentralización y desregulación por parte del Estado caracterizan la complejidad de la cuestión social contemporánea.

1.4 “ESOS CHICOS...”

*“Yo soy el error de la sociedad,
soy el plan perfecto que ha salido mal.
Yo no sé quién soy, yo no sé quién sos,
el tren del rebaño se descarriló”*

(Agarrate Catalina – Murga del Uruguay)

A partir de estas apreciaciones es posible particularizar en dicho universo poblacional teniendo presente que:

Sostengo que estos jóvenes, son auténticamente hijos del neoliberalismo (ya que se sus edades rondaban al momento del relevamiento empírico²² entre los 16 y 20 años), ellos son parte del 44 % de la población asistida que registra ingresos previos en este establecimiento (Instituto de Régimen Cerrado “Manuel Belgrano”); y el 69 % posee internaciones anteriores en el sistema, dando cuenta la existencia de aquel circuito de repetición mencionado.

En lo que refiere al nivel de escolaridad alcanzado el 24 % poseía el nivel primario incompleto, distribuyéndose el resto entre los que poseen primaria completa y cursan el secundario actualmente en el Instituto. Cabe señalar que el mayor porcentaje de jóvenes que procede de la Provincia de Buenos Aires se ve afectado por la terminalidad de la escolaridad básica en 9° año, produciéndose la mayor deserción en el 3° ciclo, resultando coincidente con el inicio en el consumo de sustancias adictivas.

Esto se confirma con el dato que el 88 % posee consumo de sustancias tóxicas desde la pubertad, en cantidad, variedad y calidad variable.

El 20 % del total de la población tenía formada una pareja *relativamente estable*, y un 9 % tiene algún hijo, de los cuales el 16 % corresponden ya a ex parejas.

El 56 % carecía de documentación personal o no la tenía actualizada, con lo que su acceso a la predicada “ciudadanía”, que se pregonaba en el espíritu de la legislación internacional y local, se ve en la práctica condicionada por la vulneración de aquel derecho básico como es la identidad de la cual la

²² Se hace referencia a una investigación realizada por los integrantes del Servicio Social del Instituto de Régimen Cerrado “Manuel Belgrano”, de la cual participé como integrante para la investigación presentada en las Jornadas de Trabajo Social en la UNLP 2006

obtención del DNI o su inscripción de nacimiento constituyen una de sus expresiones.

Este dato puesto en relación con la desafiliación del núcleo primario, cobra especial significación en la construcción de la subjetividad del joven, en tanto que da cuenta de la existencia, creación o consolidación de otros núcleos de pertenencia y o vinculación, tales como las *ranchadas* (rancho como sinónimo de amigo, compañero de trabajo o grupo de pertenencia) o las esquinas entre otros.

La inscripción en su grupo familiar al analizar los datos que remiten a la posición del joven en función de las características del grupo familiar, arrojaba a partir de lo relevado que: en cuanto a lo que se podría nominar como “*disgregación familiar*”, fundamentalmente por el fallecimiento del padre, esta situación se observa en el 31 % de los jóvenes, los hermanos fallecidos representaban el 14,5% y las madres fallecidas el 5,5 %. Esta sumatoria daba cuenta que, el 60 % de los jóvenes tiene al menos un miembro de su grupo familiar primario fallecido. Y si se le añade la variable desvinculación podemos concluir que el 74 % de los jóvenes posee entre padre, madre o hermanos, algún miembro familiar directo fallecido o desvinculado.

Mientras que solo el 24 % de los jóvenes que conformaban la población relevada en el Instituto Manuel Belgrano, registrabas ambos padres conviviendo en el hogar.

A partir de estos datos con lo que se han presentado algunas de las características bajo las cuales se conforman los grupos familiares, y siguiendo lo oportunamente descripto y analizado por Hourquebie (2012:176):

“...la ausencia del rol paterno o de figuras sustitutas que puedan operar como modelos de identificación y de introyección de pautas y normas. Es probable que esta falta de inscripción psíquica, que desde la perspectiva psicológica se reconoce como vacío, agujero o herida, la canalice el joven con una inscripción corporal, mediante tatuajes y/o cortes auto inferidos, trascendiendo al plano de lo social una cuestión inicialmente individual”.

En cuanto a la calidad laboral de los grupos familiares el 78 % carece de obra social pudiéndose inferir la precariedad, inestabilidad laboral y/o desocupación de los padres, y un acceso a la salud restringido a la atención pública en el mejor de los casos.

Referido a las historias familiares en cuanto a la infracción con la ley penal se observa que el 76 % de los casos registra antecedentes penales de algún miembro de su grupo primario, representando el mayor porcentaje los hermanos, luego el padre y finalmente la madre y quien fuera o hubiera sido su pareja. Asimismo un 16 % de ellos tiene más de un integrante (en la familia reducida o en la extensa) con antecedentes penales.

A estas marcas que van signando el devenir cotidiano de los jóvenes privados de libertad, es posible sumar otras marcas, de carácter simbólico que refuerzan sentidos de pertenencia, modelos identificatorios, que configuran en gran medida modos de ser/actuar; por lo que en el 69 % de los casos se destacaba la existencia de tatuajes, cicatrices de cortes autoinferidos (mediante los cuales buscaban atención médica, ingesta de algún tipo de fármaco/sustancia, traslados a centros de salud que posibilitaban su “fuga”, y con ello una nueva causa, presiones para ser citados en sus Juzgados o Tribunales en audiencia y de lesiones (armas de fuego, blancas o diferentes peleas), muchas veces resultantes de las situaciones de riesgo en las que se involucran.

Recupero una vez más a lo trabajado y descripto por Hourquebie (2012)²³, respecto de la función de los tatuajes, a los cuales ha visto desde su función y pero también desde el significado, tanto propio como el que le es otorgado por este joven que lo ha elegido y lo porta:

²³ Elena Hourquebie desarrolla como parte de su tesis de doctorado, en los capítulos 4, 5 y 6, el análisis de un extenso “corpus fotográfico” que ha relevado durante sus años de trabajo con jóvenes privados de su libertad en el Instituto Belgrano. “...hemos podido, desde el asombro del que la Antropología habla, fotografiar los tatuajes de los jóvenes con los que individualmente trabajábamos, procurando en el proceso de entrevistas que produjeran discurso sobre las mismas. Estas experiencias nos permitieron confirmar la eficacia de esta estrategia como disparador del diálogo, y nos permiten hoy afirmar que **estos adolescentes comparten un uso del lenguaje oral, visual y kinésico que constituye parte de una tradición específica, que no sólo remite a la identidad personal (designación autorreferencial y/o reconocimiento del otro), sino que lo inscriben, como sujeto dentro de una particular cultura grupal**” (Hourquebie; 2012:7).

“Tomamos al **tatuaje** como una acción discursiva que implica el concepto de inscripción tal como lo señaló Paul Ricoeur (1999) al referirse a la fijación del significado, pudiendo diferenciarlo de la volatilización, como dice Geertz (1991) de las frases y aún de lo que hacemos. **Tal inscripción en el cuerpo hace persistir el significado de una manera que en la realidad, la palabra no podría.** De aquí que dirigimos la atención sobre este fenómeno a partir del flujo que los sucesos implican para la interpretación antropológica”. (Hourquebie; 2012:11). Ambas citas tomadas de la Introducción de la tesis que realiza la Autora, el destacado es mío.

“...signos, símbolos y señales de una historia personal y social muchas veces no puesta en palabras.

Observamos así que el cuerpo real se iba transformando en un cuerpo ficcionalizado, en el que se localizaban y comunicaban mensajes relacionados con una cultura específica.

...la vinculación en el plano de las creencias, entre lo profano y lo sagrado. Se va presentando un sistema de intercambio, basado en promesas y pactos que ofrecen a devociones populares como el Gauchito Gil y San La Muerte, lo que da cuenta de la necesidad universal de protección, así como de la aceptación del castigo (relacionado mayoritariamente y en este contexto, con la detención), que a su entender sobreviene, más por promesas incumplidas que por la acción delictiva.

...ejemplificamos otra interpretación mágica con la que los informantes en parte se desresponsabilizan de las acciones transgresoras que cometen. Remite a tatuajes de seres fantásticos y sobrenaturales, que cobran significación si los ponemos en relación con las particulares historias de vida...” (Hourquebie; 2012:10)

A partir de esta caracterización realizada, es posible encontrar vínculos con el desarrollo que Castel realiza en torno a la conceptualización de la familia en situación de disociación a partir de la pérdida de los soportes salariales, como también de las mutaciones de los roles, lo cuál es parte constitutiva de la *desafiliación* “que no equivale a la ausencia completa de vínculos, sino a la ausencia de inscripción del sujeto en estructuras dadoras de sentido” (1997:421)

Ante este “panorama” o estado de situación de una población limitada como es la que se ha trabajado, cabría preguntarse por cual ha sido el ejercicio (real y/o posible) de los derechos de ciudadanía que en estos núcleos familiares se han perpetuado; con contextos en donde se conjugan condiciones de pobreza estructural, aunque también nueva pobreza, que siguiendo a Volnovich (1995) alcanza, o encuentra expresiones, tanto a lo educativo, ocupacional, lo económico, la salud y lo legal desde un sentido amplio, que incluye entre otros el derecho a la identidad expresado en la posibilidad de contar o no con DNI.

Entonces cabe destacar tal como refiere Kymlicka (2002) que la ciudadanía contempla integrar las exigencias de justicia y de pertenencia comunitaria, “El concepto de ciudadanía, está íntimamente ligado, por un lado, a la idea de derechos individuales y, por el otro, a la noción de vínculo con una comunidad particular” (Kymlicka-Norman; 2002:2).

Esta dimensión de pertenencia a una comunidad ha de ser entendida como pertenencia a una comunidad política; por ello es que es posible pensar en la disputa de la ciudadanía ligada a los derechos antes referidos, como también la participación en la exigibilidad y efectivización de los derechos.

Siendo que, tal como sostiene Garello:

“Acceder a la titularidad de derechos que posicionen a las personas como ciudadanos es difícil y complejo para la población en condiciones de pobreza. Una cotidianeidad desarrollada en contextos de exclusión y vulnerabilidad condicionan los procesos de integración social. La naturalización de procesos sociales y económicos que generan estas condiciones, invisibilizan los problemas y las poblaciones. De la omisión se pasa a la represión y al control social hard. La noción de peligro toma cuerpo, el Estado penal también.” (Garello; 2010:168)

A partir de lo referido, es posible inferir que la intervención del Estado a través de la implementación de políticas públicas, no ha dado los resultados esperados en tanto se reconocieran y se restituyeran derechos, ya que suele recortarse el problema a abordar en una noción de ayuda al pobre, cuando no se lo reprime, judicializa;

“El criterio predominante asumiría el tipo de ciudadanía asistida, resumida en la noción que proclama que los pobres deben ser asistidos en su desarrollo. No se conceptualiza la ciudadanía social como habilitante de la ciudadanía civil y política, se trataría en cambio de una ciudadanía subsidiada o tutelada que aporta a la construcción de sujetos sociales aptos supuestamente para moverse con mas cantidad de competencias en el universo de su inmediatez” (Cardarelli - Rosenfeld;2000:46)²⁴.

De este modo; resulta posible de asociar con la necesidad de construcción de *lazos de socialización* según lo expuesto por Merklen (2005), a partir de lo cual es posible interrogarse en la relación que se debe(ría)

²⁴ Respecto de la clasificación de ciudadanía asistida se puede ampliar recuperando los aportes de Eduardo Bustelo (1998). Sintéticamente, sostiene que hay dos maneras de pensar políticas de ciudadanía: la ciudadanía asistida y la emancipada, a las que entiende como dos modelos rivales que disputan por la orientación conceptual de las políticas sociales en América Latina. En donde mientras que la primera refleja el pensamiento liberal en donde el hombre busca más el beneficio propio y así luego redundará para el conjunto. Y donde los derechos sociales que se pueden demandar son los contributivos. La segunda parte de una igualdad social, y donde hay un reconocimiento del individuo como sujeto pleno de derechos.

Es esta dimensión social, la que hace una referencia directa a los derechos sociales; es decir a gozar de un mínimo nivel de vida, de bienestar y seguridad económica. Éstos tienen un carácter colectivo y por lo tanto tensionan a la lógica del sistema capitalista.

establecer entre lo social y lo político teniendo en cuenta las condiciones materiales de subsistencia y la vida cotidiana que desarrollan estos jóvenes y sus grupos de pertenencia (familia, pares, ranchada ...).

“...allá donde las formas de integración secundaria (es decir institucionalizadas) fallan o no están lo suficientemente desarrolladas, lo local aparece como marco natural de tejido de diversas modalidades de solidaridad.” (Merklen; 2005:137). Más aún es necesario considerar estas redes cuando desde el contexto actual; donde por hacer mención a las que considero prioritarias: familia y escuela como dadoras de sentido, se encuentran en proceso de caída y destitución (siguiendo los desarrollos realizados por Silvia Duschatzky 2002).

Por tanto es allí donde se entiende el surgimiento de otras lógicas de interacción e integración; entonces “el barrio aporta “los soportes” necesarios a la integración de estos individuos y, lo que no debe subestimarse, esenciales para la formación de las familias” R Castel en Merklen (2005) aunque estas familias podríamos decir no respondan al modelo esperado que desde la modernidad ha sido construido.

Tal como se caracterizara anteriormente, la población de la que se está dando cuenta resulta como pertinentemente lo resume Hourquebie:

“...podemos señalar que estos jóvenes viven el fin de siglo y de milenio atraídos por una serie de consumos: la hamburguesa, la Coca-Cola, los jeans, la computadora, Internet, los correos electrónicos, los celulares, símbolos de la cultura del S.XX y el XXI. Pero a la vez, viven también en un contexto de caída de la credibilidad en las instituciones, de inestabilidad política, económica y social. (Hourquebie, 2012:50)

En donde, por otra parte, se vinculan también el consumo creciente de sustancias tóxicas o psicoactivas, situaciones de abuso sexual y violencia familiar, y el delito como constitutivos de la historia vital y la vida cotidiana de estos jóvenes es lo que Merklen llama efectos de la anomia.

“En relación con los jóvenes de los sectores populares, los medios contribuyen de manera decisiva a instalar nociones de delincuencia, drogadicción, peligro, violencia, vagancia etc., como si los jóvenes constituyeran una amenaza al orden por representar un sujeto en los márgenes de la sociedad que no puede ser asimilado.

... La estigmatización del joven oculta la dinámica social por la cual este es marginado y las prácticas creativas de búsqueda de

alternativas que desde el terreno social y político los jóvenes encaran permanentemente” (Bianchi y Gasparini; 2012:22).

Por esta razón no basta con priorizar lo local como espacio –recurso para la resolución de estas situaciones-condiciones de vulnerabilidad; sino que es necesaria la existencia de un Estado capaz de intervenir en esta cotidianeidad. Esto lejos de deslegitimar lo local busca *desenamorar* o *desromantizar* la centralidad dada a estos espacios frente a la retirada del Estado de sus funciones interventivas y preventivas, al tiempo que penetración del Estado mediante otros mecanismo que contemplan la represión y judicialización, como también el incremento de situaciones de represión policial, gatillo fácil, y todo tipo de negociados en donde la policía, como *fuerza de seguridad*, están implicados y de los cuales solo resultan “visibles” aquellos más débiles, los que no pagan cuotas.

Tal como señala Calveiro (2012) tanto la existencia de la “delincuencia juvenil” aquella que está dada por la consecución de “ilícitos menores”, que por cierto son las causas mayoritarias que determinaron la disposición tutelar de estos jóvenes a los que vengo haciendo referencia directa e indirectamente), como la “delincuencia organizada” de la que, por su lectura²⁵, entre otras expresiones forman parte los negocios que suponen las redes ilegales dedicadas a los secuestros, tráfico de armas, drogas y órganos, como de personas con fines de explotación sexual...

“Ambas son funcionales a las actuales formas de organización, acumulación y concentración del neoliberalismo. En ambos casos se contribuye desde una perspectiva bélica un problema de orden social y político, lo que permite desplegar una gran cantidad de violencia tanto en el ámbito nacional como internacional. Estas guerras tienen el objeto de justificar la violencia estatal necesaria para intervenir en cualquier lugar del planeta y de la sociedad, haciéndolas funcionales al sistema global”. (Calveiro; 2012:170)

Y tal como se observa a partir de lo que cíclicamente se instala en la agenda mediática, como también en la agenda política (electoral), se aumentan

²⁵ Si bien, Calveiro realiza una lectura crítica de lo que supone la “guerra” contra el narcotráfico como expresión del crimen organizado, recupero en este análisis que no es posible aislar los fenómenos de la “delincuencia juvenil”, o la “delincuencia organizada” de las múltiples dimensiones que dan origen a estas expresiones y al cual se dice desde los sectores, políticos o económicos, dominantes estar dispuestos a atacar, combatir.

las convocatorias para las escuelas de policía, el refuerzo de más y sofisticadas armas, patrulleros y equipos; para que (ésta) la policía pueda ser efectiva en el combate contra la delincuencia, el narcotráficos y las redes de trata etc; lo cual genera y/o refuerza el imaginario de aquella intervención (demandada) y brindar seguridad. Aunque en realidad es dable sostener que frente a aquello que es presentado como “amenaza” “peligro” se da vía libre, se justifica el poderío bélico y represivo.

“Toda vez que un hecho delictivo cometido por jóvenes llega a la instancia público mediática, se abre el nunca saldado debate sobre la violencia juvenil, la participación de los adolescentes en delitos y las siempre percibidas como insuficientes medidas jurídicas hacia ellos, sea por motivos de índole procesal (leyes inapropiadas) como por razones de política criminal (edad de imputabilidad y límite punitivo del Estado). Ambos motivos concitan fervorosas discusiones sin solución de continuidad, toda vez que no se terminan resolviendo en cambios legislativos sino que reubican y mantienen “candente” el debate que se repliega para una próxima vez, siempre para la próxima vez” (Daroqui-Lopez;2012:61)

Ante lo cual se puede advertir que el peligro de actuar sobre el fenómeno a partir de lo reflejado en los medios de comunicación con la base de una sensación, y/o especulaciones frente a la ausencia de una lectura de los acontecimientos que reflejen empíricamente con datos fiables este “prejuicio” que se funda sensaciones y temores respecto de una población juvenil vulnerada y vulnerable.

Tal referencia da cuenta que es vulnerada en sus derechos desde el nacimiento, siguiendo con lo argumentado anteriormente, a partir de los múltiples inaccesos a servicios de salud, educación, alimentación vivienda a los que en su grupo familiar de origen han sido privados.

Al mismo tiempo se sostiene que son vulnerables, frente al poder acumulado a partir de los medios de comunicación social, las reproducciones de figuras televisivas con amplia referencia y adhesión popular como Susana Giménez, Mirta Legrand “entre otras” referentes del sentido común que dicen representar aquello que “la gente dice, la calle dice”. Como también otros muchos periodistas y editores de prensa, que operan como los “intelectuales

orgánicos”, siguiendo a Gramsci²⁶, y contribuyen e instalan espasmódicas, atemporales y aleatorias reacciones de endurecimiento de penas, acciones que tiendan a reforzar detenciones sin respeto a marcos legales del debido proceso, como se ha visto en diferentes situaciones en provincias y ciudades bien disímiles entre sí en cuanto a condiciones geográficas y recursos.

Todo ello se refuerza si se tiene en cuenta también las influencias que ante cada momento electoral, la multiplicidad de candidatos dicen que se pondrán a trabajar, solucionar, acabar, enfrentar ... el problema de los adolescentes y jóvenes con causas penales, a quienes se los hace aparecer como colectivo peligroso, amenazante y depositario de las demandas de los “ciudadanos que pagan sus impuestos, que trabajan, que viven bien, que son gente común, normal” todas expresiones que a diario se reproducen e instalan en la agenda mediática y política de la más baja calidad.

Es también como sostiene Kessler (2010), que tal ausencia de información confiable, de un campo de estudio o investigación, que instale un debate público y confronte con los productos generados por los medios de comunicación, contribuyó a la creación, construcción de la *cuestión criminal* fundada en aquellos prejuicios, sensaciones referidas como también que deparan políticas erróneas, por ser erróneo el diagnóstico de base con consecuencias más terribles que reparadoras de aquella situación que ha dado origen; basta con recuperar lo acontecido con el acontecimiento del secuestro y muerte de Axel Blumberg y lo motorizado por el “*ingeniero*”²⁷ y sectores aliados y políticos de turno.

Aunque este acontecimiento será retomado en el capítulo siguiente, es necesario tener en cuenta que las reformas legislativas alcanzadas con celeridad en el año 2004, conllevan el debate que desde inicios de 1990 se

²⁶ Cabe destacar que el intelectual orgánico es aquel que es puesto en la función de intelectual por una de las clases sociales fundamentales (burguesía y proletariado), y están por lo tanto vinculados orgánicamente a una de estas clases sociales. Asimismo, su función social es la de dar coherencia interna, homogeneidad y difusión de las concepciones de mundo de dichas clases sociales.

²⁷ Se destaca la profesión atribuida, y por la que no fuera sancionado, por Juan Carlos Blumberg, teniendo en cuenta que ésta ha sido su carta de presentación con la que ganara visibilidad y notoriedad en su reclamo por el esclarecimiento y justicia por la muerte de su hijo Axel. Al mismo tiempo queda expuesta esta figura a partir de lo que Cesaroni (2014) recupera de Becker, Howard (2008) como “*emprendedor moral*”; entendiendo por tal “*aquel individual que posicionándose como representante de la sociedad en su conjunto, promueve iniciativas de reformas de normas. En general suelen ocupar posiciones acomodadas en la estructura social que utilizan como capital en sus cruzadas simbólicas.*” (Cesaroni;2014:33)

situaron en cuanto a disponer de *mano dura frente a los jóvenes y el delito* o los intentos aún no alcanzados por la *baja en la edad de imputabilidad*.

“Y si bien la violencia, el delito y su relación con los jóvenes deben ser materia de problematización y análisis, la cuestión tratada de aquel modo solo reduce al recate del mapa de sensaciones, reemplazando al mapa de delitos construido, idealmente, sobre bases mas confiables o al menos mas certeras que las impresiones. El malestar ante el delito se proyecta exponencialmente y se convierte en la demanda urgente e impostergable de modificar el estado al solo efecto de endurecer las consecuencias punitivas hacia aquellos que son identificados como los sujetos peligrosos causantes de inseguridad: los jóvenes, específicamente los varones y pobres, mas aun si pertenece al nutrido contingente de los que “no estudian ni trabajan”, candidatos a portar los atributos de peligrosidad que mas temor generan en la ciudadanía. Para ellos, mas y “mejor” castigo y a edad mas temprana. Estas demandas se realizan desde la opinión pública muchas veces en forma irresponsable, ya que carecen de información sobre las prácticas de las instituciones que componen la cadena punitiva (policía-justicia-cárcel) y sobre sus intervenciones en términos de alcance, periodicidad y temporalidad respecto del universo de jóvenes” (Daroqui-López; 2012:62)

Frente a ello, se viene incrementando y proponiendo a la “ciudadanía” a “la sociedad civil organizada” en tanto elemento único y genuino para la resolución de *los conflictos propios*.

Con lo cual; la polarización entre buenos y malos, ricos y pobres, normales y anormales, niños y menores, instalada a través de los medios de comunicación hegemónicos y también por medio de intelectuales orgánicos, contribuyen a hegemonizar explicaciones, sentidos y miradas.

Las intencionalidades por restituir los derechos de ciudadanía nos debe hacer pensar en qué medida se puede restituir algo que nunca se tuvo o conoció; si ya son segunda generación de privación de derechos de ciudadanía, sobrevivientes de la mortalidad infantil y padecientes de toda clase de vulneración de derechos.

A ello es posible sumar, para una mayor comprensión, que esta imposibilidad de ser asimilado, remite necesariamente a un opuesto que la explica; estar al margen o la marginalidad en tanto “término de índole espacial que designa, por defecto, un lugar central, un centro de referencia” (Augé;2007:45)

Todo ello; es sin duda, expresión de las transformaciones sociales a las cuales venimos asistiendo desde fines del siglo XX, en particular para nuestra realidad argentina desde los inicios de la década de los '90, han resultado en una solución de continuidad la pérdida de derechos sociales adquiridos, conquistados como producto de las luchas y reivindicaciones sociales dadas²⁸.

Los efectos del proceso de globalización y la implementación de políticas de ajuste neoliberales han echado por tierra estos derechos conquistados, con la modificación del modelo de organización de la sociedad, el trabajo y los beneficios que de éste surgían (empleo, protección social) conformaban una *tríada orgánicamente articulada*, tal como lo caracteriza Martinelli (2005).

Es necesario de tener en cuenta si se piensa en los impactos que tiene en la conformación de la infancia, a la cual se la ha conceptualizado desde distintas disciplinas en modos y términos ampliamente disímiles, que a su vez acuerdan en que en la actualidad asistimos a una adultización de la infancia, donde lo que era considerado como propio de esta etapa de la vida hoy les está siendo robado, les está siendo negado el derecho a la educación, la recreación, la vida digna en todas sus dimensiones; que al decir de Barg (2006) es necesario comprenderla como proceso de *privaciones* y *deprivaciones* del modelo de sociedad vigente.

²⁸ Al respecto Martinelli reflexionando sobre el Servicio Social es una profesión que tiene un compromiso con la construcción de una sociedad humana, digna y justa. para caracterizar este proceso destaca retomando los aportes de Marianela Chauí, que "...asistimos a un verdadero desmonte de la sociedad, a una verdadera implosión de derechos sociales conquistados hace mas de doscientos años, con las duras luchas, desde la Revolución Francesa de 1789". Ver en REFLEXIONES SOBRE EL SERVICIO SOCIAL EMANCIPADO. Ponencia Departamento de Servicio Social da Universidad Estadual de Ponta Grossa, PR, 10/11/2005.

CAPITULO II

**“DEFENDE LA REBELION
QUE NO ALTERE LA RUTINA
EL POETA EN LA LEONERA,
LA MUJER EN LA COCINA”**

2.1 ACERCA DE LOS DISPOSITIVOS DEL ESTADO PARA JÓVENES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL.

Para dar inicio al desarrollo del presente apartado, y sin pretender trazar un recorrido exhaustivo respecto de los orígenes del Consejo del Menor²⁹, que con el paso del tiempo y reformas jurídicas devino en la actual SENNAF; es posible observar tal como lo exponen entre otras Garello (2010) y Hourquebie (2012)³⁰, que las primeras intervenciones datan de mediados de los años 1600, cuando se abren las primeras casas para “jóvenes huérfanas y honestas”.

Años más tarde, se crea en lo que es en la actualidad el Centro de Estudios dependiente de la Secretaría de Niñez Adolescencia y Familia; El Centro Garrigós, en el barrio porteño de La Paternal, que aún conserva en la fachada sobre la puerta de entrada y puede leerse “Casa de Huérfanos Amalia Bogado de Garrigós”,

Tal como se expuso anteriormente el Régimen del Patronato, abarcaba la corrección de aquellos menores en situación de peligro moral o material, que podrían resultar de múltiples situaciones, tal como señala Hourquebie (2012:17)

“... cuando los padres o tutores incitan al menor a actos perjudiciales a su salud física o moral, a la vagancia, a la mendicidad, su frecuentación a sitios inmorales, venta callejera o son ocupados en empleos perjudiciales a la moral o a la salud. También se refiere a los *menores delincuentes*, entendiendo por tales aquellos a quienes se les imputa un delito o infracción a la ley penal”.

Al respecto se recupera una frase ilustrativa del Dr. Carlos Arenaza, médico legista de la policía, (cuyo nombre fuera utilizado para un Instituto de Menores) quien en 1927, sostenía que “por la salud física, la raza, la salud moral, por el porvenir de las nuevas generaciones, por la grandeza de la patria, es indispensable cuidar la cosecha humana, y prestar a la infancia la atención que se merece”. (Gallo, 2004:20)

²⁹ En el Anexo N° 2 se ofrece una síntesis cronológica de la institucionalización de la niñez/infancia elaborada por Filgueira Risso – Irigoin y Leguizamón Universidad del Salvador (2004)

³⁰ Vuelvo a recuperar los aportes realizados en sus Tesis de Maestría y Doctorado, en tanto permiten comprender con su lectura el proceso del que hago referencia y que han desarrollado; al tiempo que por ser Trabajadoras Sociales con quienes he compartido y debatido en torno a la intervención profesional como parte del Servicio Social del Instituto Manuel Belgrano .

Y si bien se han sucedido una serie de modificaciones en este largo proceso, que abarcó más de 80 años; y que pueden identificarse en cambios de nombres, estilos de organización de la vida cotidiana de la población asistida, no siempre implicaban que tales modificaciones alcanzaran el nivel de la intervención profesional la cual refrenda(ba) el paradigma tutelar.

Centrando en los fines del presente trabajo, vale recordar que en el devenir de este proceso de legalización e institucionalización, ha sido el Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, el organismo encargado de formular, diseñar y aplicar las políticas públicas; las cuales no han quedado exentas de los procesos de ajuste iniciados a mediados de 1970, con la hegemonización del modelo neoliberal que impregnó las dimensiones social, política, económica, lo cultural, reconfigurando el rol del Estado, tal como se ha planteado anteriormente.

“La retirada del Estado de sus funciones asistenciales y redistributivas, ha desarrollado un agudo proceso de pauperización, que agrava en términos de magnitud e intensidad los índices de pobreza”. (Garello, 2010:27)

Tal como se daba cuenta en el anterior apartado, las respuestas que se ofrecían para quienes conforman ese universo de los “menores” a quienes abarcaba toda una variedad de situaciones y multicausalidades que lo colocaban en esa situación/condición; universo que incluye a quienes se encontraban en situación de “vulnerabilidad socio penal”, se centraban en una perspectiva tutelar, punitiva.

La legalidad queda garantizada y de ella da cuenta el siguiente extracto del artículo 1 del Decreto Ley N°22.278/80, del Régimen Penal para jóvenes:

“En caso necesario pondrá al menor en lugar adecuado para su mejor estudio durante el tiempo indispensable. Si de los estudios realizados resultare que el menor se halla abandonado, falto de asistencia, en peligro material o moral, o presenta problemas de conducta, el juez dispondrá definitivamente del mismo por auto fundado, previa audiencia de los padres, tutor o guardador Art, 1 Régimen Penal Juvenil 22.278

Para ello el Consejo de Niñez Adolescencia y Familia, contaba con un diseño de programas, algunos con modalidad abierta, a donde los jóvenes eran derivados como “instancia de egreso” del Instituto de Máxima Seguridad”

conservando la disposición judicial, lo cual sostenía en definitiva una privación de la libertad ambulatoria, en tanto estos jóvenes no eran autónomos para elegir quedarse o irse, o poner fin a su permanencia, en tales destinos.

Dentro de aquel abanico de espacios “alternativos” se podía dar cuenta de los Hogares Convivenciales, Residencia de Convivencia e Integración Comunitaria. En ambos casos estos diseños apuntaban a un perfil marcado como socioeducativo, en donde la no permanencia de los jóvenes junto a las variadas circunstancias que los han llevado hasta allí, resultaba infructuoso un abordaje y construcción de alternativas a las medidas de privación de la libertad en los Institutos.

Respecto del acompañamiento brindado una vez egresado del Instituto, y que en la mayoría de los casos se iniciaba con el conocimiento entre el joven y el profesional una vez fuera del Instituto; aunque no por ello habiendo cesado la disposición judicial/tutelar en la mayoría de los casos, el Programa Libertad Asistida, con un abordaje con características terapéuticas en el entorno socio-comunitario del joven y que fuera habilitado por disposición, oficio judicial. Este Programa, con sus matices y diferencias, podría ser homologado con lo que en el proceso de los tutelados mayores de edad viene a cumplir el Patronato de Liberados.

Paralelamente se encontraban otros vinculados con la “recuperación” por el consumo de sustancias psicoactivas como lo eran las Comunidades Terapéuticas, en su mayoría por convenio con Fundaciones, como también Clínicas o centros de atención psiquiátrica.

Vale el siguiente aporte que realiza Garelo, respecto de aquella perspectiva a la cual hacía referencia anteriormente:

“Es decir, causas asistenciales o presuntas causas penales posibilitan la judicialización y la institucionalización. En el modelo de responsabilidad se pretende abarcar sólo aquellos procesos iniciados por presunta comisión de delito, desestimando la variable contexto familiar como determinante de la intervención judicial”. (Garelo;2010:56)

Estos dispositivos, a los que anteriormente se los había nominado como de *tratamiento de conducta*; de los cuales a los fines de este trabajo se priorizará aquel que estaba destinado a la atención de jóvenes *en conflicto con la ley*, mediante el dispositivo de la internación en Institutos de Máxima

Seguridad de (conocidos a partir de las reformas dadas en el año 2008 como Régimen Cerrado y luego Centros Cerrados); estaban destinados a alojar a los adolescentes varones.

Su ingreso y permanencia estaba dado bajo disposición judicial, y acorde a la edad que poseían ingresaban a los institutos de seguridad distribuidos en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires; tales como Gral. San Martín, Manuel Rocca, Gral. M. Belgrano (ex Santa Rosa, que alojaba mujeres) y Dr. L. Agote; mientras que para las mujeres solo se contaba con el Instituto Úrsula de Inchausti.

A partir de lo investigado por Garelo S.(2010:129-130); se recuperan y presentan algunas características de estos Institutos:

- **Instituto Gral. José de San Martín**, destinado a niños y adolescentes menores de 15 años, la capacidad de recepción es de hasta 80 varones, tiene sector de admisión y evaluación, los tiempos de internación son en general cortos, ya que recibe a la población masculina más joven del sistema, en sus primeros acercamientos a la infracción a la ley penal.

- **Instituto Manuel Rocca**, tiene un sector de admisión y derivación (antiguo Centro de Admisión y Derivación) y otro de permanencia para jóvenes varones entre 15 y 16 años; puede albergar hasta 200 adolescentes. El tiempo que dure la internación depende del sector en que se encuentre alojado el joven. La población que se recibe puede ser primaria en su contacto con el delito o ser reincidente, es decir estar acusada de la comisión de delito en más de una oportunidad.

El Centro de Admisión y Derivación, CAD, fue creado a inicios del 2000, con dos sedes, una en Tribunales de CABA (Poder Judicial) y otra Sede Central en el Instituto San Martín, con la finalidad de recepcionar a niños y jóvenes acusados de comisión de delito, evaluar su situación judicial y psico-social y luego elevar al juez interviniente una propuesta acorde a la evaluación general que puede constituirse como medida de internación o una alternativa de externación. El CAD, sede central, se traslada posteriormente al Instituto Rocca. Pero dado que la finalidad propuesta no se cumplía, en el año 2005 se cierra esta parte del circuito institucional, incorporando este instituto su población. Por su parte, el CAD sede Tribunales continúa en funcionamiento.

- **Instituto Gral. Manuel Belgrano**, para adolescentes varones entre 17 y 18 años; denominado instituto de permanencia, puede albergar hasta 60 jóvenes. Recepciona adolescentes y jóvenes derivados de otros institutos, por cuestiones relacionadas con su conducta o por ser reincidentes. Los tiempos de internación son extensos, en general de acuerdo al hecho cometido o a la reincidencia en las infracciones a la ley.

- **Instituto Dr. Luis Agote**, denominado también instituto de permanencia; puede alojar hasta 45 jóvenes varones de 19 años y más. Al igual que el Instituto Belgrano los tiempos de permanencia son más extensos que en el resto de los institutos. Recibe a la población de mayor edad dentro del sistema, y algunos de ellos se encuentran esperando su traslado a Unidad Penal de adultos cuando cumplan su mayoría de edad.

Los Institutos San Martín y Rocca (sector admisión y evaluación) son institutos que tienen el objetivo de admitir y evaluar la situación de los niños y adolescentes que allí ingresan, y en función de esta determinación propiciar otras vías de resolución del tema o continuar con el encierro. Los otros dos institutos, Belgrano y Agote, albergan adolescentes con tiempos de permanencia más largos, lo que implica cierta estabilidad poblacional en los institutos con grupos atareos de mayor edad.

- **Instituto Úrsula de Inchausti**, es el único instituto que alberga mujeres de todas las edades, tiene capacidad para alojar a 25 personas. En su funcionamiento es similar al Instituto Rocca, ya que centraliza la admisión, evaluación y permanencia de las jóvenes, por lo cual los tiempos varían de acuerdo a esa primera evaluación. Concentra tanto niñas y adolescentes primarias en la comisión de delito como a quienes reiteran conductas de este tipo. Cabe mencionar que las adolescentes pueden ingresar embarazadas y/o con hijos de hasta dos años de edad.

Los diseños y objetivos institucionales han ido variando a lo largo del tiempo y existencia de estos dispositivos, pero vale señalar que durante este periodo que está siendo objeto de análisis, se sucedieron tanto a nivel del Instituto Belgrano en particular, como en general en la estructura del entonces Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (devenido en SENNAF), una serie de situaciones y transformaciones.

Y que mientras algunas de ellas contribuyeron a la visibilización del problema, muchas otras sin embargo reforzaron su naturalización, sorteando coyunturas y contextos particulares que le dieran viabilidad y vigencia.

Los *efectos producidos por el modelo neoliberal vigente*, en los lineamientos de las políticas públicas; y como por otra parte las posibilidades dadas con la incorporación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, como también de las adecuaciones normativas que se han ido sucediendo, a nivel Nacional, Provincial como del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a nivel de Órganos Técnico Administrativos, fueron derivando una serie de adecuaciones, transferencias y descentralización en los niveles Provinciales de programas a partir de la creación del Sistema de Protección de Derechos, con la sanción de la citada ley 26.061.

Esta ley, que aunque no rige en materia penal, pone en tensión las formas de abordar un cúmulo de situaciones que depararon en el encierro, la privación de libertad, por tratarse simplemente de menores y/o familias pobres; o si se quiere jurídicamente argumentado por encontrarse en situación de peligro moral o material, por causas asistenciales; plantea una línea de políticas de restitución de derechos, atendiendo a los criterios de la universalidad, la

indivisibilidad y la no discriminación, pero también a la irrenunciabilidad y la interdependencia.

Es necesario destacar que las que a continuación se detallan, no son las únicas que se han sucedido en cuanto al proceso de transformación del Organismo y Dispositivos; ni sostienen una cronología, como tampoco refieren una relación causa-consecuencia.

De este modo, en este periodo se suceden reformas que podrían ser consideradas de *carácter técnico administrativas* en el Organismo; en donde si es posible señalar los intentos de adecuación a las normativas internacionales por medio de la puesta en debate “puertas adentro” de prácticas, espacios como también nominaciones que no se ajustaban al espíritu de la Convención Internacional de los Derechos del Niño.

Todo ello, estaba recogiendo el proceso de discusión y creación de o que fuera a finales del año 2005 la ley nacional de Promoción y Protección de Derechos, a la que se hiciera mención oportunamente.

De allí que se han ido sucediendo algo más de 4 reestructuraciones del Programa que en un principio era uno de los tantos Programas que pertenecían a la órbita del Consejo Nacional de Niñez Adolescencia y Familia; y que luego del 2005, por la *transferencia y descentralización* referida anteriormente, ha sido uno de los pocos que han quedado bajo la órbita administrativa de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia.

A partir del inicio de estos procesos de adecuación a la normativa internacional, lo cual deja la derogada la ley de patronato quedando pendiente la cuestión de la sanción de una nueva ley en materia de “responsabilidad penal juvenil”.

Además de cambios en la disposición de Recursos Humanos, en cuanto a las conformaciones de los equipos técnicos profesionales y su rol a cumplir en cada uno de los Programas y Espacios de inserción profesional, se puede dar cuenta del cambio de rol que se le atribuía al “personal de seguridad”, al menos en cuanto a lo delineado en los documentos institucionales; incluyendo la figura de operadores convivenciales como un actor que demarcaba el corrimiento de la visión del castigo como disciplinamiento a un eje socioeducativo.

2.1.1 Respetto de las características y procesos de cambio que se dieron en el Instituto “Manuel Belgrano”.

“El Belgrano” que cuenta con un total de 60 plazas, alcanzó un nivel máximo de sobreocupación en cuanto a la capacidad de alojamiento, con un total de 90 jóvenes privados de su libertad, incluso varios de ellos con “rango de edad” superior a lo estipulado, durante este periodo de análisis; en contrario con lo declamado en la letra de los documentos y lo expuesto tanto discursiva como mediáticamente.

También se sortearon diferentes instancias críticas tales como un periodo de cuarentena por *tuberculosis*, que “no fue detectada en otro Instituto de procedencia”, situación que significó el traslado del joven y su internación por un espacio de más de 45 días en el pabellón de mayor complejidad con que cuenta el Hospital Francisco Muñiz³¹.

Al mismo tiempo, como acontecimientos con mayor escala de violencia y significatividad, en este periodo de análisis del que se da cuenta, se sucedieron dos intentos de motines los cuales requirieron de la intervención policial por la magnitud alcanzada.

En ambas instancias tuvieron lugar durante la madrugada, siendo “disuadidos”, durante el amanecer, con la violencia que caracteriza la irrupción de los “grupos especializados” de la policía.

El segundo de los casos, fue el que alcanzó de mayor nivel de destrucción del espacio común y donde mayor parte del tiempo transcurren los jóvenes.

A partir de estos últimos acontecimientos, con la llegada de un equipo de dirección nuevo surgido con profesionales de equipos técnicos de otro Instituto de las mismas características y condiciones permitieron por iniciativa de parte de los profesionales del equipo técnico iniciar un espacio de acompañamiento

³¹Esta situación, como muchas otras que podría seguir referenciando, ha quedado invisibilizadas, sin una intervención de parte de la SENNAF, y considero que le resulta ajena; aunque resulta determinante en la vida de este joven (como los otros los sujetos que sencillamente en este tiempo y espacio simplemente son: alojados en dispositivos de encierro).

Y que más allá del acompañamiento dado por el Servicio Social, no le fue posible concretar estrategia alguna que permitan modificar las condiciones de habitabilidad en la que residía el joven y su madre, en un asentamiento de la zona sur del conurbano bonaerense.

Más aún la búsqueda de algún familiar, como por ejemplo una hermana de la cual daba cuenta el joven, como intento por modificar alternativas de la construcción de estrategias y condiciones de vida para el egreso del joven; no había sido tenido en cuenta por ningún otro de los equipos técnicos ni programas que habían intervenido con anterioridad en la vida del joven.

intra pabellones, superando la mera entrevista individual (predominio hegemónico de la clínica psicológica) que primaba como recurso de acompañamiento e intervención profesional.

Respecto a lo que supone la dirección como gestión en particular, se sucedieron tres cambios de directores, lo cual generaba modificaciones que incidían en la cotidianeidad de los jóvenes y del trabajo de los equipos técnicos profesionales, alcanzando también a las áreas de educación y salud.

Los equipos técnicos profesionales reconfigurados tanto en la ampliación de las áreas comprendidas, como también en lo que en cuanto a sus funciones y objetivos institucionales que se esperaba que puedan alcanzar.

De allí que, para el caso particular del Instituto Belgrano, las áreas de seguridad, educación y salud contaban con sus representantes en las reuniones semanales, para la discusión y creación de acuerdos comunes el acompañamiento de los jóvenes, allí alojados, y sus familias.

De modo tal que lo antes referido fue una estrategia surgida a partir de poner la propuesta en debate dentro de éste ámbito, como también, los reglamentos para las visitas, la creación de una revista interna “El Sueño y la Libertad”; que luego su coordinación quedó dentro del ámbito escolar, desde donde además desarrollaron otro proyecto “Las Grietas” vinculado con la expresión literaria y en articulación con otros jóvenes privados de la libertad en establecimientos de régimen cerrado dentro de la Provincia de Buenos Aires y Unidades Penales, como también muchos otros (inclusive de otros países) que a través de la utilización de Internet compartían el proyecto, por el cual al cuento que éstos jóvenes iniciaban, otros integrantes de la red le componían un final.

En este recupero de otras iniciativas, resulta pertinente poder incluir también las articulaciones con referentes barriales, con quienes se ha sostenido desde el equipo del Servicio Social acciones conjuntas en el trabajo cotidiano, tanto *intra o extra muros*, buscando de dar una mayor *apertura* a partir de aquellos pequeños instituyentes que se podían recuperar en el marco de la restitución de derechos.

Estos ensayos habilitados por el “*cambio de espíritu*” dentro de la normativa, pese a las altas resistencias que encontraba de parte de muchos de

aquellos actores intervinientes, con algunos de estos jóvenes contribuyeron a poder pensar estrategias de acompañamiento que favorezcan a la revinculación sociofamiliar desde un proyecto de vida alternativo y autónomo, eje que será objeto de trabajo en el tercer apartado.

En coincidencia con lo señalado por Garelo (2010), los cambios que dentro de los Dispositivos se han producido, podían dar cuenta de un intento de mejorar condiciones de vida, alojamiento y permanencia de la población objeto, es decir los jóvenes infractores a la ley penal; "...sin afectar el sentido social que se le imputa al dispositivo del encierro como mecanismo de control socio-penal"³². (Garelo; 2010:94).

2.2 LA PRIVACIÓN DE LIBERTAD COMO RESPUESTA AL DELITO

Tal como se expuso el Instituto Manuel Belgrano es un establecimiento de Régimen Cerrado, que aloja a jóvenes, en Conflicto con la Ley Penal; por Disposición Judicial en tanto medida tutelar.

Cabe destacar que en la mayoría de los casos éstos jóvenes poseen más de una causa penal; situación que ha originado el "circuito asistencial" por otros institutos, de similares características antes mencionados: San Martín, Casa de Admisión, Rocca o Agote.

Los antecedentes de internación aparecen, desde la óptica de los actores que intervienen³³, como una instalación en un circuito de repetición³⁴; lo que requiere considerar la dinámica del dispositivo y el abordaje dado ante las

³² Recomendando la lectura de lo trabajado por Garelo en el Capítulo IV LA IMPRONTA DEL MODELO TUTELAR EN LA JUSTICIA PENAL JUVENIL ARGENTINA

³³ Se considera actor interviniente en primer lugar al adolescente que transita estos espacios; a los profesionales con quienes éste se vincula en lo cotidiano (incluyendo al equipo técnico tratante, docentes, poder judicial), como así también a quienes cumplen tareas de cuidado (denominados empleados de seguridad).

³⁴ La referencia al circuito de repetición estaba dada no solo por el ingreso/reingreso en el dispositivo de Institutos de Régimen Cerrado, sino que hace referencia a la "pérdida de la libertad", iniciado por causas asistenciales a temprana edad en la mayoría de las historias, con la derivación judicial en dispositivos abiertos o cerrados. Ver en ARREDONDO, Y OTROS (2006).

situaciones que ameritaron la disposición tutelar y su consecuente medida de privación de libertad.

A ello Foucault refiere como *complejo sistema carcelario* incluyendo...”no solo la institución de la prisión, con sus muros, su personal, sus reglamentos y su violencia; (sino también) efectos sociales reales y unas utopías invencibles, unos programas para corregir a los delincuentes y unos mecanismos que solidifican la delincuencia” (2002:276).

Sin duda alguna que estos (recorridos, trayectos o tránsitos), van dejando una impronta muy particular en la subjetividad de los jóvenes, que puede vincularse con lo indagado por diversos autores respecto de los orígenes del encierro; ya que el mismo, como función social, pretendía (y en la actualidad aún es o se espera que sea), entre otras, seguridad y control, reserva de mano de obra, “protección” y asistencia.

A su vez, a los jóvenes, por su condición de *“menor incapaz”* *habría que resocializarlos* para que fuesen útiles en la sociedad, por lo que la respuesta a través de dispositivos de encierro vendría a reparar lo que no pudo lograr la familia ni tampoco la escuela, en tanto primeras instituciones, a las cuales el Estado confía la conformación del sujeto.

Vale recordar, en primer instancia que:

“La cárcel creada por la sociedad capitalista para disciplinar/corregir aquellos sectores sociales que el propio sistema ha ido erigiendo en sujetos marginales/peligrosos a controlar, completa el accionar de otros instrumentos de control social como son la fábrica, el ejército, el asilo, el hospital y el manicomio entre otros. Funciona como instrumento de control punitivo a través del encierro de individuos que han cometido delitos y que como anormales a corregir se les aplica aquel dispositivo penitenciario bajo el sustento justificatorio de la ideología correccionalista. A la par de cumplir una condena, se los somete a un régimen que implica regulación de rutinas y de comportamientos para modificar o subsanar los condicionantes que los colocaron en situación de desviados o marginales de determinado orden socioeconómico imperante”. (Puebla, Daniela; 2008:97)

Es un establecimiento que se destina a brindar seguridad de penados y procesados. Es un lugar de reclusión que aloja a quienes han sido acusados o condenados por el sistema judicial por trasgredir normas legales cometiendo un delito.

“La cárcel es una institución cultural que es utilizada como instrumento para dar sentido a los impulsos punitivos de la sociedad, de ahí la permanente identificación que se efectúa entre castigo y cárcel. Su existencia ha estado siempre acompañada por discursos justificadores para salvar deudas con la sociedad” (Mamaní Gareca, V.; 2005:28)

En segunda instancia, la categoría de interno, es quien marca la naturalidad con la que transcurre la institucionalización en el interior de un espacio físico, desde el momento en que son privados de su libertad. Debido a esta situación, pasaron a formar parte “formalmente” (ya que a partir de allí fueron tutelados por el Estado) de la categoría “menor”. Es decir, dejaron de ser “*niños*” para convertirse en “*menores*” y por lo tanto fueron “protegidos” por el Estado. El juez pasó a nominarlos y a asignarles sus próximos espacios de circulación y pertenencia.

“...La palabra del juez transforma al *niño* en *menor*...lo sujeta políticamente al Estado y reorienta definitivamente todas sus propuestas que lo confirmarán en la identidad “sustantiva” de menor...” (Costa y Gagliano, 2000: 112).

Tal como señala J.C. Volnovich (2005); los “jóvenes marginales” del estado neoconservador no se ajustan a los sistemas clasificatorios. Es decir, son sucesiva y simultáneamente un poco delincuentes, un poco adictos, un poco chicos de la calle, un poco desocupados, un poco trabajadores precarios, un poco repetidores y un poco desertores del sistema escolar. Participan de redes de sociabilidad diferenciadas y se escabullen inaprensibles de los diagnósticos institucionales. En consecuencia el proceso de marcada desafiliación por la exclusión del sistema educativo, de salud y del trabajo genera la falta de inscripción en formas estables de socialización.

El delito como problema social al tiempo que no está aislado de otros como son la pobreza, el desempleo, la desigualdad o la inseguridad; no conlleva una relación directa que sirva de explicación o justificación, sino que son factores que están (o deberían verse) interrelacionados e incrementan situaciones de vulnerabilidad³⁵, a la que, en particular, los jóvenes se

³⁵ Siguiendo a D. Puebla (2008) en el análisis de la cuestión penal desde la Criminología, hace referencia a “una serie de condicionamientos en los procesos de construcción de trayectorias delincuenciales con serio compromiso penal (criminalización). Estos se refieren a circuitos de daños como por ejemplo: enfermedades no curadas a tiempo, déficit alimentario, violencias (familiar, institucional de grupo de ares), vulneraciones de derechos (a la salud, a la educación. A ser socializado y contenido en su propia familia y

encuentran expuestos y que debiera ser vista como manifestación de la “cuestión social”.

Míguez (2004) al retomar el análisis que realiza R. Merton, como principio general para el análisis del problema del delito, establece una relación entre expectativas que la sociedad genera y las posibilidades reales de alcanzarlas; por lo que la transgresión a la ley, el delito, es la manera de alcanzar lo que por medios convencionales no es posible. Por lo cual la inmediatez por obtener algo, aquello que se quiere, desea o necesita no es posible cubrirla con aquello que tradicionalmente se encuentra asociado con el empleo – salario.

Volviendo a lo que plantea como explicación Merton, la diferencia, el desequilibrio predispone (para el caso) a estos jóvenes a la transgresión de la ley; sabiendo que “la relación empleo y delito no se rige exclusivamente por la necesidad económica, sino principalmente por la degradación de valores” (Míguez; 2004:30), en el sentido que prevalece la adopción de un sistema o jerarquía de valores que no le son propios a los sujetos sino que están dados, establecidos por aquello que estimula el consumo, el tener.

En otras palabras, los estímulos y ofertas propagandeadas, impactan en condiciones de privación generando sobre todo en los jóvenes un aumento de respuestas ilegales, frente a lo establecido.

Ante lo cual es interesante el análisis crítico que realiza Ciafardini (2010:246) respecto del delito urbano; en donde las “causas”, como he referido anteriormente representan lo visible de un conjunto de causas no visibilizadas y son de carácter estructural, producto de un conjunto de decisiones políticas, económicas, sociales, culturales.

“Entonces, está claro que la profundización de la marginalidad está relacionada con el aumento de ciertas acciones criminales que son, básicamente, robos y hurtos con bajo nivel de penalización. Sin embargo, si se trata de pobreza o marginalidad o desocupación, es buscarle una sofisticación al análisis que no viene al caso. Porque si aumentó la desocupación no quiere decir que el desocupado, el que se quedó sin trabajo, salga a robar. Pero si quiere decir que ese desocupado, que tenía un trabajo formal, saldrá a hacer changas, que es un trabajo

en su comunidad...; así quedan expuestos amplios sectores sociales lo que deriva en situaciones de extrema enajenación y exclusión, y los que puede exponer a adoptar estrategias de vida de ilegalidad y de conflicto con la ley penal” (2008:20).

informal, ya que, evidentemente, está mejor capacitado porque estaba trabajando. Los menos capacitados o los que por distintas razones estaban haciendo esas changas, tendrán, entonces, mucha mayor competencia, se quedarán sin esas changas y, al quedarse sin esas changas, se quedarán sin nada. Y sus hijos, que ya ni siquiera recibirán las migajas, a ellos no les quedan muchas alternativas”³⁶

Más aún las reconfiguraciones en los “roles tradicionales” dentro de una estructura de la familia ligada al varón proveedor (incluyendo la figura del padre o del hermano mayor), permite pensar que quienes perduran en la inestabilidad laboral van perdiendo progresivamente la capacidad de transmitir a las nuevas generaciones valores tradicionales vinculados al trabajo, a la educación, la familia e incluso la casa; lo cual hace posible que los valores con los que construyan un proyecto estén ligados con la transgresión y el delito: “pibe chorro no se nace: se hace” señala Míguez (2004:30-32).

Surge entonces que; la violencia representa o puede ser entendida como expresión de coraje, destreza física, mediante la cual se sustenta un inmediatez que posibilita cubrir la necesidad de disfrutar de manera repentina e ilimitada en tiempo y espacio.

Y que al mismo tiempo exterioriza una relación entre lo que por un lado se representa como esa carencia o privación económica, de recursos de unos frente a la no privación de muchos otros, y por otro la energía canalizada que tiende hacia esa apropiación de aquello de lo que es privado según lo establecido por el sistema vigente.

Porque tal como lo sostiene Ciafardini (2010) lo que está de base en esa relación, *por carácter transitivo*, “delito-desocupación” es la privación, por lo cual aquello que se transforma como respuesta a la no privación y que sectorialmente los más jóvenes encarnan, por tratarse de un “*hecho crónico*” se transforma en “*cultura o sub cultura*”.

En definitiva y siguiendo a Duschatzky (2002) son procesos de “destitución social” los que atraviesan estos jóvenes que sostienen conflicto con la ley penal; procesos que vinculan o más bien resultan de condiciones sociales, del contexto, en las que se desarrollan:

³⁶ Extracto de la entrevista publicada en la Revista PRÓLOGOS Volumen III (2010), que G. Nogueira realizara al Dr. Ciafardini Mariano abordando la criminología crítica y la cuestión del delito en la Argentina; y la relación dialéctica entre la causalidad del delito y la vulnerabilidad social.

“... cada orden económico y social va estableciendo condiciones que influyen sobre las formas de pensar, sentir, conocer y creer que los miembros de una sociedad adquieren. Incluso cuestiones aparentemente naturales y triviales como la forma de disponer las habitaciones en una casa, o las rutinas que desarrollamos haciendo las cosas de todos los días actúan como condicionantes muy importantes de la experiencia social de todos nosotros; nuestros valores, nuestros sentimientos y hasta nuestras actitudes están relacionadas con estas experiencias cotidianas” (Miguez;2004:33).

En los procesos de pauperización, y agudización de la condiciones de pobreza, establecidos desde mediados de los años 70, surge lo que para algunos puede ser conceptualizado como “pibe chorro”, con un marcado desaliento en el plano laboral, ligado a las precarias condiciones de estabilidad y remuneración en que las familias se encontraban (o encuentran).

En este periodo, como reseña Kessler (2010), se han sucedido desde los inicios de los años '90, una serie de investigaciones que se centraban en la exclusión social, la construcción de las esquinas como espacios de referencia, para luego pensar el problema como estrategias de supervivencia combinando actividades legales e ilegales, como también la violencia sufrida o la utilizada en sus actos.

Esta lectura advierte que de no ponderar los diversos factores causales, la multiplicidad de problemáticas que coexisten en un contexto amplio y que precipitan la determinación de una internación en institutos de máxima seguridad, se corre el riesgo de simplificar la mirada, admitiendo tal como se desprende del “discurso oficial” son antesala de una población que se encuentra a partir de la mayoría de edad en las Unidades Penales.

Es posible, en este sentido, seguir los planteos de Duschatzky (2002) “ampliar la mirada” respecto de aquello que es tipificado a nivel de códigos penales como delito, o tomando las expresiones de los mismos jóvenes *el choreo, salir de caño, meter caño*; al mismo tiempo que demanda atención y es invisibilizado por el sentido común y por la aplicación mecánica de sanciones a partir del acto cometido, el reclamo de un lugar:

“... la práctica del choreo está impulsada por otras demandas o búsquedas vinculadas a la conquista de un lugar en el grupo y de un sistema referencial que organice de algún modo el caos de la experiencia: a dónde pertenezco, en qué sistema de

valoraciones me incluyo, cuáles son las ventajas de pertenecer a un grupo etc.
... hacer algo, no importa que, brinda la ilusión de romper la inercia cotidiana, de adueñarse de algún modo del devenir, de decidir” (Duschatzky; 2002:45)

Por todo esto también puede ser concebido como un trabajo, el cual les es posible, para el cual no están capacitados como se exige habitualmente, pero que si, en gran medida, son parte resultante de ese sentido de pertenencia que se construye y de los códigos que detentan.

Los fenómenos sociales a los que se los puede considerar como “peligrosos, preocupantes o molestos”, pueden ser prevenidos mediante la aplicación de la ley, si se establecen como figura que configure delito y por tanto se introduzca en el código penal, a partir de una sucesión de casos que amerite la existencia de una regulación particular.

Aquello que no sea considerado bajo estos términos, sin que por ello suponga o signifique la desatención frente la gravedad de aquella situación, sino que lo que no puede probarse es qué utilidad aporta su creación como figura penal, como aquel intento de atender a las mismas por parte del Estado. Ello da cuenta que para la construcción de aquel instrumento que es el código penal, implica también un cruce con la cuestión de clase y poder que se construye para tal fin, como señalaba anteriormente.

La criminalización³⁷ de una persona, en tanto que “es necesario aplicar la ley penal y la represión” Ciafardini (2010:246); surge partir del cometer un delito, es decir conductas que se tipifican como tal a partir de aquello que amenaza el valor superior sobre el cual se sostiene una sociedad; y por tanto de lo que atenta contra aquello (que se modifica teniendo en cuenta contextos culturales, políticos sociales, económicos).

Esta criminalización se materializa a partir de la intervención de actores particulares, sabiendo que es a través de la policía o por la intervención de cualquier fuerza de seguridad, que llevan ante los jueces a *sus clientes*. Es en este circuito en donde también interviene un “criterio de selección” y que se

³⁷ Vale destacar que esta concepción de criminalización que se utiliza conlleva una lectura crítica por tender a la generalización de la criminalización de la pobreza, lo cual puede ser utilizado por sectores dominantes, conservadores etc. para justicia o continuar sosteniendo la relación causal explicativa que se traduce en pobre – desocupado – delincuente.

encuentra atravesado por los estereotipos que constituyen prototipos de quien es y no es delincuente; estableciendo de este modo quienes son personas más fácilmente aprensibles basados en los aspectos o condición.

Estas representaciones suponen una gravedad estructural ya que implican muertes y lesiones severas, al tiempo que con estas maneras de actuar construye una clientela que engrosa cárceles y comisarías.

A ello podemos hacer referencia desde los aportes de Senatore y Capello (2011) cuando, sostienen que las estrategias adoptadas por el Estado para el enfrentamiento de las *refracciones de la cuestión social*, centradas en el consenso y la coerción, siendo que para la primera el diseño de políticas sociales mientras que para la segunda además del uso de la vía represiva por parte del Estado, se desarrollan mecanismos de control social, por medio de la moralización, estableciendo lo socialmente aceptable y a lo que *se debe tender*, desde los valores dominantes, aplicando mecanismos de corrección de conductas desviadas, privando de su libertad.

“Los procesos de criminalización devienen así, en un control activo de la población, que por un lado bosqueja el perfil del infractor y por el otro robustece el etiquetamiento social profundizando estrategias de intervención de captura institucional. Una dimensión de análisis que revela esta dinámica es la dimensión reingresos” (Garello; 2010:173).

Por lo que su “*primer delito*” ha sido ser poseedor de estos estereotipos que determinan, situaciones que a partir de la comisión o no de un delito se complejizan con aquel *atentado y resistencia a la autoridad*, lo que se traduce de contestar mal al policía que lo para, o por salir corriendo.

El delito como “**problema social** en el que confluyen **factores personales, socio-políticos** de carácter estructural, que afecta al conjunto de los ciudadanos (sosteniendo que quienes conformamos esta sociedad nos debemos reconocer y hacer reconocer como sujetos portadores de derechos), evitando la polarización que la “pertenencia social permita que se imprima, justifica, invisibiliza y naturaliza”. Al tiempo que es **cuestión moral**, porque los derechos vulnerados deben ser reparados mediante acciones que impriman cambio en las conductas; y aunque resulte casi una obviedad es una **cuestión política** cuyos diseños y acciones concretas consideren al delito ya “no como una condición inherente a la persona del delincuente, sino como expresión de su vulnerabilidad social; una síntesis de factores sociales, psicológicos, culturales, políticos etc.” (Puebla Daniela 2008:50)

Particularizando la situación descrita y teniendo en cuenta los planteamientos de Beloff (2003) al hablar de privación de la libertad de adolescentes, es decir, personas menores de 18 años, sostiene que no hay un criterio escrito estrictamente consensuado, sino que hay un marco normativo nacional; al tiempo que plantea la existencia de consensos implícitos que subyacen y que surgen a partir del análisis de las práctica de funcionarios del sistema judicial de menores, lo cual se opone a los criterios consensuados de las normativas internacionales.

Esto, que no está escrito, pero que sin lugar a dudas cobra vigencia a partir de los *hablado o hablante*, y que se hace, está consensuado; que para ciertos actores y sectores podrá ser llamado jurisprudencia, una de las primeras cosas que nos hace pensar es (resultando una diferencia sustancial respecto del criterio que prevalece en el *Sistema de Protección de Derechos*), en la discrecionalidad del Juez de Menores.

Entonces, mediante la aplicación de esta medida de “*protección*”, lo que se persigue o se busca es resocializar, reeducar, a aquel que era (es) considerado objeto de esta tutela, que un juez determina, no a título personal, sino en nombre de un Estado coercitivo, autoritario; bajo el objetivo aparente de que no robe más, que se porte bien en adelante, que haga algo bien para él y para terceros.

Tal como se señalaba, el modelo de intervención estaba encuadrado bajo la Doctrina de la Situación Irregular, basada en la idea de un Estado paternalista, por lo cual habilita la intervención de sus órganos (judicial y administrativo) sin poder distinguir entre las razones de dicha intervención; aquello que se señalaba como causas asistenciales o de hechos calificados como delitos por la ley penal, lo cual conlleva a que se vulneren las garantías de las que goza aquella persona que se encuentra “sujeta a proceso penal” (sin importar la edad que tenga).

Lo cual, a partir de analizado por Kessler (2010), es posible identificar que lo que esta medida conlleva es la impronta o la lógica de lo que se ha denominado como una “*teoría de la disuasión*”³⁸; lo cual como efecto que se

³⁸ “*La teoría de la disuasión* tiene su génesis intelectual en un trabajo del economista Gary Becker del 68, en el que plantea al delito de propiedad como una actividad económica más. En dicha teoría se dice que

busca no ha dado ningún resultado, ni en este contexto bajo análisis pareciera dar cuenta de alguna efectividad teniendo en cuenta las expresiones de las acciones delictivas que se vienen desarrollando.

Como se planteaba anteriormente, a través del Régimen Penal de la Minoridad, vigente a través del Decreto Ley N° 22278, surgido en la última dictadura militar, y que se actualiza mediante el Decreto N°22.803 del '83, concomitante con el inicio del retorno de la democracia, que sustancialmente no modifica nada, la privación de libertad responde a la lógica del Patronato, estableciendo el proceso a seguir, o mejor dicho al cual debían ser sometidos los menores imputados por la comisión de un delito.

Se hace referencia al régimen penal final vigente a nivel nacional, a través del cual se rigen los juzgados y los institutos, con características que resaltan la peligrosidad y discriminación “ha habilitado la reacción estatal punitiva frente a ciertas características personales y familiares del adolescente, consideradas desfavorables, en violación a principios constitucionales” (UNICEF-SENNAF; 2008: 61).

Estas medidas de privación de libertad, no alcanzan a menores de dieciséis años, excepto que hayan cometido *delito de acción pública*, que de modo simplificado respecto de lo que se entiende por ello en términos legales, es todo aquel delito que si yo no lo denuncio soy cómplice.

Anteriormente se planteaba que, esta privación de la libertad tiene que ver con un circuito judicial y de institucionalización, en este sentido frente a un delito, el proceso es: intervención de la policía, lo detienen, lo elevan a un

los que cometen delitos contra la propiedad son actores racionales que eligen realizar esta acción porque hacen una evaluación clásica de costo-beneficio y asumen previamente que el beneficio será mayor que el costo. Becker le da mucho peso a la multa como una forma de resarcimiento social económicamente favorable para una sociedad. Sin embargo, la manera en que se interpreta a Becker, usualmente deja de lado la multa y se centra solamente en dos de los tres aspectos que Becker toma: en el aumento del costo del delito para que sea menos beneficioso, en el aumento de la duración de las penas y la probabilidad de ser aprehendido en el momento de cometer un delito.

Además de ese artículo de Becker, existen también corrientes en la psicología, que empiezan a considerar al delincuente como un actor racional y proponen que las políticas tengan como base el aumento de las penas y la posibilidad de ser aprehendido como forma de disuadir a los eventuales delincuentes en el momento en el que se están proponiendo realizar el delito. El énfasis no está puesto en disuadir a la persona que ya ha cometido el delito sino a aquel que está eligiendo qué tipo de acción realizar, y cuando piensa en la consecuencia de sus acciones se dará cuenta de que ese costo es mayor. Esto es parte del sentido común y si ustedes piensan en los relatos actuales de las políticas de seguridad, está naturalizado, se da como algo obvio. Varios tipos de demanda de seguridad (como por ejemplo el caso Blumberg) van en esta línea: disminuir la edad de imputabilidad, aumentar las penas, etc.”(Kessler;2004:10)

Juzgado de Menores que dicta un procesamiento, o sea que *a prima facie* es responsable y eleva toda su causa al Tribunal Oral de Menores que es el que a los dieciocho años del chico, hace el juicio. O como también ocurre, se extiende hasta que el juez dictamina su finalización; “como *si dijera bueno, ya está*” reforzando así también el carácter discrecional que lo asiste; tanto para la determinación de medidas como también respecto de fijar los plazos por los que se sostienen las mismas.

“Respecto de las medidas que la ley penal de minoridad lleva a adoptar durante los procesos seguidos a menores imputados de cometer delitos, es posible afirmar que todas confluyen en la opción de disponer definitivamente o no del menor, vulnerando el principio constitucional de inocencia. La utilización de eufemismos, tales como “tutelar” o “institucionalización”, ofrece una visión distorsionada de la realidad, que esconde verdaderas privaciones de la libertad de plazo incierto, independientemente de su responsabilidad penal, con la consecuencia cruda que conlleva toda prisionización empezando por el estigma de quien la padece”.³⁹

Este modo en que se aplica la privación de la libertad; y tal como sostienen tanto juristas integrantes de la Corte Suprema, como Beloff, Baratta entre otros que son posibles de nombrar desde la visión crítica que sostienen al respecto; este modelo de justicia penal aplicado expresa una combinación de lo peor de la tradición tutelar y penal al mismo tiempo, ponderando el castigo sobre las garantías y los derechos, desatendiendo, o contraponiéndose a las normativas internacionales que comienzan a surgir a mediados de 1980.

Entonces, hay como un proceso en este tiempo transcurrido, como un tanto pendular, entre el Patronato y la Protección de Derechos, siendo posible identificarlo tanto desde el plano de lo discursivo a la vez que en situaciones cotidianas.

El punto es que, pensar que la privación de la libertad, es lisa y llanamente reemplazado por internar, colocar, detener, dictar permanencia, son todas expresiones que en las medidas judiciales pueden encontrar, están

³⁹ Al respecto ver el texto completo del Fallo de los Doctores Cavallo- Freiler, donde fundamentan la inconstitucionalidad del Art. 1 del Decreto Ley 22,278 y modificatorias, junto con el art. 412 del Código Procesal Penal Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, sala 1ª 6/12/2006

establecidas y que desatienden en gran medida, por ejemplo, las condiciones en que debe darse esa privación de libertad, los motivos y los tiempos.

Vale recordar, que la nueva Doctrina de Protección de Derechos y con ella las normativas internacionales a las cuales nuestro país ha suscripto e incorporado al plexo normativo con rango Constitucional, establecen como criterios básicos que rigen o bien pueden sostener el dictado de la medida de privación de libertad: la excepcionalidad, como aquella medida de coerción que afecta la libertad que se adopta al no existir medio menos gravosos que permitan evitar la fuga; la proporcionalidad, como se señalaba ligado a la relación existente entre pena y delito; y la temporalidad, en tanto es una medida provisional, limitando la duración en el tiempo de la privación de la libertad adoptada.

Las Reglas Mínimas de Beijing⁴⁰, definen privación de libertad: “toda forma de detención o encarcelamiento así como el internamiento en un establecimiento público o privado, del que no se permita salir al menor por su propia voluntad, por orden de cualquier autoridad administrativa, policial u otra autoridad pública” o sea alguien, que voluntariamente no se va.

Al mismo tiempo cabe destacar que en el artículo 12 de las Reglas de Naciones Unidas⁴¹, establece que “la privación de libertad tiene que efectuarse en ciertas circunstancias, velando por el respeto y el cumplimiento, la integridad de los derechos humanos de los menores”.

Volviendo a las Reglas de Beijing “Sólo se aplicará prisión preventiva como último recurso y durante el plazo más breve posible, siempre que sea posible se adaptarán medidas sustitutorias a la prisión preventiva. Los menores que estén en prisión preventiva estarán separados de los adultos”

Las Directrices de Riad⁴², también como las anteriores Normas a las que refería, surgidas durante los años `90, destacan el “Proceso de Socialización”

⁴⁰ Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores ("Reglas de Beijing") Adoptadas por la Asamblea General en su resolución 40/33, de 28 de noviembre de 1985

⁴¹ Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad Adoptadas por la Asamblea General en su resolución 45/113, de 14 de diciembre de 1990

⁴² Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil (Directrices de Riad) Adoptadas y proclamadas por la Asamblea General en su resolución 45/112, de 14 de diciembre de 1990

ante lo cual estaban adelantando, la necesidad de políticas de prevención que “favorezcan la socialización, integración eficaz de todos los niños, y jóvenes, en particular por conducto de la familia, la comunidad, los grupos de jóvenes que se encuentra en condiciones similares, la escuela, la formación profesional, el medio laboral, así como mediante la acción de organizaciones voluntarias”. Pero a la vez, “toda sociedad debe asignar elevada prioridad a las necesidades y bienestar de la familia y de todos sus miembros”, familia entendida como una “central encargada de la integración social primaria, a la cual los gobiernos y la sociedad deben tratar de preservar la integridad de la familia, incluida familia extensa”.

Tales consideraciones que plantean estas (u otras) normas internacionales, dejan entrever aquello que destacaba anteriormente vinculado con los consensos no escritos en los que se sostiene la práctica de la justicia para jóvenes, como también los vaivenes de la oscilación entre las Doctrinas que, Convención Internacional mediante, siguen en pugna.

Este llamado a pensar qué pasa realmente cuando se dicta una medida de privación de libertad, considero que coloca en debate lo que realmente sucede; al tiempo que expresa una deuda del Estado respecto de las modificaciones legales y prácticas para ponerse a tono con respecto a los estándares internacionales.

Y fundamentalmente, insisto, como yendo en paralelo con aquello con lo que el Estado se ha comprometido, y no como ser cómplice sino como Estado parte en la Resolución de las Naciones Unidas, por ello es que destaco e insisto, con este movimiento pendular.

2.2.1 Un acontecimiento (más) que mueve el péndulo:

Si bien en el recorte temporal (2003-2008), tomado y en el que se circunscribe el presente trabajo, no ha sido este acontecimiento el único que ha sucedido; por la magnitud que alcanzara es considerado como aquel que con mayor contundencia (re)abre el debate en torno a las respuestas socialmente esperadas cuando suceden estos casos de secuestros, homicidios, violaciones entre otros, en el que hay jóvenes implicados como autores o coautores.

A principios del año 2004, cuando aún continuaba en la memoria colectiva de las tantas organizaciones sociales, movimientos populares los efectos que acarrearón y condujeron a la crisis del 2001, de la cual se estaban dando los primeros pasos de salida, ante el secuestro y muerte del joven Axel Blumberg, la clase media se ve sacudida ganando nuevamente las calles y demandando *Seguridad*.

Fundamentalmente, insisto, que esta discusión en la búsqueda de soluciones y mayor firmeza y castigo se suceden, como yendo en paralelo con aquello con lo que el Estado se ha comprometido, como Estado parte en la Resolución de las Naciones Unidas, por ello es que destaco e insisto, con este movimiento pendular.

La no respuesta satisfactoria a las demandas de los *ciudadanos independientes, movilizados* pareciera ubicar los intentos de un Estado garantista como Estado cómplice.

Los años 2000, precipitaron la tarea legislativa con el tratamiento y sanción de un conjunto de las leyes, a las cuales desde los medios de prensa y centros de investigaciones se refieren como el paquete de “las leyes Blumberg”, las cuales despliegan una demanda punitiva, cuyo planteo de reforma surge a partir de otros múltiples actores.

Estos planteos han encontrado, agenda rápida en el Estado y fue vehiculizado por el Poder Legislativo, que como destaca Cesaroni (2014), marcan un estado de excepción, por el que se autoriza cualquier medida por estar en tal situación como por ejemplo el estado de sitio, y frente a la gravedad

de la situación se aplicó esta herramienta que permitió incorporar todos los planteos realizados por Blumberg de manera casi automática.

Es a partir de estas situaciones, en las que se mantiene visible un cruce entre dos modelos o presencias de Estado, las cuales podrían ser tomadas como argumentación en pos de la no derogación del paradigma de la Doctrina de la Situación Irregular para el caso específico que se está abordando.

De entre otros muchos organismos de derechos humanos, el CELS⁴³ observó respecto de aquel Plan Estratégico de Justicia y Seguridad formulado por el Gobierno para los años 2004-2007, “muchas de las propuestas impulsadas no son idóneas para solucionar el problema de la seguridad ciudadana y que la implementación de algunas de las medidas puede provocar un agravamiento de la situación de violaciones de derechos humanos” (CELS; 2004:1)

Sabiendo que es un solo Estado, en los cruces observables se evidencia la presencia de Estado Penal y un Estado Social, tal como sostiene Wacquant (2000); y mientras una *mano izquierda* vinculadas con las áreas del Estado que atiende, acerca ayuda, protección; la *mano derecha*, en tanto que es la que restringe el gasto e impone criterios para el achicamiento y control de ese “gasto”.

De ello es posible dar cuenta más cabalmente, a partir de los procesos de achicamiento del Estado, de los procesos de flexibilización laboral, la descentralización de “áreas de intervención” sin los recursos necesarios para ello, lo cual otorga prioridad a los “avances” que experimenta, vivencias los sectores más favorecidos, y menos representativos y numerosos, desatendiendo o mostrando así menos apuro, por abordar las consecuencias que por la precariedad laboral, la pobreza creciente y el aumento de las desigualdades que repercute y alimenta una mayor segregación, criminalidad y desamparo de instituciones públicas, siguiendo las consideraciones aportadas por Wacquant (2000).

⁴³ Ver el documento que presentaron en conjunto con el Centro Nueva Tierra, en donde se pone en debate el sentido de la Seguridad y justicia, mediante un análisis crítico a lo buscado en el referido Plan estratégico. “La seguridad es un tema que implica a la sociedad y al Estado de manera contundente. Y además configura un conjunto de cuestiones y reglas que han de regular una parte importante de la relación entre el poder democrático plasmado en el Estado y su facultad de garantizar la seguridad de los ciudadanos cuya libertad es el fundamento último de ese mismo poder”. Mayo 2004.

Al mismo tiempo, dicho autor, haciendo referencia al modelo que desde los Estados Unidos se extendiera a diferentes países del mundo, del cual Argentina no queda excluida de tal “reproducción del modelo”, llama la atención respecto del *complemento sociológico* que implica dicho modelo de intervención por parte de los Estados:

“el desarrollo excesivo de las instituciones que mitigan las carencias de la protección social (*safety net*) con el despliegue en las regiones inferiores del espacio social de una red policial y penal (*dragnet*) con una trama cada vez más cerrada y sólida. Pues a *la atrofia deliberada del Estado social corresponde la hipertrofia distópica del Estado penal*: la miseria y la extinción de uno tienen como contrapartida directa y necesaria la grandeza y prosperidad insolente del otro”. (Wacquant; 2000:88)

Los modos de intervención del Estado, están dados según condición de clase; y son las que conducen a determinados sujetos a las instituciones, siendo estos “accesos” que no son parte del aparato punitivo del Estado antesala, o puerta de ingreso o entrega de una población para que éste área (punitiva) las capte;

“el empobrecimiento de los sectores medios, el desempleo, las nuevas formas de marginación y exclusión social, el achicamiento del sector público por el avance del sector privado empresarial, una sociedad de consumidores producen un nuevo **texto** social en la Argentina cuyas **letras** van configurando nuevos modos de ser de las personas, nuevas modalidades de relación social, de vínculos básicos de pareja, de amistad, filiales, que incluyen en su funcionamiento estos nuevos discursos sociales” (Barg; 2009 :113).

Por tanto la expansión del Estado penal, que conviven en relación dialéctica y en detrimento del Estado social cuyas manifestaciones en la región se vienen dando como reaseguro de mantener, lograr o sostener la “seguridad”.

Robert Castel (2008) afirma que hay configuraciones históricas diferentes de la inseguridad según las estructuraciones de las sociedades incluyendo contextos y enclaves en los que se desarrollan.

Frente a ello se pueden identificar distintas *amenazas* como por ejemplo el vagabundeo en los tiempos de la sociedad preindustrial, o *peligros* que con la modernidad se han ido reconfigurando, en tanto se modificó la concepción

del individuo y la sociedad, a partir de lo desarrollado ampliamente por Hobbes, Locke entre otros.

De este modo “es concebible que la necesidad de estar protegido pueda ser el imperativo categórico que habría que asumir a cualquier precio para poder vivir en sociedad” (Castel; 2008:19).

Y siendo el Estado absoluto (según las consideraciones, que el autor retoma de Hobbes) la garantía de seguridad de personas y bienes, como exigencia de protección total. Por lo tanto la seguridad es una construcción a partir de la búsqueda de protección que particularmente se centrarán en la propiedad (de sí mismo y de los bienes).

“Es la propiedad la que garantiza la seguridad frente a las contingencias de la existencia, la enfermedad, el accidente la miseria de quien no puede seguir trabajando. Y a partir del momento en que se lo llama a elegir a sus representantes en el plano político, es también la propiedad la que garantiza la autonomía del ciudadano: en efecto, gracias a ella este se ha vuelto libre para opinar y elegir, insobornable para obtener su voto y no intimidable por aquellos que quieren constituirse una clientela. La propiedad en una República moderna cuya configuración esboza Locke es el soporte insoslayable mediante el cual los ciudadanos pueden ser reconocidos como tales en su independencia” (Castel; 2008:23).

La centralidad de la defensa, preservación de “la propiedad” ha sido el modo en que ésta ha sido incluida como derecho inalienable y sagrado en la declaración universal de los derechos del hombre y del ciudadano.

A partir de lo cual es posible identificar la configuración de este Estado que prevalece en sectores conservadores, quienes sostienen su seguridad a partir de la garantía que les brinda la propiedad privada.

Por lo que el “sentimiento de inseguridad”⁴⁴ podría encontrar sus raíces en la demanda de protección que se le exige al Estado (Castel 2008).

⁴⁴ “Sostener que las políticas de seguridad deben involucrarse con otras políticas públicas, como las políticas sociales, no significa entender que estas últimas son exclusivamente las políticas que operan sobre la inclusión material y de bienestar. Por el contrario, la articulación entre las políticas de seguridad y otras políticas públicas incluye, no sólo variables relacionadas con la actividad laboral de las personas y políticas de empleo sino también acciones relacionadas con el espacio público, los vínculos sociales y la salud. Implica a las políticas que intervienen sobre los modos de la convivencia y proporcionan recursos para el mejoramiento de la calidad del lazo social. Como ejemplo, podríamos mencionar a las políticas tendientes a una resolución alternativa y pacífica de aquellos conflictos que habitualmente encuentran soluciones autoritarias, que pueden derivar en violencia entre ciudadanos o requerir la intervención de la violencia estatal. Documento “más derechos, *más seguridad*; *más seguridad*, más derechos. Políticas públicas y seguridad en una sociedad democrática” CELS Y OTROS (2004:9)

En este sentido y respecto de la percepción de inseguridad Kessler (2010) refiere que debe ser analizada en paralelo con lo que sucede con el delito y el impacto que provoca en distintos sentidos más allá del bienestar.

Ante el temor creciente, por los aumentos del delito contra la propiedad privada, la desconfianza en la policía como fuerza especializada o dedicada tradicionalmente a la seguridad de las personas, se observa como lo plantea Kessler (2010) el aumento en la tenencia de armas por parte de los civiles, la proliferación de agencias privadas de seguridad, pero también a partir de los años '90 un aumento en el presupuesto gubernamental de las áreas vinculadas a la seguridad.

“la instalación de las penitenciarías se afirmó al mismo tiempo como una poderosa herramienta de desarrollo económico y fomento del territorio... traen con ellas empleos estables, comercios permanentes... es una industria próspera destinada a un porvenir radiante...” (Wacquant; 2000:99).

Esto lleva como correlato los aumentos de presupuestos destinados a dotar de armas, móviles, cárceles, u otras expresiones tecnológicas, que conllevan el achicamiento de los presupuestos en salud, educación, por ejemplo; resultando (entre otras) claras conquistas del neoliberalismo.

Este proceso se da en países que en los últimos años plantean políticas sociales y de ampliación de derechos, que en paralelo acompañan estas políticas de endurecimiento del Estado penal, marcan también la particularidad del contexto.

“la cuestión penal, latiendo en el seno mismo de la cuestión social –como complejo de dispositivos, prácticas, discursos y normativas- pone de manifiesto los modos en que la aparente igualdad jurídica choca abruptamente con la desigualdad inherente a la producción capitalista” (Capello-Senatore; 2011:116).

CAPITULO III

**“SOY
SOY LO QUE DEJARON”** *(Calle 13)*

3.1 INTRODUCCIÓN:

La intención que se persigue a lo largo del presente apartado es reflexionar en torno a las identidades que se construyen a partir de pensar la acción profesional en el ámbito de la institucionalización de jóvenes en uno de los dispositivos dependiente de la SENNAF, tal como se presentara anteriormente, el Instituto “*Manuel Belgrano*” de la Ciudad de Buenos Aires, durante el periodo 2003-2008 también referido.

Se sostiene la pretensión de dar cuenta de tales identidades señalando diferencias y semejanzas a partir de los contextos de residencia y espacios por los cuales han transitado y transitan en la actualidad estos jóvenes.

Como se hiciera referencia en el inicio de este trabajo, la dificultad experimentada en el relevamiento de la información contemplada en las estrategias metodológicas propuestas, tanto por el tiempo transcurrido, por alejamiento del ámbito laboral, la continuidad de muchos de estos jóvenes en Unidades Penales, la desactualización de contactos telefónicos y postales, la imposibilidad de acceder a los legajos que se encuentran archivados; han obligado la reformulación de la estrategia propuesta para el relevamiento de la información.

De modo tal que en este capítulo de cierre, se asegura dar cuenta de uno de los propósitos perseguidos; dotar de *voz a lo que supo ser*.

Ello se encuentra en el presente apartado en dos momentos diferentes del proceso de elaboración.

Inicialmente es posible identificar “*voces desde un in situ*”, para lo cual se cuenta con información relevada a partir de una serie de seis entrevistas con jóvenes durante el transcurso de su privación de libertad ambulatoria.

Por otra parte la actualización da cuenta con el “*después del encierro*” a través de la información surgida en el encuentro con dos jóvenes con quienes ha resultado posible recuperar aquella(s) historia(s).

Se parte del reconocimiento que al ser sujetos con una historia, con una trayectoria de vida; y que este tiempo necesariamente significa o expresa una o nuevas mutaciones por diferentes identidades en tanto se les ha posibilitado sostener estrategias de convivencia / supervivencia.

Por lo que este tránsito que representa la medida de privación de su libertad ambulatoria conforma una dimensión de su identidad que fue construida en el marco de los dispositivos que el aún vigente Régimen Penal de Justicia para Jóvenes contempla para su sanción.

Tal como se referenciaba anteriormente, en primer lugar se presentan el conjunto de seis respuestas que éstos jóvenes dieran a la pregunta ¿Qué soy?, ¿qué es la familia, el juez, el instituto, la calle y la ranchada?

Cabe tener cuenta que el instrumento diseñado en esa oportunidad da cuenta de un contexto de entrevista, con preguntas abiertas, a las que se les pedía que sean contestadas de puño y letra.

En cada caso se les pedía al menos tres posibles respuestas, las cuales se presentarán aquí en su totalidad y con la estructura gramatical.

De aquellos a los que se les ofreciera ser entrevistados, tres de los jóvenes tenían 17 años de edad, dos de ellos habían cumplido sus 18 años de edad y el mayor de ellos contaba con 20 años cumplidos.

En su mayoría y de modo corriente, se presentan como Jóvenes Privados de su Libertad, aunque no lo consignaran como respuesta a la pregunta; lo que institucionalmente se nominaba como jóvenes en situación de vulnerabilidad socio – penal, que se encontraban bajo disposición judicial en Institutos de Régimen Cerrado (hasta no hace mucho, inicio de los años 2000, Institutos de Tratamiento y Conducta), cuya situación jurídica no ha sido resuelta (con excepción de quien posee 20 años, a quien se le había concedido su excarcelación, tras un proceso de internación de 2 años, 6 meses y 23 días).

Todos ellos, han circulado por diferentes procesos de Institucionalización, en sus distintas modalidades, abiertas o cerradas, y en reiteradas oportunidades; pudiendo identificar que éstas se han sucedido a partir de los 15 años como edad de inicio en promedio.

Dentro de este pequeño grupo es posible encontrar otras, por denominarlo de otra manera, *líneas de continuidad* con la caracterización de la población alojada en el Instituto Belgrano⁴⁵, destacándose:

⁴⁵ Hago referencia a la primer Ponencia que como Equipo Técnico se presentara en las VI Jornadas de investigación y III Jornadas de Extensión “Acerca de la necesidad de la investigación social como herramienta de problematización de la práctica profesional” UNLP, 2006.

Que entre ellos casi todos han terminado sus estudios del nivel primario, iniciando alguna vez el ciclo secundario; lo mismo ocurre en cuanto al consumo de sustancias tóxicas desde la pubertad, en cantidad, variedad y calidad variable.

Solo en dos casos se hace referencia a una pareja estable y a la existencia de un hijo por nacer.

3.2 A SUS VOCES...

ALGUNAS CONCEPTUALIZACIONES:

- 1- *Soy un pibe bueno, comprensivo, un pibe que está casi siempre solo.*
- 2- *Soy un pibe común y corriente,*
un chico tranquilo y a veces problemático cuando me enoja...
- 3- *Soy un romántico, un enamorado del amor...*
- 4- *Soy un pibe que quiere estar con su familia, también un pibe muy bueno y educado...*
- 5- *Soy estudiante, inteligente y chico.*
- 6- *Lo que soy, escritor, futuro sociólogo*

En una primera lectura es posible entender que este conjunto de respuestas se podría adjudicar a lo que comúnmente se puede referir a un *chico común y corriente o como cualquier otro de la misma edad*. Por otro lado, en tres casos refirieron como respuestas:

- 2- *Soy un adolescente con problemas con la ley.*
- 3- *Soy un adolescente que tiene pensado cambiar la manera de vivir.*
- 4- *Soy un pibe que está buscando la libertad.*

“Si nos detenemos en lo que los jóvenes son (en tanto jóvenes), en lo que tienen (como miembros de una comunidad), y en lo que aspiran (en tanto seres humanos con objetivos vitales a alcanzar), podemos decir que sus objetivos, expectativas e ideales dan cuenta de aspectos concretos: trabajan, estudian, reconocen la importancia del dinero para poder acceder a cosas inmediatas, tienen y creen en la familia, los amigos. Si nos concentramos en las percepciones de la acción (en lo que deben hacer) se constata un deseo de cambio laboral hacia mayor estabilidad, una vuelta al colegio y un reconocimiento de

los efectos negativos de las adicciones y de las prácticas violentas” (Allen; I. 2005:169)

Por otra parte suponen todo un conjunto de redes vinculares de sociabilidad a las que podemos caracterizar como adicionales a partir de la no pertenencia a espacios considerados tradicionales, desde donde la experiencia de autonomía e individualización toma un carácter más anómico, tal como destaca Svampa (2000).

Este contexto acompañado de un nivel creciente de necesidades desencadenadas por la sociedad de consumo, queda también denunciado en los discursos, que los jóvenes producen y reproducen, a través de distintas estrategias comunicativas, muchas veces visuales, como una impronta de esta época; a modo de ejemplo la referencia a la ropa y zapatillas de marca, la presencia de “duendes” tatuados con atributos que hacen a una conducta transgresora (fumando porros) y/o actividad delictiva (con armas, bolsa de dinero), o personajes animados como Bart Simpson,⁴⁶ entre otros.

De este modo; la transgresión a la ley no solo está orientada por la lógica de la necesidad, sino por otras demandas o búsquedas vinculadas “a la conquista de un lugar en el grupo y de un sistema referencial que organice, de algún modo el caos de la experiencia” (Duschatzky y Corea; 2002:44).

Teniendo en cuenta las edades y trayectorias de estos jóvenes, saliendo de la conceptualización que la psicología ha desarrollado en torno a la adolescencia como etapa evolutiva de la persona, y siguiendo lo expuesto por Costa y Gagliano (2005) esta “etapa” da cuenta de una niñez/infancia normalizada, recupero la idea que se teje en torno a la adolescencia como “la edad de todos los peligros”; al tiempo que adolescencia y violencia, términos que aparecen estrechamente asociados, “ante la dureza de en las relaciones humanas se rebela con violencia adquiriendo una identidad penal” (Allen; 2005:37)

⁴⁶ El “pequeño” Bart Simpson, un niño de 10 años, encarna el personaje problemático de la familia. Su rol principal es hacer travesuras, meterse en líos e involucrar a los demás; al tiempo que plantea los problemas típicos de la convivencia de dos hermanos con poca diferencia de edad. Bart es el preadolescente rebelde que empieza a sentirse mayor y quiere salirse de la vigilancia de sus padres. En inglés *brat* significa *travieso*, lo cual de allí los autores toman su nombre como un “anagrama”. Todo lo que se le ocurre lo realiza. Es caracterizado por su desobediencia, rebeldía y por sostener su ideología del “yo no fui, nadie me vio y no pueden demostrarlo”.

Ante lo cual es oportuno agregar que la juventud se concibe como la fase de la vida individual entre la pubertad fisiológica y el reconocimiento del status adulto, en tanto condiciones naturales y culturales. La preparación entre la dependencia infantil y la plena y autónoma inserción social atendiendo a los modos en que cada sociedad organiza la transición de la infancia a la vida adulta, tal como expresa Allen (2005).

Al hacer referencia por las *identidades que se construyen*, parto desde la noción que la Identidad explicitada por Martinelli (2013), que además de un recurso heurístico, es una categoría socio histórica surgida a partir de las múltiples determinaciones que se ponen en juego en el seno de las relaciones humano sociales, por lo que intrínsecamente conlleva a la dimensión ético política que moviliza nuestros actos humanos en general y profesionales en lo particular.

Al mismo tiempo vale destacar que *la identidad* supone lo que somos, lo que hacemos y también lo que aspiramos ser. Todo lo cual vuelve a hacer referencia a la noción de proceso que es posible ligar con proyecto.

Entonces, al considerar de este modo a *la identidad*, para el caso de estos jóvenes a los que hago referencia, es dable recuperar lo señalado en el apartado anterior por Volnovich (2005), quien los caracteriza como sujetos portadores de la condensación de múltiples “etiquetamientos sociales” ya que son sucesiva y simultáneamente “*un poco delincuentes, un poco adictos...*” e inaprensibles de diseños diagnósticos instituidos que *rutinizan* la intervención profesional.

Por tanto y desde esta perspectiva recobra significación aquello por lo que se nomina a un sujeto como delincuente o infractor. Tal consideración no es solo semántica. Encierra uno de los conflictos claves dentro de la problemática penal. La categoría sociológica de delincuente, atribuida a una persona, lo estigmatiza como tal, lo nombra, aunque esta asignación no esté probada en un proceso penal (Mollo;2006).

3.3 IDENTIDADES QUE SE CONSTRUYEN:

Resulta conocido el proceso de transformaciones sociales a las cuales venimos asistiendo desde fines del siglo XX, en particular para nuestra realidad Argentina desde los inicios de la década de los '90.

Al mismo tiempo los efectos del proceso de globalización y la implementación de políticas de ajuste neoliberales han echado por tierra los derechos conquistados, con la modificación del modelo de organización de la sociedad, el trabajo y los beneficios que de éste surgían (empleo, protección social) conformaban una *tríada orgánicamente articulada*, tal como lo conceptualiza Martinelli.

En este sentido, podemos inferir que la intervención del Estado a través de la implementación de políticas públicas, no ha dado los resultados esperados, ya que suele recortarse el problema a abordar en una noción de “ayuda al pobre”. Si bien puede visualizarse que la inclusión a un programa los recoloca a modo de socialización secundaria en mundos institucionales, estos aparecen como sumamente frágiles y el sentido de pertenencia esperado se diluye rápidamente.

“El criterio predominante asumiría el tipo de ciudadanía asistida, resumida en la noción que proclama que los pobres deben ser asistidos en su desarrollo. No se conceptualiza la ciudadanía social como habilitante de la ciudadanía civil y política, se trataría en cambio de una ciudadanía subsidiada o tutelada que aporta a la construcción de sujetos sociales aptos supuestamente para moverse con más cantidad de competencias en el universo de su inmediatez” (Cardarelli y Ronsenfeld;2000:46).

Bajo este diseño de programas se mantienen su dependencia y no promueven su autonomía; produciendo un efecto paradójal: desde los fundamentos se resalta la importancia de la inclusión, pero esta inclusión mantiene la relación asimétrica, quedando el joven subsumido en una relación de alteridad en la cual continúa postergado.

La profunda agudización y complejización de la “cuestión social”, producto de la retirada del Estado en su rol activo en la elaboración e implementación de políticas públicas, es el marco que posibilita dimensionar la problemática. La profundización de la inequidad social y económica y la

consolidación del pasaje del Estado Benefactor al Estado Penal⁴⁷ (Wacquant, 1999) impacta necesariamente en el desarrollo de la historia de vida de los jóvenes y en las transformaciones cristalizadas en el contexto familiar y social en el cual crecieron.

Desde una mirada del ejercicio profesional, al interior de las instituciones abocadas al trabajo con jóvenes en situación de vulnerabilidad socio-penal ha predominado la concepción de abordaje y enfoques disciplinarios ligados a la falta, entendiendo ello como carencia, con una visión reduccionista e individual de la problemática. Este escenario se ha dado en el marco del tutelaje social por parte del Estado a través de sus instituciones.

Este Estado, que aún persiste; y que se pretende problematizar y desnaturalizar esta lectura a través del debate acerca de cómo se trasciende este rol del Estado Tutelar, proponiendo una intervención que recupere las condiciones objetivas de existencia y respete las particularidades del sujeto.

Desde esta primacía o centralidad aludida es posible afirmar que asistimos a una sociedad que ha perdido densidad, calidad institucional y que enmudece la palabra en sus circuitos.

Haciendo referencia a lo expuesto antes, en cuanto a la inscripción de la vida cotidiana de estos jóvenes, y su constitución como sujeto; resultan significativos entre otros datos: la falta de inscripción en formas estables de socialización, marcadas por la carencia de su documento en tanto “registro personal”, la desprotección social que se hace extensiva a todo el grupo familiar ante las situaciones de empleo/desempleo que afrontan, la disgregación familiar por fallecimiento, desvinculación o desconocimiento de alguno de los progenitores y hermanos y muchas veces la pérdida de referentes afectivos.

De este modo los jóvenes buscan y participan en redes de sociabilidad diferenciadas; estableciendo su filiación con el mundo. En estas redes reencuentran el correlato de la agudización de las manifestaciones de la cuestión social, ante la cual de alguna manera buscan responder, ser,

⁴⁷ “La mutación política en que se inscribe esta transición (de una gestión social o asistencial de la pobreza, hacia una gestión punitiva por medio de la policía y las prisiones) podría resumirse en la siguiente fórmula: *borramiento del Estado económico, achicamiento del Estado social, fortalecimiento del Estado penal*, pues estas tres transformaciones están íntimamente ligadas entre sí y son, en lo esencial, la resultante de la conversión de las clases dirigentes a la ideología neoliberal”.

pertenecer. Construyen “ranchadas”, nuevos lugares donde fijar la residencia, apropiarse de un territorio, recuperar la identidad, construida socialmente a partir de una nueva inscripción, que les permite *ser* alguien, aunque sea un delincuente, lo que es preferible al *no ser* o *ser nadie*, que les quedaría en la anonimidad de la exclusión.

Los jóvenes inscriben esta pertenencia en sus cuerpos mediante particulares tatuajes, que se convierten en su “documento de identidad”, los diferencia con el otro y les otorga un reconocimiento social; al tiempo que los “delata” frente a la policía.

También son expresiones de identidades los estilos y modos de vestirse (incluyendo ropa y calzado), cortes de pelo, cejas; o a través de sus modos de hablar (códigos verbales y no verbales).

Estos jóvenes, que atraviesan la internación penal, no abandonan sus hábitos de convivencia extramuros, y los recrean intramuros, siendo o mejor dicho resultando difícil de abordar este sub-mundo que recrean a modo de supervivencia, como ellos lo llaman “*la política*”.

Es de este modo que aprendido el modo y los recursos para la subsistencia cotidiana, los jóvenes adoptan estas estrategias como recurso para garantizar la satisfacción de sus necesidades.

Si se tiene en cuenta que la internación, como último recurso y por el menor tiempo posible como expresa en su artículo 37 la Convención Internacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; que es una separación impuesta por la Justicia, de la familia o del grupo de pertenencia, de sus afectos, teniendo en cuenta lo anteriormente señalado surge la figura, imagen de un *Estado penal*, ante lo cual cabría preguntarse:

Si la internación en espacios cerrados ¿se constituye como el último recurso utilizado o el primero?

Y atendiendo a esa temporalidad referida: ¿es el último de una serie de instancias previas, fracasadas otras modalidades o no intentadas?, ¿es el último de una etapa del joven ante la proximidad de los 18 años? o ¿la antesala de otra modalidad, Unidad Penal, que en las condiciones estructurales actuales parecería determinada?

Bien vale recuperar lo que señala Olivera (En Martinelli; 2013:151) “que las identidades no son mero procesos de reposición o reiteración, al contrario

son construcciones sociopolíticas que pulsan con el tiempo y con el movimiento, a partir de determinaciones políticas, sociales, económicas, históricas y culturales”.

3.3.1 Otras identidades que se construyen desde el contexto de encierro

Varias ideas comunes atraviesan a todos los entrevistados, cuando se les preguntara respecto de qué es la familia, el Instituto, el Juez la Calle y la Ranchada; resultando posible identificar ejes de análisis de lo relevado.

Parto de aquel sentir o pensar la determinación de la medida tutelar de privación de la libertad, se puede conjugar tanto sea como una situación ajena o externa, con una cierta *des implicación*; y que se expresa en *“es un lugar en donde te mandan si cometes un delito”*. Pero también hay una carga de auto implicación que se expresa con frases como *“...un lugar donde estas por tus errores”*. *“Un lugar donde te tienen privado de libertad por el delito que cometiste ahí estas hasta después de tu condena o hasta tu libertad”*. *“El lugar donde estoy cumpliendo mi condena”*. *“Un lugar donde te llevan si cometiste un delito”*. *“Un lugar donde pasas el resto de tu condena, además donde no estas constantemente viendo a tu familia”*.

Más allá de cómo se han expresado, ha de encontrarse una relación entre las respuestas dadas tanto con las expectativas que se depositan en estos dispositivos como espacios resocializadores, reformadores; así como con aquellos sentidos comunes dados, contruidos en cuanto a la explicación del fenómeno.

En aquellos primeros contactos sostenía que *“adentro haces lo mismo que afuera si no querés cambiar”*

Y es esta dimensión del cambio, en la se ha centrado fuertemente y de manera individual, casuística, que se refuerza en la voluntad o el poner voluntad sin tener en cuenta que, como refería otro de los entrevistados, es allí *“donde rejunten excluidos y marginados”*.

En tanto que respecto de la figura del Juez, sin discriminar aquellas situaciones que tenían una dependencia judicial unipersonal de un Juzgado

Nacional de Menores (Palacio de Tribunales) o los que ya habían sido pasados a Tribunal Oral de Menores (TOM), la referencia es en cierta medida más unificada en cuanto figura con poder de decisión, destacándose en todos los casos que es: *“El que decide acerca de vos”. “Alguien que se ocupa de las leyes sean cumplidas y si las leyes no son cumplidas puede hasta condenarte por un delito”. “El Sr que me tiene privado de mi libertad”. “Para mi el Juez es una persona profesional que decide si quedas privado de libertad o te vas con tu familia. Yo no lo conozco a mi juez, pero me dijeron eso”. “El Sr. que me tiene a cargo y que decide que va a pasar conmigo”. “Alguien con poder para decidir situaciones de personas que cometen un delito. El ciego de realidad que me tiene acá”.*

Mirando hacia lo que fuera ese tránsito **“José”** también señala algo similar al plantear que quienes se encuentran privados de la libertad se encuentran fuera de la sociedad y que deberían trabajar para reinserirse; *“eso es lo que te dicen”*, aludiendo a los profesionales, jueces y abogados que intervenían. Aunque también queda asociado con un carácter de deuda, algo por restaurar o reparar, *“por lo que tenés que pagar y pensar en vos para poder volver a estar con tu familia”*.

Al mismo tiempo en el caso de **“José”** el inicio en los Institutos de Régimen Cerrado lo encuentra como la respuesta que recibió su familia destacando que:

Tanto **“José”** como los otros entrevistados han coincidido en que *“salís peor”, “un lugar de mierda”, “donde estás hasta cumplir la condena o te dan la libertad”*.

En el caso de **“Mario”** identifica su ingreso en el sistema penal vinculado con el consumo de sustancias *“Caí en el Instituto por la droga, porque hice lo que no tenía que hacer.”*

Aquí es necesario volver a lo que anteriormente se hacía referencia como un circuito de repetición,

“...estaba tanto en los Institutos porque era muy callejero, hay muchas cosas que ya cambie, y aparte ya sabes que cuando sos menor pensas de otra manera, sabes que caes en un Instituto estas un par de meses y bueno pedís un hogar o comunidad y me voy. Era ese mi pensamiento, siempre fue ese mi pensamiento”.(José)

Para **“Mario”** que ingresa por primera vez y reingresa al poco tiempo del primer egreso...

“Estar en libertad, querer abrazar un árbol, era mi mayor anhelo, lo veía en el Rocca; eso es lo que quería hacer y lo que pensaba cuando estaba adentro. Me fui con mi mamá y papá y estuve un tiempo, no llegué al año, y caí de nuevo. Seguí con los guachiturros (bueno no estaban ellos pero habían otros)”.

Te fuiste de licencia y no volviste (se había pedido permiso de salida para el día del padre), te quedaste, duraste mucho tiempo?

“José” *No, no duré nada 2 semanas y me fui al Agote.*

Pensando unos instantes, retoma en su reconstrucción de aquellos años, que no olvida:

“...empecé de vuelta a salir a la calle, empecé a drogarme a robar, eso me llevo a estar de nuevo en los Institutos hasta que fui a parar al Belgrano, después fui al Agote. En total pase por el Rocca 7 veces, una vez en el Belgrano y como 4 veces en el Agote”.

La última salida del Instituto, duraste mucho tiempo?

“José” *Duré un par de meses, salí del Agote.*

“Mario” *salí del Belgrano, y no volví más.*

Qué te ayudó a salir del Instituto en esta última salida?

“José” *Te digo la verdad, en esta última salida yo no fui por nada, no caí por nada. Fui con una orden judicial, me habían cueteado en el cuello y bueno como yo estaba en haciendo tratamiento, a todo esto estaba bajo juez de menores, como me estaba poniendo rebelde no quería hacer nada, me mandaron, vinieron o sea el juez mandó una orden para que me internen de vuelta y fui al Agote. A todo esto fui en febrero y en marzo cumplía los 21, yo ya era mayor, y tenía que tomar la decisión el juez y me dio la libertad; pero no me da la libertad, me mandó con una orden judicial al Hospital Roca para hacer la rehabilitación porque yo no caminaba, estaba en silla o caminaba nada, porque el tiro me toco los tendones. Estuve 1 año en silla de ruedas y yo no quería hacer la rehabilitación ahí (por el Agote), quería hacerla en mi casa, pero bueno la orden la mando el juez y fui al Hospital. Roca. Después empecé a caminar, me recuperé y le puse onda; pero y ahí fue cuando caí preso en Devoto, mi primer causa como mayor.*

“Mario” *Cuando salí la segunda vez, llegue con mi novia, que después fue mi mujer; lo que me ayudó fue el embarazo de mi novia; bueno quedo embarazada y entonces vi las cosas de otra manera, familia, tenía que luchar por algo bueno eso fue lo que me ayudó a salir.*

Me sirvió para el momento que salí mi hijo que nació y no quiero volver, salvo la escuela que rescatas como espacio positivo, si no era salir con mi familia no pensaba en otro espacio como una comunidad terapéutica... en ese tiempo no era pendejo uno se creía grande pero era pendejo, yo ahora cambie mi manera de pensar.

Por otra parte, en todos los casos (tanto a quienes entrevisté en contexto de encierro, como los dos testimonios recientes), la recurrencia a un grupo de contención, acompañamiento haciendo referencia tanto a sus pares (ranchada), como también a la familia, siendo esta última mayormente con jefatura femenina; quedando sin presencia adulta de aquel padre. Aunque en dos entrevistas son referidas las figuras del padre destacándose que en un caso hay un buen recuerdo, presencia como integrante de aquel grupo de convivencia con el que se identifica; mientras que en el otro por *“papá no pienso porque está todo mal”*.

Del relato de **“Mario”** es identificable una ambivalencia en cuanto a la relación con su papá en tanto lo identifica como ayuda en cuanto posibilidad de poder egresar del Instituto, al tiempo que da cuenta de una vivencia que le provoca rechazo, negación y pensarse él mismo diferente en su ser papá:

“Me fui a vivir con mi viejo, porque mi vieja había vendido en ciudadela y vino para acá y a mí me quedaba muy lejos, yo tenía mi familia allá.

Pero a mi viejo hoyen día no lo cuento, jamás lo conté y tampoco me interesa para vivir; como te digo hoy en día pienso de otra manera.

Pienso ser lo que no fue mi viejo conmigo, porque yo descubrí, ya soy grande, en este tiempo que paso porque lo que a mi viejo le importa es la mujer que tiene al lado, porque cuando estaba con mi vieja, los hijos éramos importantes, cuando se separó de mi vieja bueno listo los hijos fuera, eso le pasa a la mayoría de los hombres que están en pareja, mi caso no porque yo aprendí de eso, aprendí de lo que yo no tuve; yo a mi hijo le quiero dar todo lo que no tuve”.

En cuanto a la relación con sus pares, si bien dan cuenta de modo diverso se refuerzan también sentidos que dan cuenta de una proximidad aleatoria, coyuntural o eventual, siendo: *“compañeros de verdad”*. *“Es un grupo de pibes que están conviviendo acá en cana y se trata de que ranchos respondan por los ranchos si hay problemas”*. *“Un grupo de pibes con los cuales convivo. La ranchada es cuando uno está con el otro y el otro está con él”*. *“Un grupo de pibes que vive con vos y se llama así. Amistades que se forman como grupo acá adentro”*.

“José” agrega que *“Charlas con los pibes siempre la única charla que podes tener es dialogar cuando conoces a alguien ahí, te pones de acuerdo con él, le pedís el número de teléfono para llamarlo y hacer algo en la calle cosas buenas ahí adentro no creo que haya, si querés lo aprendes pasa que lo primero que aprendes ahí es lo malo.*

Charlas, como para charlar con alguien sobre la familia, el día de visita, como te fue en la visita y después vamos a fumar esto, aquello que quiero salir a robar acá. Es eso, ahí adentro se maneja siempre así”

“Mario” La primera vez que entre me desperté a las 6 de la mañana para el desayuno y veía que todos bostezaban y hacían una fila, iban a buscar un pan con una mitad de mermelada, y me preguntaban cómo te llamas, de dónde sos que pun que pan bueno conteste y sabes que desde ese día hasta el final que salís que te dicen que podes irte a tu casa con tus padres estas con gente que no conoces, no es lo mismo.

Yo no conocía a nadie, la segunda vez entre canchero yo conocía gente, ya me pedían, o sea es complicado, a veces uno dice hay que tener conducta porque así te dan los puntos para el egreso, pero es difícil tener conducta porque te buscan los problemas, la reacción porque a veces estas tan lejos de tu familia y te dicen algo de tu familia y te levantan con un mal día y bueno.

Si vos no te paras a pelear después tenés que vivir mal todo el tiempo que te queda porque cuando te acostas te vienen a tirar algo, uno no quiere lastimar a nadie, jamás lastime a nadie, no le tiré un tiro a nadie; hice las cosas mal sí; quise vivir bien pero a veces no se puede.

Una vez “afuera” los vínculos pueden mantenerse, pero “la calle” es otra cosa, ya que aparece insistentemente como asociado a la libertad y al desafío de saber andarla, lugar de aprendizaje: *“Es un lugar raro pero también es lo más lindo que hay, porque estas libre de ir y venir sin que nadie te diga nada, pero raro porque a veces es tranquila y otras veces peligrosa”*. *“Es ambigua porque te enseña cosas malas pero también cosas buenas. Según como camines (te va a ir- tachado por él) encontrarás la respuesta”*. *“Es un lugar donde muchos pibes de acá del instituto quieren estar”*. *“Yo quiero ir a la calle pero para hacer las cosas bien”*. *“Estando acá la calle es tu libertad. Pero estando afuera la calle se te hace diferente no es lo que vos pensas”*. De lo verbalizado se agrega que *“depende de lo que vos quieras hacer. El lugar que más se aparece en mis sueños, lo que más anhelo”*.

En el caso de **“Mario”** aparecía el afuera como anhelo, esa idea de abrazar el árbol, que él mismo referenciaba, pero también es importante recuperar

“Ese día cuando salí de tribunales, salí con mi papá y mi mamá y quería comer una pizza, bueno me llevaron, fuimos a comer una pizza, llegue al barrio vivía en ciudadela en ese tiempo, entré estaban mis amigos (porque ya sabían que iba a salir) uhhh como estas estas re grandote. Ese día salimos a joder, no a joder, salimos ... yo quería salir a caminar, quería caminar por el barrio hablamos, hablamos, no paso nada, ese día no hicimos nada solamente hablamos, después volví a mi casa y me acosté a dormir estaba re cansado. Para mí y para lo que todavía están no es lo mismo estar ahí adentro que salir a la calle el tiempo te queda chico. No te alcanza el día para todo lo que tenés que hacer. Estando ahí adentro el tiempo te alcanza para todo, para joder.. te sobra; cuando estas afuera, terminas cansado, porque tantas cosas te quedan para hacer que no te alcanza el día, no te alcanza el tiempo”.

Nuevamente se puede encontrar un aspecto que refuerza el sentido de la responsabilidad individual, respecto a las posibilidades de apropiarse y transitar el espacio que resulta cotidiano; resultando una exigencia de un “mundo ajeno” colocando expectativas que no se corresponden con las condiciones que permitan hacer uso de ellas, apropiarse.

La calle es vista como un recurso, pero también es un entramado de exigencias, dadas por los sentidos de pertenencia contruidos y con los cuales han de estar identificados; a las cuales, o por las cuales, se debe responder. Retomando desde la mirada de “José”:

“Pasa que hay cosas que cuando sos menor mi pensamiento era estoy unos meses pido una comunidad un hogar y me voy. Estuve en la colonia Gutierrez y allá en el Tigre (por una Comunidad Terapéutica “Isla Silvia”) me fui, pero bueno ahora, yo me veo, muchos cosas cambie.

Yo me veo que cambie una banda en el sentido que antes era muy callejero, me levantaba desayunaba y me iba y volvía a la noche o al otro día.

Estoy en casa escucho música, miro la tele. Salgo un rato, voy a la esquina me fumo un cigarro después vuelvo y nada estoy en mi casa. Pero nada que ver como era antes.

Yo creo que tengo 32 años, me recorrí todos los institutos, los penales mucho tiempo de mi vida preso, que viví nada. Porque si sigo así no se si algún día voy a caer preso o... porque ya sabes cómo es esto; te matan, hoy en día esto es así cualquiera te mata. Y bueno, por eso te digo que yo me siento que cambie una banda, a lo que era yo antes”.

3.4 LA REVINCULACIÓN SOCIOFAMILIAR... **Y UNA IDENTIDAD POR CONSTRUIR:**

Los testimonios antes ofrecidos, lecturas de un tiempo y espacio, a partir de la dimensión subjetiva de vivencia de la realidad por la que cada uno de estos 8 jóvenes transitaron, y cuyas marcas han podido ser registradas de manera diferenciada a partir de aquello que señalaba como contextos y ámbitos de referencia en los donde se inscriben como sujetos individuales.

Por ello a partir de ese recupero, de aquella(s) historia personal el abordar el aquí y ahora, en este recuperar su libertad, en tensión con esa dimensión que vincula con aquel proyecto de vida, es que considero oportuno

la reflexión acerca del por qué pensar procesos de revinculación sociofamiliar de estos jóvenes.

Como inicio de este apartado, se incluye una vez más lo que han verbalizado los entrevistados, y que hacen referencia a su presente, desde las condiciones que sostienen y en las que se encuentran en su medio más próximo, alcanzando al mismo tiempo expectativas y posibilidades:

Después de todos estos años, un día cualquiera de tu vida cómo es?

“José” Yo tengo un hijo, un hijo de 11 años y mi hijo vive con la madre, o sea, la verdad cuando estuve en el Agote ya tenía, eh ya iba cumplir 1 año (se corrige), salgo porque le dije al juez ya tenía un hijo, y que me iba a portar bien y me da la libertad. Y bueno estuve un año afuera después los otros 10 la verdad estuve preso.

Mi hijo al día de hoy está re grande, pero yo no lo disfruté nada, no sé, como te lo puedo decir, capaz que se dio cuenta todo este tiempo que no estuve, pero también le llenaron la cabeza... (cambia de tono, alzando la voz y más rápidamente sigue) bueno lo que te quiero decir es que cuando yo me levanto lo único que hago es un par de trámites que tengo que hacer por el tema de la pensión, y después un trámite en Constitución porque te dan una ayuda cuando salís del penal y te dan una tarjeta que tenés que hacer un curso y todos los meses cobras.

“Mario” Yo no estuve mucho tiempo pero Apenas salís te queda grande el mundo después lo importante es lo digo para aquellas personas que quieren salir bien tratar de juntarse con gente que valga la pena, con gente que tenga proyectos, hay de esa gente, ser humilde ante todo, a veces uno tiene el ego de tener todo y no se puede, uno tiene que juntarse con esa gente y las puertas se van abriendo solas, trabajar, trabajar o estudiar, salir adelante de apoco, uno en la cabeza tiene todo, quiere tener el mejor coche, viajar. Eso no es lo importante. Uno quiere ser feliz.

En mi caso yo todo el día pienso en mi hijo, entonces todos los días me esfuerzo para darle todo lo que puedo y cuando no puedo se lo digo no puedo. Y me entiende eso es importante.

Dese que salí lo importante fue, desde que salí ya ni me acuerdo porque se me mezcla todo.

Qué actividad elegiste para hacer?

“José” Estudiar. Terminar la primaria. (Aunque no terminó los estudios primarios en el Instituto Belgrano destaca, avancé mucho porque acá afuera yo no voy (por la escuela). Iba, me gustaba aprendía a leer y un par de cosas).

Y nada, después estoy todo el día en mi casa, salgo un rato, a la noche mucho no salgo.

“Mario” destaca en reiteradas oportunidades, que el no contar con sus estudios secundarios resulta en cierta medida una dificultad, al tiempo que una deuda que tendría intenciones de poder cubrir, tanto sea por la referencia a los estudios terciarios que realiza la mamá de su hijo como por el propio hijo por

quien a diferencia de “José” encuentra una razón para continuar y tomar otros desafíos.

“Mario: *Pero siempre estoy, o sea cuando me necesitan yo estoy ahí para todo, para ayudarla a estudiar Ella está estudiando en un terciario, enfermería; Yo ahora también quiero ponerme a estudiar, no tengo nada”.*

Existe un sentido común, una expectativa que atraviesa el imaginario social, lo cotidiano... y considero que se traduce como aquel horizonte o meta a alcanzar (similar al final del juego), por parte de quienes se encuentran privados de su libertad: “que puedan reinserirse en la sociedad”.

El mismo abarca tanto a los sujetos individuales como también a nivel de las instituciones que están vinculadas con los sujetos privados de su libertad.

“José” *En el Instituto tenés ayuda de psicólogo, el asistente social que te mandan informes y eso sirve mucho, pero también tenés que ponerte a hacer algo por vos. Ahora si no querés hacer nada y bueno. Si no nunca vas a estar listo para volver a la sociedad, como dicen ellos, ahora hay que vivirlo hay que estar ahí adentro. Para uno es fácil ver las cosas así nomás, trabajas ahí adentro pero no te quedas ahí, para saber lo que pasa. Que sabes lo que me pasa a mi cuando yo me quedo adentro. Uno habla, habla, y ...*

“Mario” *Se dice que cuando estas preso, que tenés que trabajar para reinserire en la sociedad, (se acerca un primo y le dice vení escucha, escucha, así aprendes), Yo no estuve mucho tiempo pero Apenas salís te queda grande el mundo; después lo importante es, lo digo para aquellas personas que quieren salir bien, tratar de juntarse con gente que valga la pena, con gente que tenga proyectos, hay de esa gente...*

“José” *Nunca me lo puse a pensar. Pasa que hay cosas que cuando sos menor mi pensamiento era estoy unos meses pido una comunidad un hogar y me voy. Yo te lo dije porque me lo decían allá.*

Cabe tener en cuenta que (tal como se sustentaba en su formulación) el Programa Nacional de Justicia para Jóvenes en Situación de Vulnerabilidad Socio Penal, expresa en su creación que:

“Los procesos que se inician después de la intervención de la justicia que son de competencia directa y/o indirecta de este programa (en función de la radicación de los casos) constan de varias etapas:

- a) El tratamiento de los niños, jóvenes y adolescentes en los diferentes regímenes alternativos y/o de contención con relación al diagnóstico y la infracción cometida,
- b) La adopción paralela de medidas socioeducativas para la introyección de las normas y la obtención de hábitos de convivencia y responsabilidad social, y
- c) La necesaria cogestión con las instancias locales y nacionales para favorecer la reinserción de los niños y adolescentes en

Lejos de una pretensión por reducir la importancia o gravedad de los delitos en los cuales estos jóvenes se han visto implicados, lo que a través de estos desarrollos se pretende retomar es aquella tensión expresada, y no pocas veces sostenida, como “jóvenes en conflicto con la ley penal o ley penal en conflicto con los jóvenes”.

Esto se vincula también con otras consideraciones vertidas respecto de la situación que se abre a partir del tránsito por la privación de la libertad y que ha sido enunciada como *“vuelve quien no era, a un lugar que ya no es”*, valga para ello retrotraerse a las expresiones con las cuales definían los jóvenes dicho tránsito.

Entonces, teniendo en cuenta lo referido anteriormente, si se considera las condiciones y los diseños de los dispositivos institucionales, entonces cabe repensar, cuestionar... la expectativa resocializadora y de reinserción social que sobre quienes han sido privados de libertad, y en particular sobre estos jóvenes.

Tal como se caracterizaba; se observa un nivel creciente de “necesidades” desencadenadas por la sociedad de consumo, donde se van construyendo nuevas identidades; las cuales suponen además una etapa de transición, pasaje y búsquedas, lo cual queda también denunciado en los discursos que los jóvenes producen y reproducen, a través de distintas estrategias comunicativas, muchas veces visuales, como una impronta de esta época.

“Mario” ...yo voy a cumplir 29 años y pienso tanto tiempo que perdí o sea era un pendejo estaba en la edad del pavo, yo los veo a los pendejos que están con el corte casquito, se hacen los chorros y para mí no son nada agradables, yo prefiero ser educado, laburar y no se me cae el orgullo por nada, hoy en día, en aquel momento que tenía 17 años era igual que ellos hoy en día no, tengo otro pensamiento, tenga o no tenga a mí la plata no me hace feliz.

A partir de estas expresiones, o consideraciones, es que pretendo dar cuenta del por qué es necesario pensar en estrategias que tiendan a la revinculación sociofamiliar, partiendo de la comprensión que los vínculos remiten a una relación con otro; y donde “Cada sujeto es cincelado y

construido juntamente con el otro, por el vínculo del que son parte y que a su vez constituyen”, (Barg; 2009:64).

Sobre estos vínculos, como también respecto de los roles y las funciones que ese otro (par, familia, escuela, entre otros) realiza, operan modificaciones que responden a la particularidad de cada contexto y tiempo.

“Mario” yo a mi hijo le quiero dar todo lo que no tuve o sea yo tengo algo que no es importante, pero para una criatura si porque quiere tener lo mejor ir al colegio, ve que los otros tienen cosas y te pide, lo que yo puedo darle se lo doy, mi hijo me dice algo y a mi si no se lo puedo dar me mueve tanto que digo ahhh, me carcomo que no se lo pueda dar, pero casi siempre se lo puedo dar porque yo me guardo para eso, no quiero ser lo que mi papá fue conmigo, ahora con mi papa no tengo dialogo o sea hace un año y medio, pero bueno disfruto a mi hijo, no quiero que sea lo que fui yo, quiero darle lo que no me pudieron dar a mí. Dentro de lo posible tampoco la exageración que tengo que sacar algo que no me corresponde para dárselo, sino le digo no puedo, le digo no puedo y no puedo y él me entiende. 9 años tiene? Si y me entiende todo.

Y con la mamá o sea tu ex pareja? Tenés algún vínculo no? Si nos vemos, nos veíamos hace unas tres semanas que estamos medio peleados, ella tiene su novio, yo lo respeto, todo bien.

Es desde este posicionamiento desde donde se pretende hacer énfasis en la construcción y consolidación de vínculos en los espacios de socialización que son (han sido) la familia y la escuela y que actualmente estas instituciones se encuentran, en el mejor de los casos, desplazadas o reemplazadas por espacios geográficos y simbólicos.

Lo cual puede sostenerse a partir de las consideraciones que aporta Bleichmar, en su análisis de las respecto de las identidades:

“La inestabilidad de la sociedad argentina atravesada por acontecimientos históricos aún no asimilados y cuyo movimiento no garantiza que se encuentre en tránsito hacia lugar previsible alguno, no puede homogéneamente determinar el marco representacional en el cual se inserten las generaciones que atraviesan hoy este tránsito entre la infancia y la juventud. Los procesos de desidentificación de los adultos, obligados radicalmente a reposicionarse cotidianamente para seguir garantizando su inserción en la cadena productiva, sino en el proceso social en su conjunto, constituyen tal vez uno de los obstáculos mayores para la elaboración de propuestas que no dejen a los adolescentes y jóvenes tempranos librados a la anomia” (2006:141).

Si bien en los diseños institucionales pareciera estar contemplada esta “necesidad”, no se ha podido ser registrada, tal como se ha plasmado en la

recopilación testimonial que se logró realzar mediante las dos estrategias antes descritas.

“En efecto, el *corte* de la intervención institucional que suele producirse al egreso parece el reverso del producido al ingreso y por lo general, los adolescentes/jóvenes retoman usos y costumbres anteriores, que no necesariamente incluyen delitos pero que vuelven a colocarlos en situaciones de alta vulnerabilidad.

Es necesario modificar este estado de cosas y considerar el *egreso como una consecuencia del trayecto realizado al interior de la institución, como una consecuencia de nuevas herramientas adquiridas*. En este sentido, debiera haber una preparación previa (pre-egreso) tanto en los aspectos personales (actitudinales, comportamentales, cognitivos, emocionales) como en relación al territorio que habitará y que lo habitará, mediante el entramado de una red social que pueda servir como sostén a su proyecto de vida. Nuestro desafío consiste en cómo conseguir esa red social donde se sostengan los valores de solidaridad, el apoyo mutuo, el cuidado de la vida propia y de los otros, el acceso a los servicios disponibles de salud, educación, recreación, cultura, capacitación y empleo. Como resultado de la formulación del *proyecto de vida* en el período de pre-egreso, debiera quedar plasmado un esquema o mapa que permitiera visualizar los accesos a recursos cercanos en su lugar de residencia, a la vez que evaluar los resultados del trabajo y permitir un seguimiento del adolescente/joven en el momento del egreso”. (PRONAJU-SENAF; 2006:18)

Las vivencias recuperadas, traducen aspectos que dan cuenta las diferencias de los contextos por los cuales hoy habitan y transitan estos jóvenes, dando cuenta de los aspectos compartidos y no compartidos que se sostienen, que se dan en la relación vincular al decir de Barg (2009):

“Mario” *El tiempo que pasé en el instituto no sé si me formó en algo, no sé cómo decirlo, no me formo en nada, sino fue por mi conciencia decir no necesito sacar nada de los demás, o sea, si necesito comer bueno la tierra lo provee, seguí jodiendo no robando, ni nada, si drogándome; mi hijo me ayudó muchísimo porque pensaba en él, cada vez que me drogaba pensaba en él.*

Pero bueno me conseguí un trabajo, y trabaje, trabaje y hoy en día estoy como estoy.

“José” *Si eso depende de uno, si quiere cambiar. Yo creo que tengo 32 años, me recorrí todos los institutos, los penales mucho tiempo de mi vida preso, qué viví nada. Porque si sigo así no se si algún día voy a caer preso o... porque ya sabes cómo es esto; te matan, hoy en día esto es así cualquiera te mata. Y bueno, por eso te digo que yo me siento que cambie una banda, a lo que era yo antes? Vos me podías estar hablando una hora y yo te decía que pedías algo, vos no me mandas esto o aquello, listo no me llames más, le decía al psicólogo, y lo dejaba hablando solo, me levantaba y me iba.*

Por eso te decía, agarraba una hoja y una lapicera y le pedía audiencia a cualquiera.

... Salir con algo, con un oficio yo creo que las cosas mucho no hay que pensarlo. Salís haces las cosas bien buscas un laburo. Creo que el día de hoy estaría haciendo algo bueno, no estaría cueteado, porque esto me paso por salir a robar.

... Estoy en casa escucho música, miro la tele. Salgo un rato, voy a la esquina me fumo un cigarro (vos me entendes lo que te quiero decir) después vuelvo y nada estoy en mi casa.

“Mario” Salí del instituto y al otro día conseguí laburo, mi vieja fue hablar porque no me animaba, tenía el berretin del chorear no me animaba, por ahí eran chaucha y palito pero como para empezar; después me fui dando cuenta que había otras cosas mejores, que pagaban mejor y entonces me fui.

Empecé a laburando en Ciudadela en un mayorista de bazar, trabajé ahí y me pagaban \$100 por semana en ese tiempo, hace 10 años atrás, en ese momento no se si estaba bien o mal el sueldo, muy bien no estaba pero a lo que valía la plata, más o menos; pero lo importante es que empecé a trabajar, en ese tiempo empezaban los primeros celulares y laburé ahí, después me fui porque me compre una moto (me ayudaron mis abuelos) y me fui a laburar con la moto, me fue mejor, me dedique trabajar con la moto en mensajería, me acuerdo que los empleados que estaban en ese día me decían che deja de laburar a vos te va ir mal, mal no sé ojalá me vaya bien, como te digo porque no tengo estudios, pero bueno la remé, la remé me cague de frio, lluvia todo, me compre otra moto, me compre otra moto y la que tuve actualmente me la robaron hace poco y ahora tengo que esperar, no sé si me voy a comprar otra moto o un auto para laburar, siempre trabajando nada de buscar algo que es ajeno.

Pero como te digo laburo siempre hay y comida hay. Siempre hay.

Estos aspectos que diferencian a **Mario** y **José** son los que en parte pueden explicar el presente y cómo transitan el presente frente las implicancias que las trayectorias de haber estado privados de su libertad han marcado o incidido en la construcción por fuera de aquellos dispositivos.

Por otra parte, y tal como se planteaba a partir de lo que verbalizaron y dan cuenta de *aquello que supo ser* ese joven, esa familia, ese grupo de pertenencia; se refuerza lo identificado por Kessler (2010), en cuanto a la significatividad que tiene la “figura de la madre” en cuanto a las aspiraciones de cambio de vida de los jóvenes, que puede trasladarse en ciertos casos a otro referente que venga a ser quien revista el cumplimiento del “rol materno”.

Lo cual conlleva a pensar entonces en un sentido plural de esta “institución”, al tiempo en el desestereotipar los roles y relaciones pensadas desde la lógica dominante, tradicional. Y en coincidencia con lo planteado por Senatore:

“Hablamos de familias en plural no es azaroso, establece que no pretendemos encerrar en una etiqueta predefinida qué entendemos acerca de qué es o qué no es una familia, es decir, qué conjunto de personas y con qué requisitos pueden o no adquirir este status”(2015:273).

A MODO DE REFLEXIONES FINALES

El presente desarrollo compartido hasta aquí, se constituye como requisito para la finalización de estudios de Maestría en Trabajo Social de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata; y que ha sido elegido y construido a partir de la experiencia de inserción profesional ligado a jóvenes en conflicto con la ley intentando dar cuenta ***Acerca de las Implicancias en la Revinculación Sociofamiliar de Jóvenes Privados de su Libertad en el Contexto Actual***".

En este contexto, "lo social" requiere el desafío de comprender los fenómenos sociales, como el que nos ocupa: *Jóvenes en Conflicto con la Ley Penal*. Ante la complejidad que fue adquiriendo esta problemática, el trabajo cotidiano desde el plano de la asistencia debe contemplar el inicio de prácticas asociativas y transversales que exigen trabajar con la comunidad y sus instituciones locales.

Bajo el marco neoliberal en el cual éstos jóvenes han nacido y crecido a partir de las lógicas impuestas por éste; se manifiestan múltiples expresiones de los patrones que lo rigen incidiendo en su cotidianeidad más íntima, y que como todo sujeto lo constituye y en tales contextos lo determina

. Entonces "lo social" requiere el desafío de comprender lo oculto de los fenómenos sociales.

De allí que es necesario el abordar dentro del *actual contexto*⁴⁸, socioeconómico y jurídico, aquello que deriva en medidas de privación de libertad de los adolescentes bajo la modalidad de internación en un *Instituto de Máxima Seguridad*; siendo que la multiplicidad de problemáticas que coexisten entre los jóvenes, resiste cualquier intento de cristalizar la categoría de *asistidos*.

⁴⁸ La referencia al **contexto actual**, pretende circunscribirse en los finales de la década del '90 donde por un lado se han sucedido reformas legales a la luz de la **Doctrina de Protección Integral**. luego del proceso de **Reforma Constitucional** y la inclusión en ella de la Convención Internacional de los Derechos de Niñas/os y Adolescentes.

Dentro de este proceso la sustitución de la Doctrina de Situación Irregular, impulsó progresivamente las modificaciones de las legislaciones Nacionales y Provinciales. De este modo se sucedieron la sanción de la Ley 114 para la Ciudad de Bs. As., la Ley Nacional 26.061 y la Leyes de la Provincia de Buenos Aires N°13298 (de Protección de Derechos) y la N°13634 (de Responsabilidad Penal Juvenil)

Por otra parte el proceso más consolidado de agudización de las *manifestaciones de la cuestión social*, sitúa a los jóvenes, en particular a éstos jóvenes, en un lugar de extrema vulnerabilidad. Lo cual requiere de una visión amplia e integradora que trascienda la *naturalización de los hechos y fenómenos sociales*.

En este aspecto cabe reforzar la mirada sobre diseños que conllevan las respuestas que a éstas se pretenden dar.

Del recupero de los procesos históricos, sociales, políticos y económicos en los que se ha dado la construcción de la niñez-minoridad, es preciso volver sostener tal como sostienen Costa y Gagliano (2000:94) que: “En la actualidad, la minoridad no acepta una sola narración. Reintegrar sus vidas fragmentadas es el primer paso de la responsabilidad pública y social”.

Esta interpelación o desafío supone poder recuperar las identidades que se tejen a partir de los diferentes procesos por los que estos, niños primero y jóvenes de este contexto, transitan; siendo el fruto o la resultante de sucesivas rupturas de los “pactos de filiación” que cierran un amplio recorrido a partir de la salida expulsiva (intencional o no) de los propios hogares, la escuela por los sucesivos *etiquetamientos* a los cuales han sido (y son) expuestos.

Considero que en el proceso de constitución de la **niñez e infancia**; se fueron conformando diferentes formas de abordaje en dicho campo, aunque con una intencionalidad común, dominante, con la que se ha ido respondiendo ligadas a la **cuestión tutelar y punitiva**.

Es precisamente desde este enfoque donde se ha concebido (y en muchos casos se sostiene en la actualidad), al **niño** como **menor** y en tanto menor **objeto de protección**: de este modo se “organiza progresivamente una transferencia de soberanía de la familia “moralmente insuficiente” al cuerpo de notables filántropos, magistrados y médicos especializados en infancia” (Donzelot 1998: 85). Considerando a su vez que; “la norma estatal y la moralización filantrópica sitúan a la familia ante la obligación de tener que retener y vigilar a sus hijos si no quiere ser ella misma objeto de una vigilancia y disciplinarización” (Donzelot 1998:87).

La vivencia, el pasaje o tránsito por esta situación deparará múltiples y diferentes intervenciones, que una vez evaluada la situación como de riesgo, remiten a la sustitución de contextos: del familiar a otro institucional.

Al tiempo que es posible identificar la existencia de un *otro lugar*, que aunque no está reconocida como tal, *la calle*; ese espacio público es quien demarca los lugares en donde *se puede y no estar, permanecer y bajo qué condiciones se lo hace*. Lo cual permite vislumbrar “su deslizamiento a empresas delincuenciales que utilizan mano de obra inimputable”(Costa Gagliano 2000:95).

La pretensión por problematizar y desnaturalizar esta lectura a través del debate acerca de cómo trascender este rol del Estado Tutelar, ha de ir vinculada con propuestas de procesos de intervención que recuperen las condiciones objetivas de existencia y respete las particularidades del sujeto.

Recuperando lo señalado vale recalcar que el actual contexto con un nivel creciente de necesidades creadas por la necesidad de consumo, es desde donde se van construyendo nuevas identidades.

Aprendido el modo y los recursos para la subsistencia cotidiana adoptan como recursos para garantizar la satisfacción de sus necesidades, sostener la propia familia, lo cual en la voz y según el propio decir de estos jóvenes *“darles lo mejor y que no les falte nada”*.

Lejos de una pretensión por reducir la importancia o gravedad de los delitos en los cuales estos jóvenes se han visto implicados, lo que a través de estos desarrollos se pretende retomar es aquella tensión expresada, y no pocas veces sostenida, como “jóvenes en conflicto con la ley penal o ley penal en conflicto con los jóvenes”.

Considero que en dicha situación, se condensan también expresiones de los modos de aquella respuesta pública que han atravesado la historia y este presente.

Esto se vincula también con otras consideraciones vertidas respecto de la situación que se abre a partir del tránsito por la privación de la libertad y que ha sido enunciada como *“vuelve quien no era, a un lugar que ya no es”*, valga para ello retrotraerse a las expresiones con las cuales definían los jóvenes dicho tránsito.

Lo cual es posible de asociar con la necesidad de construcción de *lazos de socialización* según lo expuesto por Merklen, a partir de lo cual es posible interrogarse en la relación que se debe(ría) establecer entre lo social y lo político teniendo en cuenta las condiciones materiales de subsistencia y la vida cotidiana que desarrollan estos jóvenes y sus grupos de pertenencia (familia, pares, ranchada etc).

Entonces, teniendo en cuenta lo referido anteriormente, si se considera las condiciones y los diseños de los dispositivos institucionales, entonces cabe repensar, cuestionar... la expectativa resocializadora y de reinserción social que sobre quienes han sido privados de libertad, y en particular sobre estos jóvenes.

Al tiempo que plantea como desafío el exigir, pensar y repensar, la construcción y diseño de políticas sociales destinadas a la no penalización y/o criminalización de la pobreza; situación al tiempo que refuerza, cual “círculo vicioso” la privación de libertad; supone también desnaturalizar prácticas institucionales que contribuyan a la no estratificación y agudización de sentidos y/o significados presentes en las categorías de los menores y los niños.

“...allá donde las formas de integración secundaria (es decir institucionalizadas) fallan o no están lo suficientemente desarrolladas, lo local aparece como marco natural de tejido de diversas modalidades de solidaridad.” (Merklen; D. 2005: 137). Más aún es necesario considerar estas redes cuando desde el contexto actual; donde por hacer mención a las que considero prioritarias: familia y escuela como dadoras de sentido, se encuentran en proceso de *caída y destitución* (utilizando la imagen y los sentidos con la que Silvia Duschatzky titulara aquella investigación).

Si bien no es posible negar los procesos de reforma jurídica sostenidos en nuestro país desde finales de 1980 y particularmente durante la segunda mitad de los años 90 hasta hoy, a partir de los enmarcado por la normativa internacional, Convención Internacional de los Derechos del Niño, y más específicamente las Reglas de Beijing, las Directrices de Riad, lo que permiten exigir que se tenga en cuenta la situación de estos jóvenes y no se continúe vulnerando sus derechos; queda aún pendiente la creación de aquella legislación que en materia de responsabilidad penal juvenil establezca posibilidades de un abordaje diferenciado a las actuales respuestas que se

instituyen frente a las acciones delictivas que se han cometido y las demandas sociales que reclaman mayor seguridad.

En este sentido, como se ofrece en el anexo y que no fue más desarrollado por no ser éste el objeto del trabajo, la mayoría de los proyectos de reforma jurídica, enuncian al menos, la adecuación de lo que podría ser el diseño de una política sectorial, política infanto-juvenil, a partir de lo establecido en la normativa internacional; sin que ello signifique de manera lineal, automática modificaciones en las prácticas.

Porque las condiciones de pobreza y vulnerabilidad social en (y con) las que estos jóvenes han crecido y sobreviven cotidianamente, se constituyen, antes que en consecuencias del modelo social de producción y acumulación vigente, en razones de mayor peso que la infracción cometida, habilitando para el dictado de la medida tutelar la discrecionalidad del Juez de Menores.

Es también como sostiene Kessler (2010), que la ausencia de información confiable, de un campo de estudio o investigación, que instale un debate público y confronte con los productos generados por los medios de comunicación, contribuyó a la creación, construcción de la *cuestión criminal* fundada en aquellos prejuicios, sensaciones referidas como también que deparan políticas erróneas, por ser erróneo el diagnóstico de base con consecuencias más terribles que reparadoras de aquella situación que ha dado origen; basta con recuperar lo acontecido con el acontecimiento del secuestro y muerte de Axel Blumberg y lo motorizado por el “*ingeniero*” y sectores aliados y políticos de turno.

“Y si bien la violencia, el delito y su relación con los jóvenes deben ser materia de problematización y análisis, la cuestión tratada de aquel modo solo reduce al recate del mapa de sensaciones, reemplazando al mapa de delitos construido, idealmente, sobre bases más confiables o al menos más certeras que las impresiones. El malestar ante el delito se proyecta exponencialmente y se convierte en la demanda urgente e impostergable de modificar el estado al solo efecto de endurecer las consecuencias punitivas hacia aquellos que son identificados como los sujetos peligrosos causantes de inseguridad: los jóvenes, específicamente los varones y pobres, más aun si pertenece al nutrido contingente de los que “no estudian ni trabajan”, candidatos a portar los atributos de peligrosidad que más temor generan en la “ciudadanía”.

Para ellos, más y “mejor” castigo y a edad más temprana. Estas demandas se realizan desde la opinión pública muchas veces en forma irresponsable, ya que carecen de información sobre las prácticas de las instituciones que componen la cadena punitiva (policía-justicia-cárcel) y sobre sus intervenciones en términos de alcance, periodicidad y temporalidad respecto del universo de jóvenes” (Daroqui-Lopez; 2012:62)

Lo cual habida cuenta de la situación de inadecuación de la ley penal vigente, legítima en pleno ejercicio de las facultades de las agencias policía/poder judicial, con el paradigma de protección integral de derechos; pese a los intentos de modificación y derogación del Régimen Penal de Minoridad (Decreto Ley N° 22278) al que se hizo referencia.

A partir de lo cual es preciso considerar al **Estado** no solo desde un lugar de distribuidor de fondos públicos y responsable de la elaboración e implementación de políticas asistenciales, sino que además como animador de las iniciativas locales; garantizando la protección de los derechos sociales, civiles y económicos, expresados en múltiples prácticas y alternativas sociales antes que favoreciendo los procesos de criminalización de la sociedad.

Al tiempo que, esta situación, plantea como desafío el exigir, pensar y repensar, la construcción y diseño de políticas sociales destinadas a la no penalización y/o criminalización de la pobreza; situación al tiempo que refuerza, cual “círculo vicioso” la privación de libertad; supone también desnaturalizar prácticas institucionales que contribuyan a la no estratificación y agudización de sentidos y/o significados presentes en las categorías de los menores y los niños.

Desde la mirada del ejercicio profesional, del Trabajo Social, en lo cotidiano, al interior de las instituciones abocadas al trabajo con *jóvenes en situación de vulnerabilidad socio-penal* ha predominado la concepción de abordaje y enfoques disciplinarios ligados a la falta, entendiendo ello como carencia, con una visión reduccionista e individual de la problemática.

Como se señalara, este escenario se ha dado en el marco del tutelaje social por parte del Estado a través de sus instituciones; Estado que aún persiste, y que exige intervenciones que reafirmen (como trabajadores sociales) aquel compromiso con la ciudadanía exige la defensa de los derechos sociales tanto en su expresión legal como en su realidad efectiva.

Es a medida que se realizan estos, que se altera el modo como se estructuran las relaciones sociales, contribuyendo a la realización de una nueva forma de sociabilidad donde el otro es reconocido como sujeto de valores, intereses y demandas legítimas, posibles de ser negociadas y acordadas.

Todo lo cual ha de considerarse como posibilidad, si se parte de recuperar como “valor agregado” la proximidad (en el mejor sentido de acceso a la “intimidad”) a la vida cotidiana de los sujetos que los trabajadores sociales detentan, a diferencia de otras profesiones con las cuales se han estructurado los “equipos interdisciplinarios”. Esta particularidad que se resalta para la profesión, no resulta un “recurso” del cual se hace uso para poder trascender lo establecido y rescatando aquel margen de maniobra que es capaz de detentar a partir del grado de autonomía que se alcance construir.

Al tiempo que tener en cuenta que dentro de este contexto del capitalismo tardío asistimos a una sociedad que ha perdido densidad, calidad institucional y que enmudece la palabra en sus circuitos.

Por consiguiente la localización del problema refuerza la producción de sujetos anclados en un lugar cristalizados, naturalizados sin posibilidad de ser cuestionado y por ende resulta la construcción de sujetos pasivos, para lo cual el binomio que puede ejemplificar este proceso o las consecuencias de éste puede ser: el formulado como el niño – el menor o más genéricamente la infancia – la minoridad.

Este modo antagónico y muchas veces presente de modo ambivalente, o bien intercambiable en prácticas y discursos con el que se hace referencia al Niño (instituido declamativamente como sujeto de derecho) conlleva una organización desigual de dicho universo.

Estos binomios, sin lugar a duda, pueden derivar en otros que estratifican o encasillan la situación por resolver, como por ejemplo la minoridad – la pobreza; lo que se convalida con cierto discurso jurídico que la judicializa, haciendo a un lado no solamente el reconocimiento constitucional de la Convención de los Derechos de los Niños, sino su más reciente cambio de paradigma que derogó la doctrina de situación irregular por la doctrina de la protección integral.

A la luz de lo cual se hace necesario pensar que la intervención profesional del Trabajo Social dentro de estos escenarios socio ocupacionales, requieren la

recuperación de la historia, la trayectoria que permitan construir diagnósticos que interpelen, generen otras tantas posibilidades de intervención en cuanto supongan la transformación de estas situaciones.

Lo que se desprende de ello; es la necesidad de reconstruir los vínculos que fortalezcan las posibilidades y potencialidades , teniendo en cuenta que estamos incluidos dentro de un sistema capitalista de producción y reproducción social, en el cual aquello que pueda perseguir la **emancipación** puede ser reproductora de situaciones de **dominación**.

“En caso contrario, las alternativas de acción se encontrarán direccionadas sólo hacia los recursos existentes instituidos como solución (respuesta). La falta de posibilidades para la determinación de las medidas, la permanencia de instituciones cerradas, y el peso del reclamo social por más seguridad producen un cuello de botella que por ahora, termina resolviéndose con más privación de libertad.” (Garello; 2010:181)

Porque el Trabajo Social en tanto práctica social comparte las características de la práctica distributiva y cultural, donde la relación que se da con los sujetos que buscan satisfacer una necesidad supone el reconocimiento de éstos como sujetos de derechos.

Solo a modo de expresar un cierre provisorio, en tanto el tema como se ha planteado continua abierto tanto en cuanto a su discusión como en cuanto a las estrategias de intervención, señalaría que además de las motivaciones expresadas para la realización de este trabajo, se une también el poder *hacer decir* respecto de la inclusión de la voz de los sujetos vinculados y *poder decir* como discusión argumentada que requiere el concebir al trabajo social como práctica profesional, con la mirada de lo que fue (sujetos, proyectos, espacios institucionales...) y de lo que es (incluyendo a quien volvió).

Por lo anteriormente desarrollado, lo que ha surgido como poesía, resulta hoy una nueva motivación para el impulso de las transformaciones sociales que hagan posible el abordaje de esta situación hasta aquí abordada.

**“ del encierro una flor...
de las rejas una esperanza...”**

Camilo Blajaquis,
La venganza del cordero atado

BIBLIOGRAFIA RELEVADA:

-Altamirano, Florencia (2002). Niñez, pobreza y adopción. ¿Una entrega social? Espacio Editorial. Buenos Aires.

-Allen, Ivon (2005). Ser Joven. En **Krmpotic**, Claudia (coord.) Trabajo Duro. Trabajo sucio. Espacio Editorial. Buenos Aires.

-Argumedo, Manuel (2002) Lo que se aprende en la escuela: representaciones básicas en la constitución del ciudadano. Informe Final del Proyecto. La Plata, UNLP-FTS. Disponible en: <https://argumedomanuel.wordpress.com/>

-Auge, Marc (2007) Por una antropología de la movilidad Editorial Gedisa. Barcelona. España

-Barg, Liliana (2002) La intervención con Familia. *Una perspectiva desde el Trabajo Social*. Espacio Editorial. Buenos Aires.

(2009) Las tramas familiares en el campo de lo Social. Espacio Editorial. Buenos Aires.

-Beloff, Mary (2004) Los Jóvenes y el Delito: La responsabilidad es la clave. En García Méndez E. (coord.) Infancia y Democracia en la Argentina. La cuestión de la responsabilidad penal de los adolescentes. Fundación Sur Argentina. Ediciones del Puerto Ediciones del Signo. Buenos Aires.

-Bianchi, L. **Gasparini** D. (2012) Ningún pibe nace chorro, una mirada desde la juventud sobre el doble discurso oficial Editorial Nuestra América ISEPC1. Bs. As.

-Bleichmar, Silvia (2006:141). El estallido de la Identidad. No me hubiera gustado morir en los 90. Taurus. Buenos Aires.

-Bustelo, Eduardo (1998) La Política Social Esquiva: Ajuste y Equidad en América Latina en los '90. De otra manera. Ensayos sobre política social y equidad. HomoSapiens Bs. As.

-Bruno, Luz (2007) La metamorfosis de la cuestión social y la niñez. Desafíos en la intervención judicial frente a la caída de los paradigmas. EN **Simonotto** Eve (coord.). Los Laberintos del Trabajo Social. Nuevos paradigmas en la formación, la práctica y la investigación. Espacio Editorial. Bs. As

-Calveiro, Pilar (2012) Violencia de estado, la guerra antiterrorista y la guerra contra el crimen como medios del control global. Ed. Siglo XXI Bs. As

-Capelo, Marina – **Senatore**, Anilde (2011). Cuestión Social / Cuestión Penal. Tensiones y debates de la intervención profesional ante la criminalización de la

pobreza. EN Mallardi –Madrid y Oliva (comp) Cuestión Social, Reproducción de la Fuerza del Trabajo y Políticas de Asistencia. UNICEN. Bs. As

-Cardarelli y Rosenfeld (2000) "Con las mejores intenciones" en **Duschatzky** Tutelados y asistidos. Programas sociales, políticas públicas y subjetividad. Paidós. Bs. As.

Carli, Sandra (1994), Historia de la infancia. Una mirada a la relación entre cultura, educación, sociedad y política en la Argentina", en Revista I.I.C.E. (Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación) año II, nº 4, Miño y Dávila Editores, Bs As.

-Castel, Robert (1997) La metamorfosis de la cuestión social: Un crónica del salariado, Paidós, Buenos Aires.

(2008) La inseguridad social. ¿Qué es estar protegido?. Manantial Bs. As.

-Cesaroni, Claudia (2014) Ningún Pibe Nace Chorro. Argumentos contra la baja de edad de punibilidad. Documento de trabajo del CEPOC /3. Bs. As

-Corea, Cristina – Lewkowicz, Ignacio (1999), ¿Se acabó la infancia? Ensayo sobre la destitución de la niñez, Lumen/Humanitas, Bs. As.

-Costa, Mara y Gagliano, Rafael. "Las infancias de la minoridad", en Duschatzky, Silvia (Comp.). Tutelados y asistidos. Programas sociales, políticas públicas y subjetividad. Bs. As. Ed. Paidós. 2000

-Daroqui, Alcira, **Lopez**, Ana (2012). Sujetos Castigados, hacia una sociología de la penalidad juvenil Ed Homo Sapien Bs. As

-Donzelot, Jacques (1998). La policía de las familias. Valencia, Editorial Pre-textos.

-Duschatzky, Silvia y Corea, Cristina.(2002) Chicos en banda. Los caminos de la subjetividad en el declive de las instituciones. Bs. As. Ed. Paidós.

-Foucault, Michael.(2002) Vigilar y Castigar. Ed. Siglo XXI. Buenos Aires

-Fuentes, María Pilar. (2006) La determinación del "Estado de Abandono" de niños y Adolescentes. *Un estudio de caso en torno a los fundamentos de la intervención profesional del trabajo social*. Tesis de Maestría UNLP.

-Gallo, Gustavo (2004) Los niños en nuestra historia. Del Patronato a la Convención Internacional de los Derechos del Niño y la Ley 114. En **Otero** María (coord.) INFANCIA vulneración de derechos e intervenciones en la urgencia. Espacio Editorial. Bs. As.

-García Méndez, Emilio (1999) Adolescentes en conflicto con la ley penal: seguridad ciudadana y derechos fundamentales. En La Doctrina de la Protección Integral en América Latina. Cuadernos del Caleuche. La Plata.

“Para una historia del control socio penal de la infancia: la informalidad de los mecanismos formales de control social” En: Derecho de la infancia/adolescencia en América Latina: de la situación irregular a la protección integral

[http://www.iin.oea.org/Cursos_a_distancia/Cursoprojur2004/Bibliografia Sist. Justicia Juvenil Mod 2/Para%20una%20historia%20del%20control.htm](http://www.iin.oea.org/Cursos_a_distancia/Cursoprojur2004/BibliografiaSist. Justicia Juvenil Mod 2/Para%20una%20historia%20del%20control.htm)

La Legislación De Menores en América Latina: Una Doctrina en Situación Irregular En Derecho De La Infancia/Adolescencia En América Latina: De la Situación Irregular a la Protección Integral.

-Garello, Silvana (2007) Jóvenes en conflicto con la ley penal. Una mirada desde el espacio familiar como propuesta de intervención profesional. EN **Simonotto** Eve (coord.). Los Laberintos del Trabajo Social. Nuevos paradigmas en la formación, la práctica y la investigación. Espacio Editorial. Bs. As

(2010) Los Procesos de Institucionalización y el Paradigma de la Protección de Derechos de la Infancia. Estudio cuali-cuantitativo del encierro en la población infante juvenil infractora a la ley. Ciudad de Buenos Aires, 2003-2006. Tesis de Maestría U. N. de Lanús

-Guemureman, Silvia y Daroqui, Alcira (2001). *La niñez ajusticiada*. Editores del Puerto. Buenos Aires.

-Giddens, Anthony (1999). Métodos de Investigación Sociológica. En Sociología, Alianza Editora. México D.F.

-Guber, Rosana (2004) La entrevista antropológica: introducción a la no directividad. En El salvaje Metropolitano. Reconstrucción del conocimiento social en el trabajo de campo. Paidós. Buenos Aires

-Hourquebie Elena (2012) Comunicación situada: Textos, texturas y contextos como signos representativos de una identidad diferencial entre jóvenes institucionalizados en conflicto con la ley penal. Tesis Doctoral UBA Facultad de Filosofía y Letras

-Iamamoto Marilda (2003) El Servicio Social en la contemporaneidad. En El Servicio Social en la Contemporaneidad. Trabajo y formación profesional. Cortez Editora. San Pablo Brasil.

-Kessler, Gabriel (2004); Trayectorias escolares de jóvenes que cometieron delitos contra la propiedad con uso de violencia. I Conferencia pronunciada el 19 de Junio de 2004 en el ámbito del SEMINARIO PERMANENTE DE INVESTIGACIÓN de la Maestría en Educación de la UdeSA. Coordinadora: Dra. Catalina Wainerman DOCUMENTO DE TRABAJO N° 13. www.udesa.edu.ar/files/EscEdu/DT/DT13-

(2010) Sociología del delito amateur. Paidós. Buenos Aires.

-**Kymlicka**, Norman (2002) "El retorno del ciudadano", en Revista Ágora N° 7, Buenos Aires.

-**Kosik**, Karel (1990) Dialéctica de lo concreto. Grijalbo. México

-**Lewkowicz**, Ignacio (1999) Se acabó la Infancia. Editorial Lumen. Buenos Aires.

-**Mamaní Gareca**, Víctor Hugo.(2005) La cárcel. Instrumento de un sistema falaz. Un intento humanizante. Editorial Lumen. Buenos Aires.

-**Martinelli**, María L. (2013). ***A pergunta pela identidades profissional do Serviço Social: uma matriz de análise***. Serv. Soc. & Saúde, Campinas, SP v. 12, N° 2, Jul/Dic. ISSN 1676 /6806

(2008) Reflexiones sobre el Trabajo Social y el proyecto ético político profesional. En Revista Escenarios N°13 Prácticas profesionales y Practicas Sociales Contemporáneas. Editorial Espacio - UNLP

(1992) Servicio Social: Identidad y Alienación. Cortez Editora. San Pablo Brasil.

-**Miguez**, Daniel (2004) Los pibes Chorros, estigma y marginación Capital Intelectual. Buenos Aires.

-**Merklen** Denis (2005) Pobres Ciudadanos. Las clases populares en la era democrática (Argentina, 1983-2003). Editorial Gorla. Buenos Aires.

-**Mollo**, Martín (2006) "El paradigma, el cambio y los sistemas: una mirada sobre el proceso de cambio de la legislación penal juvenil". "PLURALIDADES. Quintas Jornadas Nacionales de Investigación Social de Infancia y Adolescencia, la Convención de Derechos del Niño y las Prácticas Sociales".

"La ejecución de las medidas de privación de libertad en adolescentes infractores a la ley penal: una mirada acerca de la cotidianeidad interna de una institución de seguridad" "PLURALIDADES. Quintas Jornadas Nacionales de Investigación Social de Infancia y Adolescencia, la Convención de Derechos del Niño y las Prácticas Sociales".

-**Netto** José P. (1992) Las condiciones histórico-sociales del surgimiento del Servicio Social. Capitalismo Monopolista y Servicio Social. Cortez Editora. San Pablo. Brasil.

(2000) en Reflexiones en torno a la "cuestión social" En AA.VV Nuevos escenarios y práctica profesional. Una mirada crítica desde el Trabajo Social. Espacio Editorial. Buenos Aires.

-Parra, Gustavo (2001) Antimodernidad y Trabajo Social. Espacio Editorial. Buenos Aires.

-Pereira Lima Rita (1996) “Reflexões sobre as práticas diagnósticas dos profissionais das equipes interdisciplinares da FEBEM do Estado de São Paulo”, en O discurso do profissional do social: contradições e construções. Publicación del NCA - PUCSP- Junho 1996.

-Puebla Daniela y otros (2008) La Construcción del Trabajo Social en el Ámbito de la Ejecución Penal. Una mirada desde la doctrina constitucional. Espacio Editorial. Buenos Aires.

-Rosanvallon Pierre (1995) La nueva cuestión Social. Manantial. Buenos Aires.

-Senatore Anatilde (2015) La familia como sujeto de intervención. Proceso de judicialización del al vida cotidiana. En **Mallardi**; M. (comp). Procesos de Intervención en Trabajo Social: Contribuciones al ejercicio profesional crítico. ICEP – Colegio de Trabajadores Sociales de la Provincia de Buenos Aires

-Svampa, Maristela (comp.),2000. Desde abajo, la transformación de las identidades sociales. Biblos. Buenos Aires.

-Tonon, Graciela (comp.); (2005) La Entrevista. Las Técnicas de Actuación Profesional del Trabajo Social. Espacio Editorial. Bs. As.

-UNICEF- Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. (2006) Privados de Libertad. Situación de niños/as y Adolescentes en Argentina. Buenos Aires.

-UNICEF-SENNAF-UNTREF (2008) Adolescentes en el sistema penal Situación actual y propuestas para un proceso de transformación. Buenos Aires.

-Volnovich, Juan (1995) Niños desheredados los inclasificables En Revista Defensa de los Derechos Humanos. Revista del Centro Cultural de España en Buenos Aires.

-Wacquant, Loïc (1999) Las Cárceles de la Miseria. Manantial. Buenos Aires.

-Zapiola, María http://www.catedras.fsoc.uba.ar/elias/Zapiola_UNICEN%202011.pdf:

(2010) “La Ley de Patronato de Menores de 1919: ¿una bisagra histórica?”, en Lionetti, Lucía y Míguez, Daniel (comp.), Las infancias en la historia argentina. Intersecciones entre prácticas, discursos e instituciones (1890-1960), Prohistoria. Buenos Aires.

OTRAS FUENTES:

-Alarcón, Cristian (2010) Cuando me muera quiero que me entierren con cumbia. Vidas de pibes chorros. Verticales de Bolsillo. Buenos Aires.

-Arredondo, Stella M. y otros (2006) "Acerca de la necesidad de la investigación social como herramienta de problematización de la práctica profesional" *VI Jornadas de investigación y III Jornadas de Extensión UNLP*.

(2004) "Reflexiones acerca de la intervención con jóvenes privados de libertad. Límites y posibilidades para la restitución de derechos". Documento de trabajo Servicio Social IMB.

-AA.VV. (2013). "Procesos de Identidad e identificación" Ficha de Cátedra Asignatura Trabajo Social IV U.N.L.P.

-Blajaquis, Camilo (2010) La venganza del cordero atado. Ediciones Continente. Buenos Aires.

-CELS. "Plataforma Sudamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo". Informe Buenos Aires, Septiembre 1999

-CELS - Centro Nueva Tierra (2004) ¿Qué seguridad? ¿Qué justicia? Un Análisis Crítico de los Lineamientos Generales del Plan Estratégico de Justicia y Seguridad Presentado por el Gobierno.

-Colombo, Mariano (2007) Jóvenes en Conflicto con la Ley Penal ¿Qué identidades que se construyen? Trabajo monográfico. Maestría en Trabajo Social UNLP. Asignatura: Debate Contemporáneo en Servicio Social: Ruptura y Continuidades. Docente: Dra. María Lúcia Martinelli

(2007) Acerca de Ser Niño o Menor. Los vínculos que se tejen a partir desde la Modernidad. Trabajo monográfico. Maestría en Trabajo Social UNLP. Asignatura: La modernidad y la crítica post-moderna. Docente: Dr. José Paulo Netto

(2008) Intervenciones en la infancia. Ensayo. Maestría en Trabajo Social UNLP. Seminario de Tesis. Docente: Gloria E. Mendicoa

(2008) Acerca de las políticas públicas para la restitución de los Derechos de Niña/os y Adolescentes. "Estoy de Vuelta... Implicancias en la Revinculación Sociofamiliar de Jóvenes Privados de su Libertad en el Contexto Actual". Proyecto de Tesis. Maestría en Trabajo Social UNLP. Seminario de Tesis. Docente: Gloria E. Mendicoa

(2009) Jóvenes Privados de Libertad en el Contexto Actual. El reflejo de la descuidadización y exclusión social. Trabajo monográfico. Maestría en Trabajo Social UNLP. Seminario: Ciudadanía y Exclusión Docente: Germán J. Pérez

-**Dolina**, A La aventura del conocimiento y el aprendizaje.

-**Nogueira**, G. Entrevista al Dr. Ciafarnini Mariano en Revista Prólogos Volumen III, año 2010 pp- 246-247.

-**Secretaria de Comunicación Pública**- Presidencia de la Nación. Argentina en Noticias (AEN) "Residencia, una ley cruel" 23-11-2012

MARCO NORMATIVO

-Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. UNICEF Argentina. Ley 23.849/1990.

-Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (Directrices de Riad) Adoptadas y Proclamadas por la Asamblea General en su Resolución 45/112, de 14 de diciembre de 1990.

-Ley 114/98 Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

-Ley Nacional 26.061/2005 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

-Ley 13298/2005 de la Promoción y Protección Integral de los Derechos de los Niños de la Provincia de Buenos Aires.

-Ley 13634 /2007 de Justicia Penal Juvenil en la Provincia de Buenos Aires.

-Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad, Adoptadas por la Asamblea General en su Resolución 45/113, de 14 de diciembre de 1990

-Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores ("Reglas de Beijing") Adoptadas por la Asamblea General en su Resolución 40/33, de 28 de noviembre de 1985

-Régimen Penal de Minoridad Decreto Ley 22.278, aplicable a los menores incurso en delitos, y modificatorias Ley 22.803/83.

ANEXO 1
CUADRO PROYECTOS DE LEY RESPONSABILIDAD PENAL JUVENIL.
Elaboración PRONAJU – SENAF.

PROYECTO	FRANJA ETARIA	SANCIONES ALTERNATIVAS	MEDIDAS DURANTE EL PROCESO	PRIVACION DE LIBERTAD
Urtubey	16 - 18	Amonestación Reparación del daño Imposición de reglas de conducta Servicios a la comunidad Libertad asistida Libertad vigilada	Prisión preventiva para delitos con máximo de penas privativa de libertad de 3 o más años.	Plazo mínimo 6 meses y máximo 10 años Tiempo libre
Pérez	14 - 18		Internación ídem Ley 22.278	ídem Ley 22.278
	16 - 18	Órdenes de orientación Libertad asistida Medidas educativas	Prisión preventiva duración máxima 6 meses Privación de libertad domiciliaria	Prisión domiciliaria Prisión en tiempo libre.
Spatola	14 -18	Servicios a la comunidad Reparación del daño Órdenes de orientación y supervisión Libertad asistida	Excepcionalmente por peligro de fuga y/o entorpecimiento de investigaciones	Durante fin de semana o tiempo libre Domiciliaria Centro especializado (homicidios dolosos, delitos sexuales, robo con arma, robo con violencia a personas y secuestros extorsivos) Entre 14 y 15 años pena máxima 3 años Entre 16 y 17 pena máxima de 5 años
Perceval	14 - 18	Servicios a la comunidad Reparación de daños Órdenes de orientación y supervisión Libertad asistida	Órdenes de orientación y supervisión Privación de libertad domiciliaria Privación de libertad en centro especializado (no puede exceder 2 meses)	Fin de semana y tiempo libre Domiciliaria Centros especializados de 14 a 15 máximo 3 años de 16 a 17 máximo 5 años
García Méndez	14 - 18	Servicios a la comunidad Reparación del daño Órdenes de orientación y supervisión Libertad asistida	Privación de libertad frente a peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación Máximo 2 meses	Fin de semana o tiempo libre Domiciliaria Centros especilizados (homicidios dolosos, delitos sexuales, robo con arma, robo con violencia en personas y secuestros extorsivos) Entre 14 y 15 máximo 3 años Entre 16 y 17 máximo 5 años
Vanossi	14 - 18	Servicios a la comunidad Reparación del daño Órdenes de orientación y supervisión Libertad controlada	Detención provisional en centro especializado	Domiciliaria Centros especializados (entre 14 y 15 años máximo 5 años – entre 16 y 17 años máximo 9 años)

PRO	14 - 18	Amonestación y advertencia Servicios a la comunidad Sanciones económicas Reparación de daños Órdenes de orientación y supervisión	Prisión preventiva para hacer cesar los efectos del delito o para asegurar actos procesales Órdenes de orientación y supervisión	Internación domiciliaria Internación durante tiempo libre Internación en establecimiento especializado Prohibición absoluta a la prisión perpetua
Ibarra	14 – 15 (delitos con pena mínima 3 años) 16-18 (delitos con pena mínima de 2 años)	Advertencia con apercibimiento Disculpas personales ante la víctima Reparación del daño Servicios a la comunidad Tratamiento médico o psicológica inhabilitación	Privación de libertad provisional máximo 60 días	Fin de semana (máximo 1 año) Domiciliaria (máximo 2 años) Centro especializado (14 – 15 años máximo 3 años) 16 17 años máximo 5 años Separa privados de libertad con condena y con proceso
Escudero	14 -15 (delitos con pena mínima 3 años) 16-18 (delitos con pena mínima de 2 años)	Advertencia con apercibimiento Disculpas personales ante la víctima Reparación del daño Servicios a la comunidad Prohibición Inhabilitación	Órdenes de orientación Privación de libertad provisional domiciliaria Privación de libertad en centro especializado (máximo 60 días prorrogables)	Fin de semana o tiempo libre (máximo 1 ½ año) Domiciliaria (máximo 1 ½ año) Centro especializado (14-15 años máximo 3 años) 16-17 máximo 5 años)
Leguizamón	14-15 16-17	Amonestación Libertad asistida Servicios a la comunidad Reparación de daños Órdenes de orientación y supervisión	Medidas de coerción como la privación de libertad	Domiciliaria (máximo 1 año) Durnate tiempo libre (máximo 1 año) Centros especializados (14 -15 máximo 3 años y 16 -17 años máximo 5 años)

FRANJA ETARIA:

De 11 proyectos analizados, 9 bajan la edad de imputabilidad a los 14 años, regresando de esta forma a la franja etaria que comprendían las leyes 21.338 y 22.278, ambas sancionadas en los años 1976 y 1980 respectivamente.

SANCIONES ALTERNATIVAS:

En este punto se describen las sanciones alternativas a la privación de la libertad, siendo en su mayoría coincidentes en plantear la reparación del daño, los servicios a la comunidad y las órdenes de orientación y supervisión.

En cuanto a las órdenes de orientación y supervisión, es importante aclarar que las mismas consisten en instrucciones judiciales tales como mantener al joven con su grupo familiar, al cuidado de otra persona, la matriculación del joven en centros educativos formales tendientes a obtener capacitación a fin de adoptar oficios, indicarle la asistencia a cursos, conferencias o sesiones informativas sobre temas que le permitan evitar futuros conflictos, disponer en caso de enfermedad de tratamientos médicos o psicológicos, resolver que el joven se abstenga de concurrir a determinados lugares, de realizar alguna actividad o de relacionar con determinadas personas, disponer la prohibición de consumo de bebidas alcohólicas y drogas.

MEDIDAS DURANTE EL PROCESO:

Hay coincidencia en los proyectos en cuanto a que las medidas cautelares que se fijen durante la tramitación del proceso deben ser excepcionales. Fundadas y en algunos casos no pueden exceder determinados plazos.

Cabe destacar que en la mayoría de los proyectos estas medidas son asimiladas a la prisión preventiva.

PRIVACIÓN DE LIBERTAD:

En este punto también hay coincidencias en cuanto a la excepcionalidad de la medida surgiendo diferencias en cuanto a los tiempos máximos que se puede extender la medida.

También se prevén distintas modalidades de privación de libertad, como ser la domiciliaria, la privación de libertad en tiempo libre o fines de semana y el alojamiento en centros especializados.

PROYECTO	EXENTOS DE RESPONSABILIDAD PENAL	FINALIZACIÓN ANTICIPADA DEL PROCESO		
		Criterio de Oportunidad de Remisión	Mediación o conciliación	suspensión juicio a Prueba
Urtubey	Medida de protección especial	Remisión para 3 años de máxima		Para delitos de 6 años de máxima
Pérez	Ídem Ley 22.278			
	Intervención del organismo competente	Remisión por hecho o bien jurídico Criterio de oportunidad	Mediación penal juvenil con equipo interdisciplinario	Penas que no excedan los 2 años
Spatola		Criterio de oportunidad	Conciliación para delitos que no sancionados con privación de libertad	Delitos donde no procede la privación de libertad
Perceval		Criterio de oportunidad	Conciliación para delitos que no sancionados con privación de libertad	Cuando no procede privación de libertad y cuando proceda ejecución condicional
García Méndez		Criterio de oportunidad	Conciliación para delitos que no sancionados con privación de libertad	Delitos no sancionados con privación de libertad
Vanossi	Agencias de protección de derechos	Criterio de oportunidad	Conciliación para delitos que no sancionados con privación de libertad	Delitos no sancionados con privación de libertad
PRO	Organismos administrativos competentes en materia de niñez		Mediación penal juvenil para causas correccionales	

Ibarra		Criterio de oportunidad	Conciliación para delitos que no sancionados con privación de libertad	Delitos no sancionados con privación de libertad
Escudero		Criterio de oportunidad	Mediación penal	Delitos no sancionados con privación de libertad
Leguizamón		Criterio de oportunidad	Conciliación para delitos cuya pena no supere los 3 años	Casos en los que proceda la ejecución condicional de la sanción

EXENTOS DE RESPONSABILIDAD PENAL:

Esta cuestión no es tratada por los proyectos y algunos solamente hacen una mínima referencia a una intervención similar a la medida de protección especial prevista en la Ley 26.061

FINALIZACIÓN ANTICIPADA DEL PROCESO:

La mayoría de los proyectos proponen el criterio de oportunidad reglado, que se traduce en la posibilidad que tiene el ministerio público fiscal de solicitar fundadamente al juez interviniente, que prescinda total o parcialmente de la acción penal contra algunas de las personas que hayan participado en el hecho, siempre y cuando se presenten determinadas circunstancias referidas a cuestiones personales o fácticas.

MEDIACIÓN O CONCILIACIÓN:

La mayoría de los proyectos contemplan esta figura como un proceso voluntario en el que participen todas las partes del proceso, esto es: el imputado, la víctima, el ministerio público y la defensa. En algunos además se prevé la participación de los padres de los jóvenes involucrados.

La idea es propiciar acuerdos que impliquen una resolución alternativa del conflicto que diera origen al proceso pena.

Esta figura estaría prevista para aquellos delitos que no tiene prevista una sanción privativa de libertad.

SUSPENSION DEL JUICIO A PRUEBA:

Esta medida es comúnmente denominada "Probation" y consiste en suspender el trámite del proceso imponiéndole al joven una serie de reglas que una vez cumplidas permiten la extinción de la acción penal.

Esta medida estaría prevista para aquellos delitos que no tienen prevista una sanción privativa de libertad.

ANEXO 2
SÍNTESIS CRONOLÓGICA DE LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA
NIÑEZ/INFANCIA

Filgueira, Risso – Irigoin y Leguizamón Universidad del Salvador (2004)

CAPÍTULO II

“Consejo Nacional del Menor y la Familia”

Reseña Histórica del Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia

(Antecedentes del actual Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, período (1600 – 2001))

El problema de la infancia desamparada, por su magnitud, pervive en todo tiempo y latitud con rigurosa actualidad, a pesar del progreso material y del empeño de las naciones más prósperas y desarrolladas.

Pareciera, por el contrario que nuevos aspectos de tremenda envergadura asoman a medida que se atenúan otros más antiguos, tales como los atribuidos a familias incompletas, falta de vivienda, dificultad de aprendizaje, debilidad de espíritu, perversidad instintiva, enfermedad grave de los padres, o simplemente falta de oportunidad en medio hostil o indiferente. Sobre esto se ha trabajado y existe vasta experiencia en nuestro país desde épocas anteriores al Virreinato del Río de la Plata.

Los hitos memorables de la protección a la niñez, son: La Hermandad de la Santa Caridad con la Fundación del Colegio de Huérfanas (1755); la Casa de Niños Expósitos (1779); la benemérita acción de la Sociedad de Beneficencia de la Capital (1823); Obras de Don Bosco (1894); el Patronato de la Infancia (1892); la promulgación de la Ley 10903; las consecuencias de la 1ar. y 2da. Conferencia de la Infancia Abandonada y Delincuente; la obra del Patronato Nacional de Menores (1931); la Dirección de Menores (1946); la creación del Consejo del Menor (1957); la Subsecretaría de la Minoridad y la Familia con sus modernos conceptos de familia substituta y restricción de la internación del niño en establecimientos públicos (1971) hasta llegar al actual Consejo de Niñez, Adolescencia y Familia (2001).

a) Síntesis cronológica

1600: Funcionarios secundarios del Gobernador y Justicia Civil estaban afectados en atención de casos de menores abandonados.

1622: Nació la “Casa de Recogidas” que brindó amparo a jóvenes huérfanas y honestas

1624 : Por orden del Cabildo se crea el cargo de Defensor de Menores.

1727: Un grupo de vecinos de Buenos Aires ante tantas muertes ocasionadas por las diversas enfermedades decide crear la “Hermandad de la Santa Caridad de Nuestro Señor Jesucristo”.

1755: La Hermandad de la Santa Caridad funda el “Colegio de Huérfanas” con el nombre de “Colegio de Nuestra Señora de los Remedios” para niñas huérfanas de sangre limpia.

1779: A instancias del Síndico Procurador General Miguel de Riglos, el Virrey Juan José de Vértiz funda la “Real Casa de Niños Expósitos”, en un antiguo edificio de los Regulares Expulsos colocándose en su entrada un torno y arriba un cartel que decía: “Mi padre y mi madre me arrojan de si y la piedad divina me recoge aquí” Fue su primer director don Martín de Sarratea, quién escribió en la primera página del libro llamado -de filiación- “Todo debe hacerse para el pueblo y nada por él”.

1817: El 16 de septiembre ingresa a dirigir la Real Casa de Expósitos don Saturnino Segurola quién redacta un reglamento, e inaugura una enfermería para atender a los niños enfermos de la casa de expósitos.

1821: En el Gobierno de Martín Rodríguez, el cargo de Defensor de Pobres y Menores debía desempeñado por un abogado o un procurador.

1821: El 1º de julio el gobierno de Martín Rodríguez dicta un decreto refrendado por su ministro Bernardino Rivadavia en donde disuelve la “Hermandad de la Santa Caridad de Nuestro Señor Jesucristo”.

1823: Este mismo gobierno crea el 2 de enero la Sociedad de Beneficencia fueron sus atribuciones 1) La dirección e inspección de las escuelas de niñas; 2) La dirección de la Casa de Partos Públicos y Ocultos; Hospital de Mujeres, el Colegio de Huérfanas y todo establecimiento público dirigido al bien de los individuos” fue su primera Presidenta doña Mercedes de Lasala de Riglos y su secretaria doña Mariquita Sánchez de Mendeville. El 25 de abril don Bernardino puso el “Colegio de Huérfanas” bajo al dirección de la Sociedad de Beneficencia, confiando su organización a la señora de Mendeville.

1824: El 9 de febrero Bernardino Rivadavia ofrece a la Sociedad de Beneficencia la dirección de la “Real Casa de Expósitos”.

1832: El 27 de abril Juan Manuel de Rosas dispone el cese de las casas a cargo de la Sociedad de Beneficencia si no alcanzan para su sostén las cantidades aportadas por sus padres, el único hospicio que continuó funcionando fue el “Colegio de Huérfanas, a cargo y expensa de doña Crescencia Boado de Garrigós.

1838: El 17 de abril Juan Manuel de Rosas dispuso también en cierre de la “Casa de Expósitos” y que se repartieran los niños entre las personas que tengan la caridad de recibirlos.

1852: Durante el gobierno de Valentín Alsina, la Sociedad de Beneficencia recupera sus derechos, abriendo sus puertas de la Casa de Expósitos el 20 de noviembre por gestiones de doña Mariquita Sánchez de Mendeville, que cubrió los gastos con fuerte sumas de dinero.

1870: La Sociedad de Beneficencia funda el asilo para Corrección de mujeres jóvenes y adultas con el nombre de Asilo de la Pobreza y del Trabajo, este asilo se cerro en 1887 pasando las internas a las defensorias y a la Casa del Buen Pastor.

1873: La “Casa de Niños Expósitos” fue trasladada a la calle Montes de Oca, y sustituyó el torno por la Oficina de Recepción. Cambia de nombre por Casa Cuna hoy conocida por Hospital de Niños “Pedro de Elizalde”.

1898: El 1º de enero se habilitó la Casa Correccional de menores.

1905: El 2 de septiembre el director de la Casa Correccional don José Duffy, obtuvo la creación de la oficina Médico – Legal donde se realizaron los primeros estudios psicológicos sobre los menores, la organización de esta Oficina estuvo a cargo del Dr. Carlos de Arenaza (médico-legista). Los informes emitidos por el Dr. Arenaza sobre la influencia que padres y

medio ambiente ejercen sobre el menor delincuente fueron ratificados por The White House Conference, en Nueva York, 1930.

1915: El 2 de octubre se crea por decreto del Poder Ejecutivo la Comisión Honoraria de Superintendencia con el objeto de que administrara el Reformatorio de Marcos Paz a los que se le cambió el nombre por "Colonia Nacional de Menores Varones" Esta Comisión dura muy poco tiempo dado que carecía de presupuesto.

1925: La Sociedad de Beneficencia inaugura la "Casa de Huérfanas –Crescencia Boado de Garrigós" con la población de la que fuera antigua Casa de Huérfanas de San Miguel, juntamente con el instituto Pizarro y Monjes en terrenos que pertenecieron a los jesuitas en la zona de La Paternal.

1927: Creación de la escuela de Artesanos "Almafuerte", adscripta a la Comisión de Superintendencia.

1931: Creación del Patronato Nacional de Menores bajo la dirección de una Comisión Honoraria designada por el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública. Siendo su primer Presidente el Dr. Jorge Eduardo Coll. Decreto de fecha: 24/01/1931.

1933: Se anexa al Patronato Nacional de Menores el "Colegio Carlos Pellegrini" de la localidad de Pilar (creado por el Patronato Nacional de Menores).

1935: Se crea la Colonia Hogar "Ortiz Basualdo" en la localidad de Las Armas, -Prov. de Bs. As. y la Colonia Cayetano Zibecchi en la localidad de Juárez.-Prov. de Bs. As. (creados por el Patronato Nacional de Menores) estos dos son Establecimientos Agrícolas Ganaderos.

1937: Se inaugura el Instituto José Sánchez Picado en la calle Chivilcoy 3301 – Capital y la Colonia Nacional de Olivera- Prov. de Bs. As.(creados por el Patronato Nacional de Menores).

1938: Amparo Santa Rosa, transformado en 1939 en Hogar Santa Rosa para clasificación de niñas con problemas de conducta, (creado en el ámbito de la Asociación Tutelar de Menores) ubicado en la Avda. Belgrano 2670; hoy es el Instituto Manuel Belgrano para varones.

1942: Se Inaugura el Hogar Santa Rita hoy llamado Carlos de Arenaza en la localidad de Boulogne – Prov. de Bs. As. (creado por el Patronato Nacional de Menores).

1943: Se inaugura el Establecimiento Los Arenales hoy Instituto Nuestra Señora de Fátima, en la localidad de Maschwitz , Prov. de Bs. As. (creado por el Patronato Nacional de Menores).

1946: Creación de la Dirección de Menores. Incorpora todos los establecimientos de menores; de la ex Comisión Honoraria del Patronato; los pertenecientes a la Sociedad de Beneficencia (que había sido disuelta); de los Ministerio de Justicia e Instrucción Pública: del Interior y de Relaciones Exteriores y Culto, y también de entidades privadas.

1949: Se integra la Dirección de Menores a la Dirección Nacional de Asistencia Social, dependiente del Ministerio de Trabajo y Previsión. Ley 13.341/48 y Decreto Reglamentario 20492/49.

1957: Se crea por Decreto-Ley 5.285/57 el Consejo Nacional del Menor.

1960: Creación del Consejo Nacional de Protección de Menores. Ley 15.244/59 y Decreto Reglamentario 1143/60.

1967: Creación de la Secretaría de Promoción y Asistencia a la Comunidad en la esfera del Ministerio de Bienestar Social, con jurisdicción sobre el Consejo de Menores.

1968: La Secretaría de Promoción y Asistencia a la Comunidad (SEPAC) propone dos direcciones generales: la de Asistencia Comunitaria comprende el Servicio Nacional del Menor y el Servicio Nacional de la Familia y la Mujer.

1969: Por Ley 18.120 se disuelve el Consejo de Protección de Menores y por Decreto N° 448 del 31-01-69 se crea el Servicio Nacional de la Minoridad, dependiente de la Secretaría de Estado de Promoción y Asistencia de la Comunidad.

1971: Creación de la Subsecretaría de Estado del Menor y la Familia.

1973: Por Decreto N° 339/73 del 20-11-73, se crea la Secretaría de Estado del Menor y la Familia.

1983: La Subsecretaría del Menor y la Familia pasa a ser Secretaría de Desarrollo Humano y Familia.

1987: Por Decreto N° 280/87 del 26-02-87 la Subsecretaría del Menor y la Familia pasa a denominarse Subsecretaría del Menor, Discapacitados y Tercera Edad.

1990: Creación en jurisdicción del Ministerio de Salud y Acción Social del Consejo Nacional del Menor y la Familia, por Decreto N° 1.606/90.

1994: El Consejo Nacional del Menor y la Familia como organismo descentralizado pasa a depender de la Secretaría de Desarrollo Social, Presidencia de la Nación.

1999: Por Decreto 20/99 se incorporó al Consejo Nacional del Menor y la Familia en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente.

2001: Cambio de denominación del Consejo por el de Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. Continuando como organismo descentralizado dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social del Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente. Decreto 295/2001.¹⁰

¹⁰ Síntesis preparada en base a los documentos y publicaciones existentes en la Biblioteca Especializada y Centro de Información Bibliográfica y Documentaria “Dr. Jorge E. Coll”.